

«RIT»

Foja: 1

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 5° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-16193-2016
CARATULADO : ARIAS / FISCO DE CHILE

Santiago, veinticuatro de Diciembre de dos mil diecinueve

VISTOS:

A fojas 1, doña Lilian Marilyn Arias Vergara, dueña de casa, domiciliada en calle 18 Sur 1 1/2 Poniente N° 689, comuna de Talca, VII Región del Maule; doña Angelina del Pilar Arias Vergara, técnico en turismo, domiciliada en San Guillermo N° 1410, ciudad de Villarrica, IX Región de la Araucanía; don Pedro Luis Arias Vergara, trabajador, domiciliado en Caracas, Venezuela; don Manuel Alejandro Arias Vergara, fallecido el 15 de abril de 2009, representado por su hijo don Manuel Alejandro Arias Acevedo, vigilante privado, domiciliado en 33 Oriente 6 1 ½ Sur N° 520, Villa Jardín del Este, comuna de Talca, Región del Maule; don Raúl Arias Vergara, fallecido el 16 de febrero de 2003, representado por su cónyuge sobreviviente doña María Inés Contreras Alvear, dueña de casa, domiciliada en 4 Poniente 19 1 1/2 Sur N° 0192, comuna de Talca, Región del Maule, y sus hijos don Manuel Jesús Arias Contreras, trabajador industrial, domiciliado en 23 Oriente, 22 Norte B N° 3112, comuna de Talca, Región del Maule; doña Yesenia del Pilar Arias Contreras, asistente de párvulos, domiciliada en 4 Poniente 19 1 1/2 Sur N° 0192, comuna de Talca, Región del Maule y doña Valeria Andrea Arias Contreras, reponedora, domiciliada en 4 Poniente 19 1 1/2 Sur N° 0192, ciudad de Talca, Región del Maule, todos en su calidad de hijos o sucesores, sea de manera directa o por representación de don Manuel Jesús Arias Zúñiga, detenido desaparecido desde el 13 de noviembre de 1973; doña Rosa Inés Santana Figueroa, manipuladora de alimentos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, domiciliada en calle 5 1/2 Sur N° 3146, Población San Luis 3, comuna de Talca, VII Región del Maule, en su calidad de hermana de Alamiro Segundo Santana Figueroa, detenido desaparecido desde el 17 de septiembre de 1973; don Roberto Exequiel Verdejo Quichel, empleado, domiciliado en 18 Norte A-1019, comuna de Talca, VII Región del Maule; doña Edith Elizabeth Verdejo Quichel, dueña de casa, domiciliada en San



«RIT»

Foja: 1

Francisco N° 3744, Villa Santa Teresa, comuna La Florida, Región Metropolitana; don Leonel Omar Verdejo Quichel, contador, domiciliado en Paseo Los Olivos N° 3701, departamento N° 33, Villa Santa Teresa, comuna de La Florida, Región Metropolitana; doña Ariela del Carmen Verdejo Quichel, dueña de casa, domiciliada en Rancagua Sur N° 1419, departamento F, 4° piso, comuna de Rancagua, VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, y doña Irene Quichel Carrasco, dueña de casa, domiciliada en 14 Norte 1 Oriente y 1 Poniente, N° 761, Villa Ríos, ciudad de Talca, en su calidad de pareja durante los últimos 15 años de su vida y madre de todos los hijos de don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, detenido desaparecido desde el 6 de noviembre de 1973, hijos todos que concurren por sí; doña Mireya Adriana Rivera Veliz, viuda de don Enrique Coussy, dueña de casa, domiciliada calle Chapiquina N° 0604, Villa Ignacio Serrano, comuna de La Granja, Región Metropolitana; don Enrique Antonio Coussy Rivera, ingeniero civil, domiciliado en Villarrica N° 8934, comuna de La Florida, Región Metropolitana; doña Carolina Antonieta Coussy Rivera, profesora, domiciliada en Francia, N° 45 Boulevard Loingchamp, 13001, Marsella; doña Gisela Angélica Coussy Rivera, dueña de casa, domiciliada en calle Chapiquina N° 0604, Villa Ignacio Serrano, comuna de La Granja, Región Metropolitana; don Alexseis Wladimir Coussy Rivera, trabajador, domiciliado en calle Chapiquina N° 0604, Villa Ignacio Serrano, comuna de La Granja, todos en su calidad de cónyuge sobreviviente e hijos legítimos, respectivamente, de don Plutarco Enrique Coussy Benavides, dirigente sindical de Endesa, detenido en el Bus de la empresa cuando se dirigía a la Central El Toro el 21 de septiembre de 1973 y desaparecido desde esa fecha; doña Irma Inés Badillo Mellado, dueña de casa, domiciliada en calle Colon N° 350, comuna de Antuco, ciudad de Los Ángeles, Región del Bío Bío; don Raúl Vicente Badillo Mellado, trabajador, domiciliado en Pasaje Los Mañíos N° 28, Antuco; y las hijas de doña Marta Jesús Badillo Mellado, fallecida el 13 de noviembre del año 2004, doña Guillermina Carmen Mellado Badillo, trabajadora, domiciliada en calle Almagro s/n, Antuco y doña Tais Elena Gallegos Badillo, estudiante, menor de edad, representada por su padre don Edgardo Julio Gallegos Mellado, ambos domiciliados en Colon N° 350, Antuco, hijos



«RIT»

Foja: 1

por sí y en representación de don José Oscar Badillo García, detenido desaparecido desde el 6 de noviembre de 1973; todos los comparecientes en su calidad de demandantes, a través de sus mandatarios judiciales, abogados Roberto Celedón Fernández y María Mercedes Bulnes Núñez, domiciliados todos para estos efectos en Pasaje Phillips N° 16, 5° piso, Oficina X, comuna de Santiago, con excepción de las actoras doña Lilian Arias Vergara, doña Irene Quichel Carrasco y doña Mireya Rivera Veliz, quienes comparecen por sí ante el tribunal.

Demandan conjuntamente, en sus calidades de cónyuge, conviviente y/o hijos de don Manuel Jesús Arias Zúñiga, don Alamiro Segundo Santana Figueroa, don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, don Plutarco Enrique Coussy Benavides y don José Oscar Badillo García, todos ex trabajadores de la Empresa Nacional de Electricidad S.A., ENDESA, a septiembre de 1973, reconocidos como detenidos desaparecidos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y declarados judicialmente como víctimas de los delitos de secuestros calificados por sentencia ejecutoriada en causa penal Rol N° 2.182-98 (Episodio Endesa), de la Corte de Apelaciones de Santiago, seguida ante el Ministro de Fuego don Jorge Zepeda Arancibia, en calidad de partes lesionadas por dichos delitos, en cuyo mérito dirigen acción civil de reparación e indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Ignacio Pina Rochefort, abogado, domiciliado en Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, y en contra de la empresa Endesa S.A., la que a la fecha de ocurrir los hechos ilícitos era una empresa de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, perteneciente al Estado de Chile, representada por su actual Gerente General, don Valter Mora, desconoce segundo apellido, ingeniero mecánico, domiciliado en Santa Rosa N° 76, comuna de Santiago, en razón de los antecedentes de hecho y derecho que exponen.

Señalan que atendido el carácter vinculante de la Constitución Política del Estado, de acuerdo al artículo 6° y lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 1° e inciso 2° del artículo 5° y las normas pertinentes del Código del Trabajo vigente a la época, demandan también a la Empresa Nacional de Electricidad S.A., denominada Endesa o Endesa Chile. Los



«RIT»

Foja: 1

responsables del golpe de Estado nombraron a personas de confianza del nuevo régimen. Es un hecho público que la Empresa Nacional de Electricidad S.A., Endesa, a fines de la dictadura cívico militar, fue privatizada, adquiriéndola los últimos ejecutivos de la misma, quienes impulsaron su privatización, aprovechando el estatuto jurídico propio que tenía, asimilable a una empresa del sector privado, bajo la envoltura de un “capitalismo popular”, que feneció rápidamente en las ofertas únicas de compra de acciones (OPA), asumiendo su total control. Los mismos antiguos ejecutivos que tomaron el control de Endesa privatizada, vendieron sus acciones a Endesa España y, esta hace algunos años, transfirió el control de la misma al grupo transnacional italiano, denominado Grupo ENEL. Independientemente de los que han tomado el control de la empresa Endesa S.A. después de su privatización, son y han sido sucesores o continuadores legales de esta misma empresa que fue fundada y/o constituida por la Corfo, entidad que jugó un rol fundamental en el proceso de industrialización de Chile desde la década del 40 del siglo pasado hasta el golpe de Estado de 1973.

Agregan que si bien el proceso judicial, llevado finalmente por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Jorge Zepeda Arancibia, se limitó a determinar la responsabilidad penal de los uniformados partícipes de los delitos de secuestros y homicidios calificados investigados en la causa penal Rol 2.182-98 (Episodio Endesa), del análisis de todos los antecedentes reunidos en esa causa criminal no cabe la menor duda de que hubo complicidad de quienes dirigían Endesa, en especial de aquellos que tenían puestos de dirección en la Central Hidroeléctrica El Toro, - inaugurada el 15 de junio de 1973, en el Gobierno del Presidente Salvador Allende- y Abanico, del año 1948, sea por acción (delación o entrega de trabajadores a organismos represivos) sea por omisión del deber de garante de la protección de los trabajadores.

Indican que sus familiares fueron detenidos en las Villa Los Canelos y Abanico, en dependencias y/o en buses de la empresa, para luego desaparecer hasta el día de hoy. Los ejecutivos de Endesa nada hicieron en la defensa de la libertad y vida de ellos y no tienen duda moral de que fueron perseguidos única y exclusivamente por sus convicciones políticas,



«RIT»

Foja: 1

partidarias del Gobierno constitucional de Chile, dirigido por el Presidente Salvador Allende Gossens.

Sostienen que demandan a Endesa S.A. a fin de que se les pague, como familiares de cada uno de los trabajadores víctimas individualizados en la presente demanda, por concepto de daño directo y lucro cesante consistente en todos los derechos laborales que les hubiesen correspondido percibir, en caso de despido legal, tales como salarios, vacaciones e indemnizaciones por años de servicios, con los debidos reajustes que nuestra legislación laboral considera hasta el efectivo pago de las mismas. En subsidio, por iguales montos lo demandan como indemnización por daño moral. La familia de uno de los trabajadores detenidos desaparecidos conserva la comunicación de despido por abandono de trabajo, enviada 5 días después de su detención y desaparición. Asimismo, por concepto de reparación, solicitarán que se construya un memorial en recuerdo y homenaje de ellos como, asimismo, de todos los trabajadores de Endesa que fueron víctimas de homicidio, secuestro, detención y tortura durante la cruel dictadura.

En cuanto a los hechos, afirman que sus fuentes son las siguientes:

1.- Sentencia condenatoria en contra de Agentes del Estado, y ejecutoria de la misma.

2.- Información recogida, investigada y considerada fundadamente como veraz por la Comisión de Verdad y Reconciliación, conocida como Informe Rettig.

3.- Información sobre las víctimas extraídas de la página web de Memoria Viva.

4.- Testimonio personal de los actores de la presente causa sobre la afectación causada a ellos como víctimas.

En cuanto al Juicio penal, señalan que los delitos de que fueron víctima don Manuel Arias Zúñiga, don Alamiro Santana Figueroa, don Plutarco Coussy Benavides, don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, don José Oscar Badilla García, son de secuestro calificado y se encuentran pormenorizadamente descritos, establecidos y determinados por sentencia definitiva de primera instancia, de fecha 18 de noviembre de 2010, dictada en los autos Rol 2.182-98, (Episodio Endesa) por don Jorge Zepeda



«RIT»

Foja: 1

Arancibia, Ministro de Fuero, la que fue modificada parcialmente en cuanto a los acusados por la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 25 de octubre de 2013. A su vez, la Corte Suprema, con fecha 23 de octubre de 2014, rechazó los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Indican que por estos gravísimos delitos, considerados delitos de lesa humanidad, fueron condenados en sentencia de segunda instancia de la Corte de Apelaciones de Santiago, el Mayor del Ejército -al año 1973- Patricio Gustavo Martínez Moena, como autor de los delitos de homicidios calificados y de secuestros calificados, entre otros, de los trabajadores de Endesa don Alamiro Segundo Santana Figueroa, Plutarco Coussy Benavides, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo y José Oscar Badilla Garda. Esta misma sentencia, condenó al Teniente -al año 1973- Walter Klug Rivera, en calidad de cómplice de los mismos ilícitos de Martínez Moena. Asimismo, se condenó al Teniente, al año 1973, Ismael Humberto Espinosa Silva como autor del delito de secuestro calificado de don Manuel Arias Zúñiga.

Precisan que la sentencia de terminó se encuentra debidamente ejecutoriada.

Arguyen que en el fallo referido, en cuanto al primer elemento constitutivo de los delitos de lesa de humanidad, “cometidas mediante la actuación activa de los agentes del Estado”, se encuentran no solo a los agentes uniformados sino también a agentes del Estado que colaboraban con éstos como ejecutivos de la empresa Endesa S.A., de Iansa S.A., dependientes en sus funciones de ejecutivos superiores del orden militar.

Agregan que, en cuanto al segundo elemento constitutivo de los delitos de lesa humanidad, se encuentra que el acusado Walther Klug Rivera y su defensa, abogado don José Antonio Villanueva Prieto, aportaron una cantidad de información insospechada que acredita absolutamente que “los hechos delictivos se dieron en el contexto de un plan o política”, “parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, o parte de ella, con conocimiento de dicho ataque”. El escrito de contestación de la acusación acompañado a fojas 2954 de los autos penales Rol N° 2182-1998,



«RIT»

Foja: 1

reiterado a fojas 3982, con fecha 03-01-2008, que el Ministro don Jorge Zepeda Arancibia lo recoge en su análisis de la responsabilidad del señor Klug, desde la página 27 a 34 de la sentencia de primera instancia.

Manifiestan que la técnica nazi de mentir y mentir “que algo queda” y de aterrorizar a la población civil, o a una parte de ella, fue una estrategia y plan desarrollado sistemáticamente para asentarse en el poder. En la confesión del acusado Walter Klug Rivera, absuelto en primera instancia, pero condenado en la sentencia de segunda instancia, queda en evidencia que en todos estos crímenes de lesa humanidad participaron tanto civiles como militares, que los responsables son muchos más de los que efectivamente han sido perseguidos, así como que los mandos superiores no respondieron de sus acciones ni asumieron la responsabilidad del mando y, peor aún, cobardemente, trataron de encubrirse en sus subordinados.

Señalan que en definitiva, el ex Mayor Patricio Gustavo Martínez Moena fue condenado como autor de los delitos de homicidio calificado y secuestro calificado, cuyas víctimas han sido individualizadas en el cuerpo de la presente demanda; como cómplice de los mismos delitos el ex Teniente Walter Klug Rivera; y como autor de secuestro calificado al ex Teniente Ismael Humberto Espinoza Silva. Los dos primeros, autor y cómplice de los delitos de secuestro calificado de don Plutarco Coussy Benavides, don Alamiro Santana Figueroa, don José Badillo García y don Exequiel Verdejo Verdejo, todos trabajadores de Endesa S.A. y el tercero, Ismael Espinoza Silva, autor de secuestro calificado en la persona de don Manuel Jesús Arias Zuniga, desaparecido el 13 de noviembre de 1973, también trabajador de Endesa S.A.

En cuanto al Informe Rettig, el Presidente de la Republica don Patricio Aylwin Azocar (1990-1994) constituyó por decreto supremo la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, y el 4 de marzo de 1991, se le entregó al Presidente de la Republica el Informe de la Comisión, que pasó a ser conocido como Informe Rettig.

Señalan que en dicho informe se recogen los casos investigados en la causa penal Rol N° 2182-98, Episodio Endesa, de la Corte de Apelaciones de Santiago, ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y fines de ese mismo año, todas ellas con resultado de muerte o desaparición, adquiriendo



Foja: 1

la Comisión convicción de que existió responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio.

En cuanto a la información de Memoria Viva, indican que como fuente complementaria y de alta credibilidad, reproducen en el libelo la información contenida en dicha página web, refiriéndose a la situación descrita respecto de los familiares de los demandantes, y agregando el caso de don Mario Olivares Pérez, que contiene información complementaria sobre lo sufrido y el rol jugado por funcionarios de Endesa, en especial uno de apellido Rojas.

Expresan que en esta fuente abierta de información, se refleja con mayor visibilidad el *vía crucis* de los familiares en la búsqueda de sus seres queridos. Añaden que se aprecia la frialdad y la política de sus victimarios de “lavarse las manos”, con la simple negación, con solo decir “por aquí no han pasado, no lo hemos visto ni registrado sus nombres”.

Luego, consignan en el libelo el testimonio directo de los demandantes, en los que explican su vivencia personal en relación con la desaparición de sus familiares.

En cuanto al primer sujeto pasivo de la acción de autos, exponen que de acuerdo a nuestra legislación, habiendo actuado los condenados, todos a la sazón oficiales del Ejército de Chile, en su calidad de agentes del Estado, según se encuentra establecido en la sentencia penal ejecutoriada en la citada causa Rol N° 2.182-98, la presente acción preparatoria e indemnizatoria se dirige en contra del Fisco de Chile. Las actuaciones de estos agentes, siguiendo las directrices y órdenes de quienes se tomaron el poder del Estado, constituyendo la Junta Militar de Gobierno, acarrea la responsabilidad, entre otras, la civil, por los delitos de lesa humanidad cometidos en perjuicio de las víctimas de los ilícitos de secuestros calificados, considerados internacionalmente como delitos de desaparición forzosa de personas, también denominados detenidos desaparecidos, y obliga al Fisco de Chile a reparar los perjuicios que se siguieron del actuar de los agentes, por así exigirlo la Constitución Política del Estado, los instrumentos internacionales de derechos humanitarios y de derechos humanos, siendo la responsabilidad, no solo la de orden penal sino también la civil, imprescriptibles.



«RIT»

Foja: 1

Señalan que en cuanto al segundo sujeto pasivo de la acción civil ejercida en estos autos: La Empresa Nacional de Electricidad S.A., Endesa S.A., también Endesa Chile, a la fecha que ocurrieron todos los ilícitos denunciados en el referido proceso penal era una de las empresa de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, perteneciente al Estado de Chile, con un estatuto jurídico propio, que le permitía una administración autónoma, de alto nivel profesional, que junto a otras fue la principal promotora del proceso de industrialización de Chile. A causa del golpe de Estado de 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas toman el control de esta empresa, exonerando a sus autoridades y nombrando a otras, pertenecientes a las Fuerzas Armadas en servicio activo y otras jubilados de las mismas. Al final del período dictatorial, esta empresa fue privatizada, siendo continuadora legal de Endesa S.A. y de todo su patrimonio.

Sostienen que los agentes de esta empresa, hoy privatizada y transnacionalizada, jugaron un rol fundamental en la cruenta y odiosa persecución de la que fueron trabajadores de Endesa S.A. de la central hidroeléctrica El Toro y el Abanico así como sus dirigentes sindicales. Actuaron en concomitancia con otros civiles, en una activa colaboración con los agentes represivos en la zona, principalmente militares y carabineros, y como informa la Comisión Rettig, contaron con la activa participación de miembros políticos de extrema derecha y de agricultores y otros actores productivos que participaron en la estructura de poder de la dictadura cívico militar. Basta leer la sentencia penal de primera instancia del llamado “Episodio Endesa” y la contestación de la acusación del teniente Walter Klug para comprender el importante rol que jugaron civiles, con gravitantes influencias en el actor militar, en la represión criminal.

En cuanto a la procedencia de la acción indemnizatoria, indican que a pesar que la Constitución Política manifiesta que la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por la misma, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes (inciso 2° del artículo 5°) y que los preceptos de la Constitución obligan



«RIT»

Foja: 1

tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo (artículo 6°), tratándose de demandas civiles de reparación e indemnización la experiencia nos enseña que en esta materia nos encontramos con una férrea oposición del Consejo de Defensa del Estado como si la política de Estado del Nunca Más se agotase solo en el ejercicio del *ius puniendi* y no la comprendiese también la *restitutio in integrum*.

Arguyen que de todo delito nace una acción penal para perseguir a los responsables y una acción civil tendiente a reparar los daños provocados por el ilícito. La sentencia condenatoria referida a lo largo de este escrito, ya ejecutoriada, da certeza jurídica de que se ha cometido en contra de los familiares individualizados el delito de Secuestro calificado, sancionado en el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época en que fueron víctima del hecho punible.

Expresan que obtuvieron el bien de la Justicia que sancionó a algunos de los culpables del delito de secuestro calificado de sus seres queridos, después de 23 años de haberse iniciado el proceso de transición a la democracia, a pesar que el caso de sus víctimas fue denunciado oportunamente a la Comisión Rettig, cuyo Informe es de 4 de marzo de 1991.

Afirman que solo después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre de 2006, en el caso de Juan Almonacid contra el Estado de Chile, se logró que los tribunales chilenos terminasen progresivamente con la auto amnistía como causal de exoneración de responsabilidad penal, reconociéndose además la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Agregan que no ha pasado lo mismo con la acción civil de reparación, que de manera amplia reconoce la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63 que cita.

Indican que contradiciendo la lógica y las máximas de la experiencia, algunos pretenden aplicar las normas del Código Civil sobre la responsabilidad extrajudicial o aquiliana, la que estatuye que esta prescribe a los 4 años de haberse cometido el hecho ilícito (artículo 2314), es decir, entre septiembre y noviembre de 1977, en el presente caso. Para adornar lo



«RIT»

Foja: 1

grotesco introducen modificaciones -sin tener facultad para ello- diciendo que podría contarse los 4 años desde el inicio de la transición de la democracia o desde el Informe Rettig.

Manifiestan que desde luego, está comprometida la responsabilidad internacional del Estado pues agentes del Estado son los violadores de derechos humanos fundamentales como la vida, la libertad e integridad física y psíquica de las personas, además del derecho a un justo proceso, estando comprometido el derecho internacional Público y el Derecho Público nacional, como es la Constitución, el derecho Penal y el derecho Procesal Penal. Son inaplicables las normas del Código Civil de 1857.

Expresan que en reiterados escritos del Consejo de Defensa del Estado, en causas de derechos humanos, se cita una Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, argumentando que ella acreditaría que no hay normas internacionales y que, a pesar de no ser vinculante para los Estados una Resolución de la Asamblea General, su contenido permitiría concluir la ausencia de normas que declararen la imprescriptibilidad de la acción civil de reparación. Indican que aceptan que dicha resolución dirima esta aparente laguna de derecho. Se refieren a los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005.

Afirman que el objeto de esta Resolución dice directa relación con el objeto de la presente demanda: “sobre el derecho de las víctimas de las normas manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos [...] a interponer recursos y obtener reparaciones”. La Resolución trata sobre Principios y directrices básicos, ese es su marco normativo. Sobre materias que es por lo demás de la esencia de la Carta de las Naciones Unidas y su fundamento histórico. Así lo dice su Preámbulo:

“a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas,



«RIT»

Foja: 1

“a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”.

Señalan que no estamos frente a una Resolución adjetiva o sobre temas coyunturales. El Preámbulo de la Resolución 60/147 de la Asamblea General de 16.12.2005, así también lo expresa:

“Afirmando la importancia de abordar la cuestión del derecho a interponer recursos y obtener reparaciones de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario de manera sistemática y exhaustiva a nivel nacional e internacional,

“Reconociendo que, al hacer valer el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, la comunidad internacional hace honor a su palabra respecto del sufrimiento de las víctimas, los supervivientes y las generaciones futuras y reafirma el derecho internacional en la materia”.

Agregan que hace otra afirmación relevante. Esta Resolución es fruto de un trabajo que le antecede de dos órganos de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo Económico y Social:

“Recordando la aprobación de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 2005/35, de 19 de abril de 2005, y por el Consejo Económico y Social, en su resolución 2005/30, de 25 de julio de 2005, en la que el Consejo recomendó a la Asamblea General que aprobara los Principios y directrices básicos”.

Sostienen que los casos denunciados en la presente demanda corresponden, sin la menor duda, a “violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario, que por su carácter muy grave constituyen una afrenta a la dignidad humana”. La Resolución, a su vez, destaca que los “Principios y directrices básicos que figuran en el presente documento no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que



indican mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas existentes conforme a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que son complementarios, aunque diferentes en su contenido”.

Señalan que el documento Principios y directrices básicos, establece, primeramente, como obligación de los Estado el respetar y asegurar que se respeten las normas internacionales sobre derechos humanos:

Indican que la fuente jurídica del deber de reparación radica en el derecho internacional, siendo obligación del Estado incorporar a su derecho interno las normas internacionales, y de acuerdo al Capítulo II, “Alcance de la obligación”, numeral 3), de la referida Resolución de la Asamblea General, el deber de:

c) Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o del derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, como se describe más adelante, con independencia de quién resulte ser en definitiva el responsable de la violación; y

d) Proporcionar a las víctimas recursos eficaces, incluso reparación, como se describe más adelante.

Exponen que la Resolución 60/147, de 16 de diciembre de 2005 expresa lo siguiente sobre prescripción:

“6. Cuando así se disponga en un tratado aplicable o forme parte de otras obligaciones jurídicas internacionales, no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario que constituyan crímenes en virtud de derecho internacional.

7. Las disposiciones nacionales sobre la prescripción de otros tipos de violaciones que no constituyan crímenes en virtud del derecho internacional, incluida la prescripción de las acciones civiles y otros procedimientos, no deberían ser excesivamente restrictivas.”

Sostienen que cuando se está frente a crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, no hay prescripción. Sobre otros tipos de violaciones que no constituyen crímenes, da un criterio general “la prescripción de las acciones civiles no deberían ser excesivamente restrictivas”. Sin duda alguna, el homicidio de prisioneros de guerra, de civiles detenidos, la desaparición



«RIT»

Foja: 1

de personas (secuestro) constituyen violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario y se les califica y considera como delitos de lesa humanidad. La presente demanda civil de reparación de las víctimas se encuentra plenamente en la situación precedentemente descrita.

Afirman que resulta pertinente referirse a otras dos materias que trata la Resolución de las Naciones Unidas sobre Principios y Directrices Básicas, el concepto de víctimas y el concepto de reparación, en su Capítulo V, numeral 8 define el concepto de víctimas y todos los demandantes se comprenden dentro de este concepto y tienen derecho a disponer de recursos judiciales (acceso a la justicia) y de recibir una “reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido”.

Por su lado, señalan que el Capítulo IX de la Resolución trata sobre la “Reparación de los daños sufridos”, entre los numerales 15 a 23 de la misma.

Sostienen que respecto de la responsabilidad del Fisco de Chile y de la obligación de éste de reparar los perjuicios demandados, independientemente del hecho de que fueron sus agentes los que cometieron el delito, actuando con la protección del Estado y sus órganos, especialmente el Ejército de Chile a través de las actuaciones de oficiales del Regimiento de Los Ángeles, tanto la doctrina como la Jurisprudencia emanada de los Tribunales Superiores de Justicia es que la responsabilidad de los órganos del Estado por las lesiones que puedan causar sus agentes por violación a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario, se funda en los referidos tratados internacionales como en las normas de derecho público interno.

Indican que en el presente caso concurren dos fuentes normativas principales, cuales son:

- a. la propia Constitución Política del Estado y
- b. de derecho público internacional en materia de derechos humanos y del derecho humanitario.

Afirman que desde el punto de vista de derecho público nacional, ella descansa en el inciso 3 del artículo 1, en el inciso 2 del artículo 5, en el artículo 6 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República.



Manifiestan que el hecho que la norma constitucional separe el hecho, de la lesión del agente culposo, de acuerdo a la frase final del precepto “sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”, nos pone frente a lo que la doctrina denomina la responsabilidad objetiva del Estado, fundada ella en una norma de derecho público, distinta de la civil. El destacado e influyente jurista, Eduardo Soto Kloss, estima que atendido el Principio de la Supremacía Constitucional (en cuya virtud ninguna norma de rango inferior puede contradecirla) y del Principio “Pro Persona”, que consagra el artículo 1 del Texto Constitucional, en cuanto a que el Estado está al servicio de la persona, obliga poner en el centro a la persona lesionada en sus derechos por la “Administración del Estado” y no al tema de la culpa del funcionario que será una cuestión de carácter disciplinario - administrativa- que no empecen al lesionado.

Expresan que para que opere esta responsabilidad objetiva de la Administración basta que concurra de manera copulativa tres elementos, a saber:

- Lesión de un derecho.

- Lesión causada por un agente del Estado en el ejercicio de sus funciones.

- Relación causal entre los mismos.

Indican que se abstendrán de la discusión doctrinaria y jurisprudencial relativa a un concepto amplio o restringido de la responsabilidad objetiva del Estado, compartiendo que en un amplio campo del Derecho debe acreditarse la “falta de servicio” como causa de la responsabilidad del Estado. Por definición la comisión de delitos por funcionarios públicos es una falta de servicio, porque es transgredir el derecho y el marco legal del cumplimiento de sus funciones. En el presente caso, hay una sentencia judicial de carácter penal que determinó la responsabilidad de funcionarios activos (a la época), de oficiales de Ejército de Chile, en los delitos de secuestros calificado de que fueron víctimas los familiares.

Agregan que la segunda fuente normativa es el derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, ambos aplicables al año 1973. No hay duda que el secuestro calificado de que fueron víctimas



«RIT»

Foja: 1

sus familiares, en el contexto jurídico de un país en Estado de Sitio, sometido a la jurisdicción de los tribunales militares en tiempo de guerra, constituyen delitos de lesa humanidad. Sin citar a las Convenciones de Ginebra, plenamente vigente a la época, cita el artículo 7° del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Afirman que tratándose del delito de secuestro como crimen internacional, en contexto de persecuciones, torturas, desapariciones y otros tratos crueles e inhumanos en contra de un determinado grupo de la población civil, cuyos fundamentos fueron motivos políticos; crímenes los cuales son reprochados universalmente y sancionados criminalmente por el Derecho chileno, tal como quedó establecido en el fallo que condenó a los autores de los delitos en contra de nuestros familiares, la Comunidad Internacional es agraviada o afectada cuando se producen estos delitos.

Observan que a su vez, el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece un deber general de reparación a favor del lesionado en el goce de un derecho o libertad conculcado. Mandata expresamente a la Corte Interamericana cuando ella constate que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, a ordenar reparar las consecuencias de la vulneración de esos derechos y al pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Este deber no se encuentra restringido solo al órgano jurisdiccional internacional, sino que estamos frente a un mandato normativo (de carácter internacional pero internalizado en nuestro derecho interno con la ratificación por Chile de esta Convención) que compromete al Estado a adoptar medidas legislativas u otras de adecuación del derecho interno en virtud de lo dispuesto en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Refieren que este deber de adecuación de la legislación interna a la normativa de derechos humanos no es de carácter programático, sino que constituye un deber actual y exigible.

Expresan que en la sentencia de septiembre de 2006, de la Corte Interamericana en contra de Chile en el caso de Juan Almonacid, se estableció el deber de control de convencionalidad que pesa sobre los tribunales nacionales que los obliga a aplicar directamente la Convención Americana.



«RIT»

Foja: 1

En cuanto a la demandada Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa), hoy privatizada, estiman que, en lo sustancial, son aplicables las normas precedentemente antedichas, con el agregado que al ser las víctimas trabajadores de Endesa, sus relaciones estaban directamente reguladas por un contrato laboral y por el Código del Trabajo vigente a la época, todos los cuales les fueron conculcados con graves perjuicios a sus familias. Esta relación personal, directa y contractual obliga exclusivamente a Endesa S.A. y no al Fisco de Chile.

Sostienen que acompañarán como prueba un documento que ilustrará a esta situación. La cónyuge de don Plutarco Coussy Benavides, la demandante doña Mireya Rivera, recibió en su domicilio de la época, una carta con el logotipo de Endesa, Oficinas Santa Rosa 76, Santiago de Chile, bajo el N° 2794, del tenor siguiente:

“Central Antuco, 26 de septiembre de 1973.

Señor

Enrique Coussy Benavides

Presente

Muy señor mío:

Por la presente comunicamos a Ud. Que, con esta fecha, se ha puesto término a su Contrato de Trabajo, en virtud de las causales indicadas en el punto N° 6 del artículo 2 de la ley N° 16.455 y las letras a y d del artículo o del Decreto-ley N° 32. Saluda a Ud.

MARIO CAMPERO QUEZADA JEFE C. ANTUCO Y OCAP

cc: Inspección del Trabajo de Yungay Subgerencia de Construcción”

Indican que se expone en la sentencia penal de primera instancia, Considerando 1, letra o), página 20:

“Que, posteriormente, el 21 de septiembre de 1973, es detenido por carabineros de la tenencia de Antuco PLUTARCO ENRIQUE COUSSY BENAVIDES, dirigente sindical de Endesa, mientras se dirigía en un bus de esa empresa eléctrica a su trabajo en la central El Toro, al igual que en el caso anterior permanece desaparecido hasta hoy en día”.

Agregan que en la página web Memoria Viva, sobre don Enrique, se dice:



«RIT»

Foja: 1

“fue detenido el 21 de septiembre de 1973 por Carabineros y Militares en la localidad de Antuco, cuando viajaba en un bus con destino a su trabajo, del cual fue obligado a descender frente a la Unidad policial”.

Sostienen que, por tanto, 5 días después de su detención en Antuco, se le comunica, por carta, su despido por las causales del artículo 2 numeral 6 de la ley 16.455 y artículo 4, letra a) y d) del Decreto Ley N° 32.

Afirman que ese Decreto Ley 32, no sólo constituye un Tribunal Especial para conocer de las reclamaciones que pudiese originar la aplicación de las causales de despidos con participación de militares o carabineros, sino que establece un procedimiento previo al derecho de la reclamación, que formalmente se establece. El artículo 5 dispone:

“En los casos de las causales señaladas en el artículo anterior, la terminación del contrato operará mediante la decisión que adoptará fundadamente el empleador, caducando el contrato, comunicándolo por escrito al trabajador, mediante carta entregada inmediata y personalmente si hubiere lugar, o enviada en forma certificada inmediatamente a la residencia registrada en la empresa del trabajador, y, con copia de ella, despachada, certificada e inmediatamente a la Inspección del Trabajo Departamental correspondiente.

“En los casos de las causales de caducidad indicadas en el artículo anterior, no operarán los fueros que establecen las leyes del trabajo y consecuentemente no regirá lo dispuesto en los artículos 10° y 11° de la ley N° 16.455”.

Agregan que todo ello tiene una particularidad adicional, francamente escandalosa y que demuestra por sí sola la absoluta complicidad y coordinación de Endesa con los agentes de la dictadura: El Decreto Ley 32, fue promulgado el 21 de septiembre de 1973, pero publicado en el Diario Oficial el 4 de octubre de 1973. Es decir, en la Comunicación de despido de don Enrique Coussy, de 26 de septiembre de 1973, se hace referencia a una norma promulgada por el régimen de facto el 21 de septiembre de 1973 -día de la detención y desaparición de don Enrique Coussy- pero que fue conocida sólo desde su publicación en el Diario Oficial, el 4 de octubre de 1973, aunque el Decreto Ley diga que su normativa regirá desde el 11 de septiembre de 1973.



«RIT»

Foja: 1

Señalan que la comunicación de despido enviada al trabajador don Enrique Coussy Benavides es paradigmática, es el modelo de actuación de la empresa Endesa. Será expresión de la metodología del engaño que vivió el pueblo de Chile durante la dictadura, como es el aparentar algo muy distinto a la realidad. A una persona que es detenida en el bus de la empresa, yendo a su lugar de trabajo, el 21 de septiembre de 1973 y que desaparecerá hasta el día de hoy, se le comunica 5 días después, por carta dirigida a su domicilio, que se le despide por “La no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos...” (artículo 2 N° 6 de la Ley 16.455) y luego se le citan dos disposiciones desconocidas a la fecha, las letras a) y d) del artículo 4o del Decreto Ley 32, de 4 de octubre de 1973, como es supuesta “comisión de actos ilícitos que hayan impedido o impidan al trabajador concurrir a su trabajo”, o, el haber “dirigido o dirigir la interrupción o paralización ilegales de actividades, totales o parciales, en las empresas o servicios, o actos de violencia en las empresas o en los lugares de trabajo”. Estas huellas indelebles, abominables moralmente, justifican por sí sola la presente acción civil dirigida contra Endesa.

Arguyen que tanto los antecedentes de la investigación penal como el antecedentes del despido laboral, ambos de carácter fidedigno, más los antecedentes de la investigación penal sobre las otras víctimas, permiten razonablemente concluir que también los restantes trabajadores de Endesa desaparecidos fueron “despedidos” en iguales circunstancias e invocándose las mismas causales, y que las comunicaciones correspondían a una política de la empresa para justificar su colaboración con los órganos represivos.

Agregan que el sábado 21 de mayo de 2016, el diario El Mercurio, publica en primera página del Cuerpo A una información que se desarrolla en el cuerpo B), página 5, que expresa: “Gobierno, empresarios y sindicatos rechazan polémicos dichos de Francesco Starace, CEO de Enel”, hecha ante un grupo de estudiantes en Roma, quien dijo que para generar cambios importantes dentro de una empresa había que “inspirar miedo”. En un recuadro se dice que la prensa italiana sacó a flote una relación de parentesco de Starace con el que sería su abuelo: Achille Starace, secretario del partido Nacional Fascista entre 1931 y 1939, y quien en 1945 fue



«RIT»

Foja: 1

fusilado y colgado junto a Benito Mussolini. Lo grave es que el grupo Enel, transnacional italiana, es la sociedad actualmente controladora de Endesa.

Expresan que en suma, recae sobre Endesa S.A. no sólo el deber moral y jurídico de reparación sino también el deber jurídico de indemnizar, en los términos referidos por la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su numeral 20.

Solicitan que Endesa indemnice a cada una de las familias de los trabajadores desaparecidos pagándoles lo que a ellos les habría correspondido percibir al término de la relación laboral como son el salario correspondiente a días trabajados, la compensación de feriados legales, el 6% de la participación de los obreros, la asignación de Fiestas Patrias y Navidad, la indemnización sustitutiva del aviso previo e indemnización por años de servicios. Todo ello por daño material directo y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante. En subsidio, por perjuicio moral.

Expresan que las familias carecen, dentro de los antecedentes que conservan, de las liquidaciones mensuales de salarios que recibían sus familiares trabajadores de Endesa S.A., hoy detenidos desaparecidos. Para efecto del cálculo del daño material directo y lucro cesante, se ha obtenido, a través de terceras personas, cuya información resulta fiable, las remuneraciones que actualmente percibirían Maestros de 1a y de 3a, así como los llamados mineros o perforistas, para efecto de fijar aproximativamente una actual base de cálculo que debiesen haberse empleado en caso de que hubieren sido despedidos legalmente los cinco trabajadores detenidos desaparecidos de autos. Cabe hacer presente que sólo en ellos recaía, en exclusividad, la titularidad de la acción laboral por despido ilegal y que, entre otros derechos, le privaron del derecho de acceso a los tribunales para determinar sus derechos laborales. Admitamos que es una burla despedir a un trabajador por abandono del trabajo en circunstancias que aquellos que ejercieron la facultad unilateral de la administración de despedir a un trabajador lo hacen a sabiendas de que los trabajadores habían sido detenidos en dependencias o buses de la empresa. El despido, peor aún por las causales invocadas en el caso de don Plutarco Enrique Coussy, que suponemos fue la norma de conducta respecto de él y



Foja: 1

los demás trabajadores, es un acto de odiosidad sin límite respecto de quien se haya en la más absoluta indefensión y de complicidad extrema con los hechores de los delitos de secuestros. Así las cosas, harán un cálculo aproximativo de la indemnización que habría correspondido pagarles a septiembre y/o noviembre del año 1973.

1.- Don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, nacido el 10 de febrero de 1924, fue detenido el 6 de noviembre de 1973, a los 49 años de edad. Trabajó 25 años para Endesa en distintas centrales: Cipreses, Pullinque, Rapel y Los Ángeles, siendo su último contrato del año 1962 hasta la fecha de su desaparición, esto es, 11 años.

Señalan que a la fecha de su detención y desaparición se desempeñaba como Maestro 1º y su remuneración comprendía el salario (hoy sueldo), bonos de antigüedad, más el 6% de participación en las utilidades a que tenían derechos los obreros, asignaciones de Fiestas Patrias y Navidad y las vacaciones proporcionales. Estos estipendios equivaldrían a la fecha actual a \$1.500.000.-, aproximadamente, por lo que debería habersele pagado de haber sido despedido legalmente las siguientes sumas:

-Indemnización sustitutiva por la suma de: \$1.500.000.-

-Indemnización por 11 años de servicios: \$16.500.000.-

-Feriado proporcional: \$1.050.000.-

-Total: \$19.050.000.-

2.- Don Oscar Badillo García, cuya fecha de nacimiento es el 25 de agosto de 1924, detenido el 6 de noviembre de 1973, a los 49 años de edad. Tenía 30 años de antigüedad en Endesa, desempeñándose 21 años en la Central Rapel y los últimos 9 años en la Central El Toro.

Sostienen que a la fecha de su detención y desaparición se desempeñaba como Maestro 1º minero y sus remuneraciones promedio a 1973, por los conceptos señalados en el numeral anterior, equivaldría a una suma actual de \$1.500.000.-, aproximadamente, por lo que habría debido pagársele:

-Indemnización sustitutiva por la suma de: \$1.500.000.-

-Indemnización por 30 años de servicios: \$45.000.000.-

-Feriado proporcional: \$1.050.000.-

-Total: \$47.550.000.-



«RIT»

Foja: 1

3.- Don Manuel Jesús Arias Zúñiga, detenido el 13 de noviembre de 1973, a los 44 años de edad. Ingresó como trabajador a Endesa el 1 de enero de 1950 hasta el 31 de diciembre de 1955, en la Central Cipreses, desempeñándose como Maestro 1° Perforista, poniéndose término a la relación laboral por término de faenas. Fue contratado, posteriormente el 26 de julio de 1971 desapareciendo cuando trabajaba para Endesa S.A. el 13 de noviembre de 1973.

Relatan que a la fecha de su detención y desaparición se desempeñaba como Maestro 1° Perforista y sus remuneraciones promedio, comprendía las señaladas en el numeral 1, precedente, equivaldría a una suma no inferior a un millón y medio de pesos mensuales, por lo habría debido pagársele:

- Indemnización sustitutiva por la suma de: \$1.500.000.-
- Indemnización por 2 años de servicios: \$3.000.000.-
- Feriado proporcional: \$1.050.000.-
- Total: \$5.450.000.-

4.- Don Plutarco Enrique Coussy Benavides, quien tenía 32 años a la fecha de su detención, e ingresó a la Empresa Endesa, el 4 de noviembre de 1965, Central Rapel, siendo trasladado a la Central El Toro, trabajando un total de cerca de 8 años. Laboró 21 días del mes de septiembre de 1973. A la fecha de su detención y desaparición se desempeñaba como Maestro 1° minero y su salario promedio es equivalente a los señalados respecto de los otros trabajadores. Habría debido pagársele:

- Indemnización sustitutiva por la suma de: \$1.500.000.-
- Indemnización por 8 años de servicios: \$12.000.000.-
- Feriado proporcional: \$1.050.000.-
- Total: \$14.450.000.-

5.- Don Alamiro Segundo Santana Fiaueroa, quien tenía 23 años a la fecha de su detención, llevaba un año de trabajo en Endesa. Se desempeñaba como Maestro 3°, con un salario aproximado equivalente a la fecha actual a \$600.000.- Habría debido pagársele:

- Indemnización sustitutiva por la suma de: \$600.000.-
- Indemnización por 11 años de servicios: \$600.000.-
- Feriado proporcional: \$600.000.-



«RIT»

Foja: 1

-Total: \$1.800.000.-

Señalan que estas sumas que eventualmente podrían variar si la demandada Endesa S.A. aportase nuevos y mejores antecedentes, se cobran en su equivalente aproximado en moneda de actual curso legal y deberán pagarse con los reajustes e intereses que ordena la ley del trabajo, en sus actuales artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, a partir de la fecha de detención de cada uno de ellos.

Añaden que estiman que sería de estricta justicia y se sentirían honrados si estas indemnizaciones por concepto de daño material y lucro cesante y en subsidio, por perjuicio moral, se extendieran a todos los trabajadores de Endesa desaparecidos y ejecutados a causa del Golpe de Estado en Chile, entregados a sus familias en una ceremonia solemne.

En cuanto a los daños que deben repararse, indican que los daños que les causó la desaparición de sus familiares fueron inconmensurables y múltiples. No se agota en la pérdida del padre, del jefe de familia, cuando los demandantes eran niños, menores de edad. Sus madres, mujeres jóvenes, hace 43 años, a septiembre de 1973, aisladas en localidades lejanas, rurales, inesperadamente debieron enfrentar la vida, sin la pareja elegida para toda la vida, en completa soledad, que por ser la mujer de quienes eran las puertas se cerraban, se estrechaban y los hijos, los demandantes, como cargas que había que alimentar diariamente, vestir, llevar a la escuela. Los hijos sin tener instrumentos o recursos para comprender el mal que había caído sobre ellos, ahogados en el dolor de no saber qué pasaba, dónde estaban sus padres, sufrieron adicionalmente la discriminación en la escuela, en el barrio, en la propia familia extendida por ser hijos de detenidos desaparecidos.

Afirman que en esta demanda han hecho visible su dolor, el cómo les golpeó a cada cual una misma situación. Hablamos por ellos y humildemente también por nosotros. Por ellos primero, porque les privaron de la libertad, los torturaron y seguramente les quitaron la vida, aunque sus cuerpos no han sido encontrados, lo que en el curso del tiempo generó en sus madres y en ellos una enorme incertidumbre, con una incierta esperanza de que podría ser que aún estén con vida, de que algún día regresarán y todo sería como antes de su partida.



Manifiestan que la reparación es otra cara de la Justicia, sólo en ella tiene sentido y fundamento. Es una oportunidad de aminorar el mal hecho y eso es bueno, recíprocamente bueno, para quien hizo mal y para las víctimas. La *restitutio in integrum*, aunque las cosas no puedan volver íntegramente atrás al menos es un concepto jurídico vivo, del que hemos recibido como legado de generación en generación y que nos permite hacer un ejercicio de simulación, de quitar virtualmente la existencia de ese mal provocado. Indican que son parte de la sucesión de aquellos que hicieron desaparecer, en ellos se prolongan el mal que les causaron, no sólo el dolor que ya es mucho.

Explican que por todo lo expuesto demandan por concepto de reparación lo siguiente:

1. El reconocimiento público de que sus cónyuges y/o parejas, de sus padres o abuelos fueron víctimas de un delito de lesa humanidad, restituyéndose en plenitud su honra y dignidad. Para este efecto solicitan se condene al Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, a publicar en un diario de circulación nacional, en que se haga público lo sustancial de lo fallado en los autos criminales en que se condenó a los oficiales del Regimiento de Los Ángeles como autores del delito de secuestro calificado en contra de sus familiares, con expresa mención de que las víctimas eran todos trabajadores de Endesa.

2. Por concepto de justa indemnización a la parte lesionada, estiman que el Fisco de Chile debe ser condenado como responsable de la violación de derechos humanos fundamentales de sus familiares como la libertad, el derecho a un justo proceso y seguramente el derecho a la vida así como al de sus propios derechos a la integridad física y psíquica. Por este concepto demandan como indemnización moral la suma de 8.500 Unidades de Fomento por los demandantes que accionen por sí y por igual suma al conjunto de los sucesores por sus cónyuges y/o padres fallecidos, hijos de las víctimas, quienes accionan por derecho de representación, la que deberá ser pagada en su equivalente en moneda nacional a la fecha del pago efectivo, con intereses desde la fecha de notificación de esta demanda, o la suma que tribunal determine.



«RIT»

Foja: 1

3. Por concepto de justa indemnización a la parte lesionada demandan a la Empresa Nacional de Electricidad S.A., Endesa, a fin de que ésta sea condenada a:

a. Erigir en la casa matriz de la empresa, en Santa Rosa N° 76 y en las centrales hidroeléctrica de El Toro y el Abanico, sendos Memoriales en recuerdo y homenaje de los trabajadores de Endesa, familiares de los demandantes, quienes tienen la calidad de detenidos desaparecidos así como de todos los trabajadores de Endesa que fueron víctimas de homicidio, secuestro, detención y tortura durante la cruel dictadura cívico-militar que tomó el poder del Estado el 11 de septiembre de 1973.

b. Pagar, por concepto de daño material directo y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante, a cada una de las familias demandantes en relación a cada uno de los trabajadores víctimas individualizados en la presente demanda, las sumas correspondientes a todos los derechos laborales que les hubiesen correspondido percibir, tales como salarios, asignación de antigüedad, participación en las utilidades del 6%, asignación de Fiestas Patrias y/o Navidad, vacaciones, indemnización sustitutivas del aviso previo e indemnizaciones por años de servicios, por los montos señalados precedentemente o en aquellos que se determinen en el curso del juicio, con los debidos reajustes que nuestra legislación laboral considera hasta el efectivo pago de las mismas, los que serán entregados a las familias demandantes en una ceremonia solemne en la casa matriz de la empresa Endesa S.A. En subsidio, se ordene pagar a cada una de las cinco familias demandantes las sumas pedidas precedentemente en cada caso, con reajustes e intereses desde la fecha de la desaparición de cada uno de sus deudos causantes, por concepto de perjuicio moral.

Por lo expuesto y previas citas legales, solicitan tener por interpuesta demanda de reparación e indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile y en contra de la Empresa Nacional de Electricidad S.A., a fin de que por concepto de la acción reparatoria e indemnizatoria sean condenadas, cada cual en la forma que se señalará: al Fisco de Chile: 1) el reconocimiento público de que sus cónyuges y/o parejas, de sus padres o abuelos fueron víctimas de un delito de lesa humanidad, restituyéndose en plenitud su honra y dignidad. Para este efecto solicitan que se obligue al



«RIT»

Foja: 1

Fisco de Chile a publicar un inserto en un diario de circulación nacional, en que se haga público lo sustancial de lo fallado en los autos criminales en que se condenó a los oficiales del Regimiento de Los Ángeles como autores del delito de secuestro calificado en contra de sus familiares, con expresa mención de que las víctimas fueron todos trabajadores de Endesa; 2) por concepto de justa indemnización a la parte lesionada, demandan al Fisco de Chile por concepto de indemnización moral la suma de 8.500 Unidades de Fomento por los demandantes que accionen por sí y por igual suma al conjunto de los sucesores que actúan por sus cónyuges y/o padres fallecidos, hijos de las víctimas, ya individualizados, quienes accionan por derecho de representación, la que deberá ser pagada en su equivalente en moneda nacional a la fecha del pago efectivo, con intereses desde la fecha de notificación de esta demanda, o la suma que el tribunal determine. A Endesa: 1) se le condene a erigir en la casa matriz de la empresa, en Santa Rosa N° 76 y las centrales hidroeléctrica de El Toro y el Abanico, sendos Memoriales en recuerdo y homenaje de los trabajadores de Endesa, familiares suyos, quienes tienen la calidad de detenidos desaparecidos, así como de todos los trabajadores de Endesa que fueron víctimas de homicidio, secuestro, detención y tortura durante la cruel dictadura cívico-militar que tomó el poder del Estado el 11 de septiembre de 1973; 2) se le condene al pago a cada una de las familias demandantes en relación a cada uno de los trabajadores víctimas individualizados en la presente demanda, por concepto de daño material y lucro cesante, las sumas correspondientes a todos los derechos laborales que les hubiesen correspondido percibir, tales como salarios, vacaciones, participación en las utilidades del 6%, asignaciones de Fiestas patrias y/o Navidad, e indemnización sustitutiva del aviso previo e indemnizaciones por años de servicios, en los montos determinados en el cuerpo de la demanda, con los debidos reajustes que la legislación laboral considera hasta el efectivo pago de las mismas, los que serán entregados a cada una de las familias en una ceremonia solemne en la casa matriz de la empresa. En subsidio, se ordene pagar a cada una de las cinco familias demandantes las sumas pedidas precedentemente en cada caso, con reajustes e intereses desde la fecha de la desaparición de cada uno, por concepto de perjuicio moral. Todo lo anterior con costas.



A fojas 253, doña Irma Soto Rodríguez, abogado Procurador Fiscal, en representación del Fisco de Chile, contesta la demanda, solicitando su rechazo.

Primeramente, opone la excepción de reparación integral de la deuda e improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizados los demandantes Lilian Arias Vergara, Angelina del Pilar Arias Vergara, Pedro Luis Arias Vergara, Irene Quichel Carrasco, Roberto Exequiel Verdejo Quichel, Edith Elizabeth Verdejo Quichel, Leonel Omar Verdejo Quichel, Ariela del Carmen Verdejo Quichel, Mireya Adriana Rivera Veliz, Gisela Angélica Coussy Rivera, Enrique Antonio Coussy Rivera, Alexseis Wladimir Coussy Rivera, Carolina Antonieta Coussy Rivera, Irma Inés Badillo Mellado y Raúl Vicente Badillo Mellado.

Señala al efecto que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. Dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior –y desde– lo que ya es común considerar el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

Arguye que el denominado dilema “justicia versus paz” es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Sostiene que por otro lado, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. El éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido,



Foja: 1

las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación. Estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra Ley 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Indica que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

Expresa que en lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.



«RIT»

Foja: 1

Precisa que el mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Señala que por su parte, y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la Comisión, entendió por reparación “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”. A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en “un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas”. Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Sostiene que de esta forma, en la discusión de la ley 19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades se hizo referencia a la reparación “moral y patrimonial” buscada por el proyecto. La noción de reparación “por el dolor” de las vidas pérdidas se encontraba también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal “de indemnización” y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente a la “responsabilidad extracontractual” del Estado.

Manifiesta que así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Afirma que asumida esta idea reparatoria, entre otras normas legales y beneficios, la Ley 19.880 otorga un Bono de Reparación de \$10.000.000.- para los hijos de las víctimas

Observa que en ese orden de ideas, se puede decir que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber:



Foja: 1

- a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero;
- b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y
- c) Reparaciones simbólicas.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, indica que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también a las cónyuges, madres o padres de las víctimas, hijos, y personas que fueron víctimas de prisión política y tortura.

Señala que, en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2013, en concepto de:

Pensiones: la suma de \$176.070.167.770.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$313.941.104.606.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

Bonos: la suma de \$41.659.002.416.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$20.777.324.047.- por la ya referida Ley 19.992; y

Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

Habiendo pagado el Fisco, a diciembre de 2013, la suma total de \$553.912.301.727.-

En cuanto a reparación mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, explica que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase.

Sostiene que en este sentido, se concedió también a los beneficiarios tanto de la Ley N° 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais) en servicios de salud del país.

Agrega que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, Prais cuenta con un equipo de salud especializado y



«RIT»

Foja: 1

multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Indica que a nivel presupuestario, Prais cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006, que en el año 2014 tuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$4.580.892.- Este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud Prais, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra, sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley 19.992. Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos equivalentes para todos los usuarios Fonasa; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo Prais en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos.

Afirma que se ofrece también apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que hayan sido producto de la prisión política o tortura.

Añade que se establecen también beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación.

Sostiene que a modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, tendrá derecho a traspaso de la Beca de Reparación que cubre una proporción importante del arancel de referencia en las universidades; podrá postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de



«RIT»

Foja: 1

pedagogía, en la forma y condiciones que establezca el reglamento de dichas becas.

Precisa que asimismo, se conceden beneficios en vivienda, correspondientes a acceso a subsidios de vivienda.

Respecto a reparación simbólicas, expone que al igual que en todos los demás procesos de Justicia Transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a los familiares de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Arguye que la doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Observa que en esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes:

a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993;

b) El establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido. Se elige el día 30 de agosto de cada año en atención a que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha instituido este día como día internacional del detenido-desaparecido.

c) La construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra fue inaugurada el 11 de enero de 2010 y su objetivo es dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos cometidas entre los años 1973 y 1990 y que quedaron plasmados en imágenes, iconos, documentos o monumentos.



d) El establecimiento, mediante Ley 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos.

e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los Derechos Humanos.

Manifiesta que de todo lo expresado puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos no sólo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales, sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos.

Arguye que, así las cosas, tanto la indemnización demandada como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser exigidos nuevamente.

Afirma que el Instituto de Previsión Social les ha informado que los actores han percibido los siguientes beneficios económicos a la fecha:

-Angelina del Pilar Arias Vergara: pensión, bono Ley 19.980, bonificación compensatoria y aguinaldos: \$13.617.130.-

-Lilian Arias Vergara: \$10.000.000.-

-Pedro Luis Arias Vergara: \$10.000.000.-

-Irene Quichel Carrasco: \$72.238.479.-

-Edith Elizabeth Verdejo Quichel: \$10.000.000.-

-Leonel Ornar Verdejo Quichel: \$10.000.000.-

-Roberto Exequiel Verdejo Quichel: \$10.000.000.-

-Ariela del Carmen Verdejo Quichel: \$10.000.000.-

-Mireya Adriana Rivera Véliz: \$95.294.192.-

-Gisela Angélica Coussy Rivera: \$10.382.300.-

-Enrique Antonio Coussy Rivera: \$10.000.000.-

-Alexseis Wladimir Coussy Rivera: \$10.470.178.-

-Carolina Antonieta Coussy Rivera: \$10.000.000.-

-Irma Inés Badillo Mellado: \$10.000.000.-



«RIT»

Foja: 1

-Raúl Vicente Badillo Mellado: \$10.000.000.-

Expresa que estando entonces las acciones interpuestas en autos por los actores referidos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, y al tenor de documentos oficiales que serán acompañados en su oportunidad ratificando lo informado, es que opone la excepción de pago por haber sido ya indemnizados los demandantes señalados.

En segundo término, opone la **excepción de improcedencia de la indemnización por preterición legal de doña Rosa Inés Santana Figueroa, en su calidad de hermana de la víctima don Alamiro Santana Figueroa, y por haber sido reparada.**

Precisa que la indemnización solicitada en autos se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. En efecto, sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria. Ello porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado para que éstos no se repitan en el futuro, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos económicos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas. Ello es así porque no es posible omitir el hecho de que las arcas fiscales -que en definitiva están constituidas por los aportes de todos los chilenos- deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad -las que, por cierto, son imprescindibles- pero así también, lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los más directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos acontecidos en nuestro país.

Razona que así, no es extraño que muchas de las negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estimen más lejanos; se compensen algunos daños y se excluyan otros; o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.



«RIT»

Foja: 1

Expresa que en este escenario, la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que, sin desfinanciar la caja fiscal, permitió y permite que numerosas víctimas obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

Advierte que el impacto indemnizatorio de este tipo de reparaciones es bastante alto. Ellas son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transaccional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Afirma que para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar al núcleo familiar más cercano, esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral, como se explicará.

Observa que ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el *pretium doloris*, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.

Señala que es claro que siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa, y, en el caso de la demandante de autos, fue preterida por la ley como beneficiaria de una asignación en dinero por el daño que invoca, sin que ello implique afirmar que no haya obtenido una reparación satisfactiva por otra vía.

Expresa que en suma, la pretensión económica demandada es improcedente porque en la especie, existe un sistema legal de reparación



Foja: 1

pecuniario en el que se excluyó a los hermanos de las víctimas de violación a sus derechos humanos, como beneficiarios de las leyes de reparación.

Señala que sin perjuicio de lo anterior, la demandante ha obtenido reparación satisfactiva.

Explica que el hecho que la demandante no haya tenido derecho a un pago en dinero no significa que no ha obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de ésta.

Arguye que tratándose en la especie de un daño extrapatrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido.

Agrega que no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas por repercusión, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal, el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis, se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Expone que estos programas incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella.

Indica que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias,



«RIT»

Foja: 1

siendo éstas últimas reservadas sólo para la denominada familia nuclear, lo que hizo necesario considerar otra suerte de medidas para diversos afectados.

Añade que ello se desprende del concepto, que el Ejecutivo, -siguiendo el referido Informe de la Comisión-, entendió por reparación, esto es: “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe”. De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 en diversas oportunidades se hizo referencia a la reparación “moral” buscada por el proyecto.

Sostiene que puede indicarse que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Argumenta que en el caso de una persona como la de autos, las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, como las siguientes: construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; establecimiento, mediante el Decreto N° 121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día nacional del detenido desaparecido; construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; establecimiento, mediante Ley N° 20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH; todos ellos unidos a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.



«RIT»

Foja: 1

Indica que además, la actora de autos es titulares por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais).

Concluye al respecto que el cúmulo de reparaciones indicadas ha producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente.

Sostiene que este sentido, diversas sentencias han insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas” , lo que constituye un factor congruente con resoluciones de Tribunales Internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.

También, en subsidio de las excepciones previamente referidas, opone la **excepción de prescripción extintiva** de las acciones civiles de indemnización de perjuicios deducidas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas éstas, se rechacen las acciones resarcitorias en todas sus partes.

Expresa que según los antecedentes que obran en la demanda de autos, la detención y secuestro de las víctimas se habría producido en los meses de septiembre y noviembre de 1973.

Manifiesta que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el periodo de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas o de sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos al Fisco de Chile, esto es. 9 de agosto de 2016, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, opone la excepción de **prescripción extintiva de 5 años** contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de las acciones indemnizatorias que contesto, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.



«RIT»

Foja: 1

Afirma que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. Por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”.

Expresa que sobre esta materia cabe recordar que la prescripción es una institución universal y de orden público.

Señala que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado.

Observa que esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares (que es el sentido de la expresión “igualmente” que emplea el precepto) la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Argumenta que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2494, inciso 1º, del Código Civil).

Señala que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extra patrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado.

Añade que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.



En cuanto a su fundamento, explica que la prescripción tiene por fundamento dar firmeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida.

Arguye que por ello es posible que la prescripción se produzca sin que el acreedor haya recibido lo que le corresponda y sin que haya tenido, con ello, intención de remitir la deuda de que se trate. Al acreedor tendrá que reprocharse una grave negligencia, pero, por encima de su interés personal, se impone la necesidad de fijar un término a las acciones.

Manifiesta que en la práctica, los pocos casos en que la prescripción produce resultados chocantes, ellos no pueden compararse con los infinitos casos en que viene a consolidar y a proteger situaciones regulares y perfectamente justas. La prescripción extintiva, un modo de extinción de las obligaciones -que al igual que en la usucapión cumple una función de adquisición y otro de prueba del derecho- es llamada con bastante propiedad por la doctrina como un modo de liberación de las obligaciones, o sea, algo más que su extinción.

Sostiene que los planteamientos doctrinarios anteriores permiten concluir que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Agrega que por las mismas razones la prescripción no es -en sí misma- como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.



«RIT»

Foja: 1

Añade también que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y establece un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Precisa a su vez que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

Luego cita una serie de sentencias dictadas por la Corte Suprema, indicando que no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia uniforme en la materia, acogiendo las argumentaciones hechas valer por su defensa, lo que solicitan se tenga especialmente en consideración al momento de resolver la presente Litis, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013 que acogió la aplicación de la institución de la prescripción en materias como la de autos.

En cuanto al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, señala que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté –como toda acción patrimonial– expuesta a extinguirse por prescripción.

Añade que debe considerarse que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial.

Afirma que basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción (incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos), por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones



«RIT»

Foja: 1

ajenas a la prescripción liberatoria, que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

Finalmente, en relación con la alegación de que la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, sostiene que se hará cargo de algunos instrumentos internacionales, adelantando que ninguno contempla la imprescriptibilidad de la acción civil derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Expresa que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, aprobada por Resolución N° 2391 de 26 de Noviembre de 1968, y en vigor desde el año 1970, en su artículo 1 letras a) declara imprescriptibles a “los crímenes de guerra; y b) a los crímenes de lesa humanidad”; pero cabe señalar que en ninguno de sus artículos declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Señala que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

Observa que la Resolución N° 3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

Señala por su parte que la Convención Americana de Derechos Humanos tampoco establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria.



«RIT»

Foja: 1

Agrega, en relación a esta Convención, que debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5 de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990.

Indica que por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile. La norma establece: “63.1.- Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de sus derechos o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

Razona que el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Añade que el planteamiento de su defensa ha sido reconocido por la Corte Suprema.

Observa que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de los derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, no es factible apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil,



«RIT»

Foja: 1

que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

En subsidio a las excepciones y defensas expuestas, opone las siguientes **alegaciones en cuanto a la naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y los montos pretendidos.**

Por su lado, también alega la improcedencia de las indemnizaciones respecto de los actores don Manuel Alejandro Arias Acevedo en representación de su padre fallecido don Manuel Alejandro Arias Vergara; doña María Inés Contreras Alvear, don Manuel Jesús Arias Contreras, doña Yesenia del Pilar Arias Contreras y doña Valeria Andrea Arias Contreras, en representación de su cónyuge y padre fallecido don Raúl Arias Vergara, ambos fallecidos hijos de la víctima don Manuel Jesús Arias Zúñiga; doña Guillermina Carmen Mellado Badillo y doña Tais Elena Gallegos Badillo, en representación de su madre doña Marta Jesús Badillo Mellado, fallecida, y nietas de la víctima don José Oscar Badillo García.

Afirma que todos los comparecientes referidos demandan en representación de sus respectivos causantes.

Sostiene que en consecuencia, lo que se reclama es una indemnización de perjuicios para la sucesión de los hijos fallecidos de las víctimas de los delitos de secuestro por el daño moral propio de los citados causantes, lo que es absolutamente improcedente según la ley.

Expresa que de conformidad con los artículos 951 -incisos 1º y 2º-, y 1097 -inciso 1º- del Código Civil, todos los derechos y todas las obligaciones pecuniarias del causante son transmisibles y los herederos representan la persona del “*de cuius*”, mas sólo en sus derechos y obligaciones transmisibles, pero no en lo que respecta a los derechos personalísimos. Así, la ley no concede a herederos ni a terceros, indemnización de perjuicios alguna por el daño moral propio del causante, por ser personalísimo el derecho de éste para reclamar la correspondiente indemnización por ese daño.

Arguye que la naturaleza del daño moral, así como a la finalidad que persigue su reparación, solo permiten concluir que la acción por daño moral es personalísima. Así, en cuanto a la naturaleza del daño moral, sea que se le identifique como el sufrimiento, el pesar, el dolor, o la aflicción, o con la



Foja: 1

lesión a derechos subjetivos o bienes de la personalidad de un sujeto, es claro que tales sentimientos, derechos o bienes son eminentemente personales, por esencia están unidos a su titular y desaparecen con éste, de modo que el carácter personalísimo del daño moral torna intransmisible la acción por daño moral, y en todo caso, no pierde su carácter de derecho personalísimo por el hecho de dar lugar a un crédito de dinero.

Añade, en relación con la finalidad de la indemnización por daño moral, que ésta persigue una compensación del mal sufrido personalmente por quien lo experimenta, de modo que su justificación desaparece si se la tiene por transmisible.

Observa que la acción por daño moral es personalísima y no se transmite jamás a los herederos. Se trata de una acción personalísima, pues tiende a la compensación de una lesión, a un interés personalísimo, como ocurre en todo daño moral -en el caso de autos, el sufrido por los causantes-. Por ello, no se habla de reparación, sino de compensación, pues el daño moral no es reparable. De allí resulta que el fin de la indemnización no es reponer a quien ha sufrido dicho daño lo perdido, que es irrecuperable, sino darle a ella una satisfacción que en algo compense su sufrimiento. De ese modo, no es transmisible a su muerte, pues los derechos personalísimos no se transmiten.

En relación con la materia, el profesor don Enrique Barros ha dicho que desde el punto de vista de la naturaleza del daño moral "Nada impide que los herederos ejerzan las acciones iure proprio por los daños reflejos que se siguen de la muerte de una persona, pero no pueden fundar legítimamente su acción en la aflicción del causante" De ello se sigue que aceptar la transmisibilidad nos llevará a situaciones inaceptables y que sólo se explican por un afán de lucro compatible con el fin de la indemnización por daño moral.

Agrega que la profesora doña Carmen Domínguez Hidalgo señala lo siguiente. "Sin embargo, si la víctima no había deducido la acción por daño moral antes de su fallecimiento, se ha sostenido que ella no es transmisible y menos podría cederse. Existiría entonces un enriquecimiento sin causa". Y añade, "Por otra parte, bien podría entenderse que siendo el daño moral el que se causa a sentimientos de aficción o, más generalmente, a derechos de



«RIT»

Foja: 1

la persona, la acción para obtener que sea reparado es personalísima, como lo son tales derechos, y por lo mismo va unida sólo a la persona de su titular”.

Agrega también que la Corte Suprema ha resuelto que “debido a que la referida pretensión de reparación, en cuanto se sustenta en el sufrimiento moral de la víctima de un accidente del trabajo, por ser personalísima e intransmisible, no puede ser deducida por otro que no sea su titular y en el evento que el afectado haya fallecido la acción de indemnización de su padecimiento espiritual y aflicción, no se transmite al patrimonio de sus herederos”.

Señala que habiendo fallecido los causantes don Manuel Alejandro Arlas Vergara, don Raúl Arlas Vergara y doña Marta Jesús Badillo Mellado, y atendido que el daño moral por ellos sufrido es intransmisible, la acción indemnizatoria por el daño moral propio sufrido por ellos como consecuencia de los delitos de autos, efectuada por quienes serían sus herederos resulta absolutamente improcedente y debe ser desestimada.

Por último, indica que controvierte la calidad de herederos de tales demandantes, en la medida que no acreditan fehacientemente tal calidad y porcentaje de la herencia que les corresponde.

En cuanto al daño moral reclamado, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales.

Indica que así, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Afirma que en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para dejarla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Observa que tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede



Foja: 1

sostenerse que llegue a compensar en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se elimina por obra de la indemnización; la pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba.

Sostiene que por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos monetarios, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción reparatoria, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Refiere que al respecto ha dicho la Excma. Corte Suprema: “Por definición, el perjuicio moral no es de naturaleza pecuniaria. Esa fisonomía inmaterial que tiene, hace decir a los doctos que no se trata de calcular la suma necesaria para borrar lo imborrable, sino procurar que el afectado obtenga algunas satisfacciones equivalentes al valor moral destruido”

Señala que es en esa perspectiva que se ha de regular el eventual monto de la indemnización, asumiendo la premisa indiscutida que nunca puede ser fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extra patrimonial sufrida. Así, “el juez al avaluar este daño, debe proceder con prudencia, tanto para evitar los abusos a que esta reparación puede dar origen, cuanto para impedir que se transforme en pena o en un enriquecimiento sin causa para quien lo demanda”.

Advierte que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como parámetro para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la que no tienen influencia tales capacidades.

Expone que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del tercero civilmente responsable en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y



«RIT»

Foja: 1

básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago.

Arguye que en tal sentido, las cantidades pretendidas en la demanda de autos como compensación del daño moral, resultan claramente excesivas, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en estas materias, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las alegaciones precedentes de reparación integral, preterición legal, satisfactiva, prescripción y la improcedencia de las acciones por intransmisibles, sostiene que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales.

Señala que en todo caso en la fijación del daño moral por los hechos de autos, se deben considerar todos los pagos recibidos a través de los años por los demandantes víctimas de secuestro, de parte del Estado conforme a las Leyes de Reparación (19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente) y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto precisamente reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria, estaríamos ante un doble pago por los mismos hechos, lo que contraviene los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Hace presente a su vez que para la regulación y fijación del daño moral debe considerarse como un parámetro válido, los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, rebajando sustancialmente los montos pretendidos.

Finalmente, y en subsidio de las excepciones precedentes, también hace presente que los intereses han sido concebidos por la ley civil (cuando éstos no son, evidentemente, convencionales) como una sanción al deudor moroso de una obligación de pagar una cantidad de dinero. Así lo establece el artículo 1559 del Código Civil.

Indica que supuesto lógico para que una obligación devengue intereses a la luz de la normativa recién citada, es la existencia de la referida



«RIT»

Foja: 1

obligación, por una parte, y la morosidad del deudor por otra, en circunstancias que el Fisco de Chile no reviste ninguna de las mencionadas calidades respecto de los demandantes.

Expresa que su parte no tiene ninguna obligación vigente jurídicamente respecto de los actores, a lo menos en las materias que dicen relación con la presente causa, y no la tendrá mientras por sentencia firme no exista un pronunciamiento de sede jurisdiccional que así lo resuelva.

Agrega que si no existe obligación jurídicamente exigible alguna, malamente puede el Fisco ser deudor moroso de dicha obligación, pues a su respecto no ha operado ninguna de las hipótesis que al efecto establece el artículo 1551 del Código Civil.

Señala que luego, al no concurrir en la especie, ninguno de los supuestos que la propia Ley ha establecido para condenar al deudor al pago de intereses, sean cuales sean éstos, a diferencia de lo pedido por los actores, no podrá condenarse su pago sino a partir de la constitución en mora.

Por último, en cuanto a la petición de reparación vía publicación de inserto en un diario de circulación nacional, afirma que opone la excepción de falta de derecho material de los actores que fundamente su pretensión.

Indica que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio general que establece que una acción judicial no puede prosperar si no reúne copulativamente ciertos requisitos o condiciones de admisibilidad de la pretensión, denominados por la doctrina presupuestos materiales de la acción, y son los siguientes: 1) derecho material que fundamente la pretensión; 2) interés actual; y 3) legitimación.

Explica que el derecho material se refiere a cualquier derecho subjetivo de que el actor sea titular, entendiendo por éste, cualquier facultad, poder atribución -para dar, hacer o no hacer- que esté establecido o reconocido positivamente en el ordenamiento jurídico vigente.

Sostiene que de acuerdo con la doctrina procesal generalmente aceptada, la ausencia de cualquiera de estos presupuestos impide que la acción pueda ser acogida en definitiva. En nuestro ordenamiento jurídico todas estas exigencias se encuentran legalmente consagradas. En la especie, los demandantes carecen de derecho material, motivo por el que su pretensión no puede en modo alguno prosperar.



«RIT»

Foja: 1

Manifiesta que en la demanda los actores no hacen valer ningún derecho subjetivo reconocido por el legislador para exigir que el Estado disponga la publicación de un inserto conteniendo un extracto de una sentencia judicial en los términos señalados en el libelo.

Afirma que ningún instrumento obligatorio de Derecho Internacional Humanitario o de Derechos Humanos, ya sea pacto, tratado o convención, debidamente incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, otorga a dichas víctimas o a sus familiares, un derecho a que financien, con cargo a fondos fiscales, publicación de insertos o extractos de fallos judiciales, ni impone a los Estados ninguna obligación de hacerlo.

Observa que se desprende también de lo dicho que no existe jurídicamente una acción general de “reparación” que comprenda prestaciones de dar y de hacer, autónoma, distinta o independiente de la consabida y precisa acción civil de indemnización de perjuicios, destinada a obtener el restablecimiento o la compensación del daño patrimonial o moral experimentado por una persona que ha sido víctima de un hecho ilícito, doloso o culposo, y en virtud de la tradicional normativa nacional de los Estados miembros.

Resulta clarificador a este respecto, que en la demanda tal pretensión no aparece fundada en norma jurídica alguna, de fuente nacional o internacional, de carácter vinculante para el Estado de Chile, que sirva de base a su específica y particular pretensión.

Señala que por otra parte, la obligación de hacer que aquí se pretende ha sido cumplida por el Estado de Chile, toda vez que éste ha establecido voluntariamente programas de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, tempranamente, desde el mismo momento en que se restableció el régimen democrático, en 1990, programas que han comprendido diversas medidas de reparación simbólica, como las pretendidas en autos.

Arguye que esta voluntad ha permanecido constante a través del tiempo, cumpliéndose por los distintos gobiernos que se han sucedido a partir del año 1990, lo que demuestra la absoluta falta de oportunidad y de necesidad de la acción judicial de autos.



«RIT»

Foja: 1

Sostiene que con varios años de anticipación a que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobara la Resolución N° 60/147, el 16 de diciembre de 2005, por la cual recomendó a los Estados miembros en su numeral o principio 16 “procurar establecer programas nacionales de reparación y otra asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera cumplir sus obligaciones”, el Estado de Chile ejecutó dicha recomendación voluntariamente y por iniciativa propia, disponiendo y llevando a la práctica un conjunto de medidas legislativas y administrativas de reparación, tanto pecuniarias, asistenciales y simbólicas, hasta donde sus recursos económicos lo han permitido, dentro del conjunto de necesidades sociales que ha debido y debe atender.

Afirma que en consecuencia, la petición formulada por los actores debe ser desestimada íntegramente.

A fojas 342, don Raimundo Moreno Coz, Abogado, en representación de la demandada Empresa Nacional de Electricidad S.A., contesta la demanda, solicitando su rechazo, con costas.

Expresa, como comentario preliminar, que la demanda que se dirige contra Endesa incluye un sinnúmero de acusaciones y enunciaciones de hechos inconexos que no dicen relación con la acción deducida, y respecto a cuales no se pronunciará por ser improcedentes e inconducentes a la discusión.

Afirma que la acción resulta muy confusa en cuanto a sus fundamentos y también en cuanto a la razonabilidad y/o plausibilidad para ser enderezada contra Endesa.

Advierte que lo que puede sacar en limpio es que los demandantes interponen una acción civil de indemnización de perjuicios en contra de Endesa, en su calidad de ex-empleadora de sus familiares al tiempo de sus detenciones. Indican que entre su representada y sus familiares “existía una relación jurídica propia, no extensible al Fisco de Chile, como es la relación laboral, regulada por un contrato de trabajo, sea individual o colectivo, así como por el Código del Trabajo vigente”.

Manifiesta que en este contexto, y de acuerdo al petitorio de la demanda en lo que respecta a Endesa, se solicita la indemnización “por



«RIT»

Foja: 1

concepto de daño material y lucro cesante, las sumas correspondientes a todos los derechos laborales que les hubiese correspondido percibir”. Además se pretende que se erijan memoriales en recuerdo de los presuntos hechos que se relatan.

Indica que en resumen, la presente demanda se dirige contra Endesa por cuanto señalan que ex trabajadores de Endesa habrían sido despedidos injustificadamente por haberse comprobado que fueron detenidos desaparecidos, y por lo tanto corresponde que Endesa pague indemnizaciones por haber sido injustificado su despido, y erija un memorial en recuerdo de dichos ex trabajadores.

Sostiene que ese es el fundamento de la presente demanda, y en esto giran sus peticiones, por lo que en nada aporta a la causa la referencia a la causa penal en que los propios demandantes reconocen que “se limitó a determinar la responsabilidad penal de los uniformados partícipes de los delitos de secuestro y homicidios calificados”, por lo que no se estableció ni participación ni responsabilidad alguna de personal de Endesa respecto de los delitos que allí se comprobaron.

Arguye que así, se encuentra reconocido que no existe antecedente alguno en dicha causa que vincule a funcionarios de Endesa con las desapariciones, ni ello fue objeto de discusión. Ningún ejecutivo de la empresa fue procesado, investigado ni mucho menos condenado por estos hechos.

Añade que también que dentro de esa causa, otras familias intentaron demandas civiles en contra del Fisco, pero ninguna levantó acción alguna en contra de Endesa. Ello porque, nada vincula a la empresa con la ocurrencia de estos hechos.

Sostiene que la demanda dirigida contra Endesa se funda que ésta habría despedido injustificadamente a los trabajadores, lo que difiere profundamente de los hechos que justifican la demanda entablada contra el Fisco.

Observa que la demanda contra Endesa está mal planteada por varias razones. En efecto, las alegaciones de un presunto despido injustificado no son de competencia de los Tribunales Civiles. Por lo demás, no está del



Foja: 1

todo claro si los actores comparecen a nombre de los trabajadores presuntamente afectados o a nombre propio, alegando perjuicios propios.

Señala por otra parte que los actores se basan en normativa no aplicable a sus pretensiones en lo que a Endesa respecta. En efecto, si lo que demandan es un incumplimiento de obligaciones de índole laboral y, en concreto, despidos injustificados, no se comprende por qué fundan la supuesta responsabilidad de la empresa en normativa internacional que alude únicamente a delitos de lesa humanidad.

Indica que afirman que “recae sobre Endesa S.A. no sólo el deber moral y jurídico de reparación, sino también el deber jurídico de indemnizar, en los términos referidos por la Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Expresa que en ese sentido, la demanda tampoco puede prosperar por cuanto toda la normativa internacional en la que funda sus peticiones hace alusión a la comisión de delitos de lesa humanidad, no a presuntas infracciones a la legislación laboral como se imputa en la presente causa, sin perjuicio de otras consideraciones de improcedencia de la acción.

Observa que no se explica en la demanda cómo se pretende hacer aplicable dicha normativa respecto de su representada, sobre la cual jamás se ha comprobado algún tipo de participación en los secuestros de los que fueron víctimas estos trabajadores. Y, dado que los deberes que según los actores emanan de estos tratados internacionales tienen como premisa la responsabilidad por delitos de lesa humanidad, no cabe proponer su aplicación respecto de Endesa, pues falta tal supuesto.

Manifiesta que si los demandantes optaron por aludir a estos tratados internacionales respecto de Endesa -omitiendo especificar la responsabilidad que en base a esta normativa la cabría a esta empresa- fue porque (i) confunden la responsabilidad que demandan respecto del Fisco con la que exigen respecto de Endesa, las cuales funda en hechos distintos y porque (ii) pretenden introducir también respecto de Endesa el debate sobre la prescriptibilidad de las acciones civiles dirigidas a obtener una reparación por la violación de Derechos Humanos.

Arguye que esa discusión no es pertinente respecto de las reclamaciones que los demandantes dirigen contra Endesa, ya que los



«RIT»

Foja: 1

incumplimientos que alegan respecto de la empresa no dicen relación con delitos de lesa humanidad, sino con supuestas infracciones a sus deberes como empleador en base a un despido presuntamente injustificado.

En cuanto a las excepciones y defensas, en primer término interpone la excepción de incompetencia absoluta del tribunal.

Reitera que la demanda ha sido interpuesta como una demanda civil en contra del Fisco de reparación e indemnización de perjuicios derivados de delitos de secuestro calificado cometidos por agentes del Estado durante el año 1973. Asimismo, respecto a Endesa, los demandantes han expuesto que los supuestos perjuicios alegados derivarían de la relación laboral entre sus familiares y su representada, por un supuesto despido injustificado.

Señala que queda en evidencia que la presente acción se encuentra lejos de ser una acción civil, sino que se trata de una verdadera acción de despido injustificado encubierta, en virtud de la cual los demandantes pretenden que se les paguen las indemnizaciones que a su juicio habrían correspondido a sus familiares por la terminación de la relación laboral, de hecho, se pide “(...) qué Endesa indemnice a cada una de las familiares de los trabajadores desaparecidos pagándoles lo que a ellos les habría correspondido percibir al término de la relación laboral como son el salario correspondiente a días trabajados, la compensación de feriados legales, el 6% de la participación de los obreros, la asignación de Fiestas Patrias y Navidad, la indemnización sustitutiva de aviso previo e indemnización por años de servicios”.

Manifiesta que lo que se pretende que se indemnice son prestaciones laborales supuestamente adeudadas desde el año de 1973 a cinco personas que serían detenidos desaparecidos y que habrían sido trabajadores de su representada, y que habrían sido despedidos por una causal improcedente, según los demandantes.

Expresa que en virtud de lo anterior, opone la excepción de incompetencia absoluta, toda vez que la materia puesta al conocimiento de este Tribunal es de naturaleza laboral, y no civil.

Observa que la competencia ha sido entendida en la doctrina como la potestad que tienen los tribunales para resolver, con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que les sean sometidos a



«RIT»

Foja: 1

proceso, para conciliarlos en tanto corresponda y para intervenir en los demás asuntos que la ley les encomiende.”

Agrega que en términos similares ha sido definido en el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales: “La competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”.

Explica que al hablar de competencia, podemos distinguir entre la competencia absoluta y la relativa. La absoluta es aquella que permite distinguir en razón de la materia o jerarquía el tribunal que será llamado a conocer de un asunto cualquiera. Por su parte, la competencia relativa permite distinguir cual es el tribunal que conocerá un asunto determinado, dentro de la jerarquía ya establecida de conformidad a las normas de la competencia absoluta. Los factores que permiten determinar la competencia absoluta de un tribunal son la materia, el fuero y la cuantía, sin embargo, como vimos anteriormente, en este caso nos referiremos únicamente al elemento materia. Las normas sobre competencia absoluta son normas de orden público y como tales, no son disponibles ni renunciadas por las partes. La incompetencia absoluta se produce entonces cuando un asunto se encuentra en la esfera de atribuciones de un tribunal que no es aquel que está conociendo del asunto, precisamente lo que ocurre en estos autos.

Sostiene que por su parte, el inciso 1° del artículo 1° del Código del Trabajo establece lo siguiente: “Las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias”.

Afirma que si analizamos este artículo en relación con las normas de competencia aplicables a este caso no cabe duda que la acción interpuesta por los demandantes en contra de Endesa es efectivamente una acción de tipo laboral.

Expresa que los propios demandantes han reconocido en su demanda la naturaleza laboral de su acción, señalando: “Solicitaremos que ENDESA indemnice a cada una de las familiares de los trabajadores desaparecidos pagándoles lo que a ellos les habría correspondido percibir al término de la relación laboral”.



«RIT»

Foja: 1

Agrega que en el petitorio de la misma solicitan que se condene a Endesa a: “Pagar, por concepto de daño material directo y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante, a cada una de las familiar demandantes en relación a cada uno de los trabajadores victimas individualizados en la presente demanda, las sumas correspondientes a todos los derechos laborales que les hubiesen correspondido percibir”.

Arguye que queda en evidencia entonces que los propios demandantes han reconocido que la presente acción corresponde en realidad a una demanda de despido injustificado, razón por la cual el tribunal competente para conocer del mismo es el Juzgado de Letras del Trabajo correspondiente.

Añade también que para ratificar todo lo anterior, en la página 84 de la demanda se solicita que las sumas correspondientes a indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicio y compensación de feriado proporcional, "...deberán pagarse con los reajustes e intereses que ordena la ley del trabajo, en sus actuales artículos 63 y 173 del Código del Trabajo..."

Advierte que lo anterior constituye una confesión expresa que se pretende el cobro de prestaciones bajo el estatuto laboral en un juicio civil, lo que resulta en que la presente excepción de incompetencia absoluta debe ser acogida, siendo rechazada la demanda deducida contra Endesa, sin perjuicio que el Tribunal pueda declarar su incompetencia absoluta de oficio. Por la naturaleza de esta excepción, las otras alegaciones, defensas y excepciones que se oponen a continuación son subsidiarias a la incompetencia absoluta alegada.

Opone también la excepción de falta de legitimación activa de los demandantes.

Indica que la legitimación constituye un elemento esencial de la acción, por lo que en caso de no existir, se destruye entonces la acción misma ya que su autor carece de derecho suficiente para imponerla.

Explica que la legitimación se encuentra vinculada entonces con la titularidad del que ha tenido una participación en la situación controvertida, por lo que se trata de un presupuesto de fondo de la procedencia de la acción. La falta de esta exigencia determina ineludiblemente la



«RIT»

Foja: 1

improcedencia de la petición de tutela judicial solicitada mediante el proceso, siendo así un elemento básico para acceder a dicha tutela.

Señala que en el presente caso la falta de legitimación se encuentra evidenciada tanto en la persona de los demandantes como el carácter en que comparecen.

En primer término, se refiere a la falta de legitimidad activa de aquellos demandantes que comparecen como sucesores de familiares de los detenidos desaparecidos

Sostiene que en el caso de la familia del Sr. Arias Zúñiga, la falta de legitimidad activa se configura respecto de los demandantes (i) el Sr. Manuel Alejandro Arias Acevedo, quién comparece por derecho de representación respecto de su padre, el cual a su vez era supuesto hijo del Sr. Arias Zúñiga; y, (ii) María Inés Contreras Alvear, Manuel Jesús Arias Contreras, Yesenia del Pilar Añas Contreras y Valeria Andrea Arias Contreras, todos los cuales comparecen en calidad de supuestos sucesores del Sr. Raúl Arias Vergara, el cual a su vez era supuesto hijo del Sr. Arias Zúñiga.

Añade que su parte, respecto a los familiares del Sr. Badillo García, comparecen en este juicio Guillermina Mellado Badillo y Tais Elena Gallegos Badillo, las dos supuestas hijas de la Sra. Marta Jesús Badillo Mellado, quién a su vez era hija del Sr. Badillo García.

Observa que los demandantes señalados anteriormente comparecen entonces mediante el derecho de representación y/o en su calidad de herederos de quienes a la vez eran hijos de las víctimas de los delitos de secuestros calificados, solicitando a Endesa el pago de todas las prestaciones laborales que habría tenido que pagar a estos producto del término de la relación laboral, y en subsidio que los montos solicitados sean indemnizados a título de daño moral.

Indica que respecto a la solicitud de indemnización por las supuestas prestaciones laborales que adeudaría Endesa producto de la terminación de la relación laboral, esta es totalmente improcedente por cuanto las prestaciones laborales están dotadas de un carácter a todas luces personalísimo, por ende, favorecen únicamente a aquel que efectivamente prestaba dicho servicio en virtud del contrato de trabajo.



Explica que la única excepción la contempla el artículo 60 del Código del Trabajo cuando indica que en caso de fallecimiento del trabajador, las remuneraciones pendientes y otras prestaciones pendientes se pagarán al cónyuge, a los hijos o a los padres del trabajador fallecido, pero sólo hasta un límite de cinco unidades tributarias anuales, lo cual evidentemente escapa de lo solicitado en este caso, en donde se piden indemnizaciones por años de servicio, sustitutiva de aviso previo y feriados por montos mucho mayores que el límite señalado.

En cuanto a la petición subsidiaria de indemnización por daño moral, señala que se configura la falta de legitimación activa respecto de los mismos demandantes señalados en el punto anterior, por cuanto, la acción para solicitar la indemnización de perjuicios por daño moral no es transmisible.

Arguye que nuestra jurisprudencia y doctrina nacional ha reconocido la procedencia de la petición de daño moral por extensión, en el cual el daño directo ha sido sufrido por un individuo, pero las repercusiones de ese daño afectan a terceros.

Afirma que este daño moral por extensión ha sido entendido desde el punto de vista de los familiares del afectado, ya que estos, especialmente en caso de muerte del involucrado, son aquellos que efectivamente sufren las consecuencias del resultado de la acción que se imputa. Sin perjuicio de lo anterior, ha sido entendido que si bien este derecho puede parecer extenso, esta extensión no es tal ya que tiene tres grandes limitaciones, ya que: 1) primero, alcanza únicamente al primer orden de prelación en el cual los familiares más directos excluyen a los más lejanos; 2) el daño debe ser cuantificado en atención a cada persona independiente que el hecho dañoso afecte a más de uno; y 3) que la existencia de un potencial hecho no basta para que se configure el daño moral, sino que este debe ser acreditado, ya que por la naturaleza del ser humano todos reaccionan de una distinta forma frente a un determinado hecho.

Indica que si se analizan estos tres requisitos, se puede determinar que las limitaciones para pedir el daño moral por rebote no solo tiene consecuencias en atención a la persona misma que lo solicita, sino que además por el hecho de ser una acción indirecta requiere de una acreditación más exigente.



Expresa que en el presente caso, los demandantes han solicitado que se paguen los montos solicitados por indemnizaciones laborales a título de daño moral producto del sufrimiento que habrían experimentado por la desaparición de sus familiares. Pues bien, si se analiza entonces el primer requisito, podemos ver que los demandantes referidos en este punto no cumplen con el mismo, ya que los que habrían tenido la legitimación para solicitar la indemnización por daño moral eran los hijos de los detenidos desaparecidos, y no sus nietos ni tampoco las parejas de estos. Asimismo, cabe señalar que si se permitiera que los demandantes dedujeran esta acción, entonces se configuraría una doble indemnización ya que estos pueden demandar por si, por el perjuicio que les podría ocasionar el haber perdido a su familiar, en este caso su abuelo, y luego por el “rebote” de su padre fallecido.

Concluye al respecto que la solicitud subsidiaria de indemnización por daño moral tampoco es procedente ya que no se encuentra amparado por nuestra legislación que una sucesión demande el daño moral indirecto del causante.

Por otro lado, sostiene que la presente acción está en cualquier caso prescrita respecto de Endesa.

Afirma que lo que se demanda es una supuesta responsabilidad extracontractual de Endesa. La acción que intentan los actores contra la empresa, es de contenido derechamente patrimonial. Y ésta, de conformidad al artículo 2332 del Código Civil, prescribe en un plazo de 4 años.

Manifiesta que no puede ser de otra forma, pues lo que dirigen en contra de Endesa es una “acción civil de reparación e indemnización de perjuicios”.

Arguye que entonces, necesariamente la normativa aplicable son las normas del Código Civil, en virtud de las cuales la acción dirigida en contra de Endesa se encontraba largamente prescrita al momento de ejercerse a través de la demanda de autos. En efecto, en materia extracontractual, las acciones prescriben transcurridos cuatro años desde la perpetración del acto.

Señala que los demandantes hace mucho más de cuatro años (hace mucho más de 10 años en realidad) estaban en condiciones y no tenían impedimento alguno para hacer valer ante la justicia las acciones que creían



«RIT»

Foja: 1

detentar contra Endesa. Levantar una demanda más de cuarenta años después de la supuesta perpetración de los actos que se reclaman contraría el principio de seguridad jurídica flagrantemente, de hecho, se afecta el derecho a defensa, ya que luego de tanto tiempo su representada no tiene información sobre sus presuntos ex trabajadores.

Añade que incluso si se estimara que tener certeza sobre lo sucedido a los ex trabajadores era necesario para entablar esta demanda en contra de Endesa, habiendo transcurrido más de 20 años desde la publicación del Informe Rettig, se puede concluir que la presente acción está irremediablemente prescrita. Se puede también analizar el problema de la prescripción considerando que lo que se pide en esta demanda es verdaderamente el pago de prestaciones laborales supuestamente adeudadas por un presunto despido injustificado. Ello consta especialmente en la página 82 de la demanda de autos, donde los actores piden tener presente que “sólo en ellos recaía, en exclusividad, la titularidad de la acción laboral por despido ilegal.

Advierte que si bien la demanda es confusa en este punto, si el daño que se pretende sea indemnizado es aquel que se habría causado a los supuestos ex trabajadores por la supuesta conculcación de sus derechos laborales, la claridad de la prescriptibilidad de la acción deducida se hace aún más evidente, ya que el término de prescripción contemplado por la legislación de la época era de 60 días para el caso de los obreros y de seis meses en el de los empleados, ambos plazos contados desde que se puso fin a los servicios .

Precisa que incluso hoy, según dispone el artículo 510 del Código del Trabajo vigente, el plazo para demandar la nulidad del despido es de seis meses desde la suspensión de los servicios y en cualquier caso la misma norma señala que los derechos regidos por el Código del Trabajo (tales como la indemnización por años de servicio, sustitutiva de aviso previo y feriados proporcionales) prescriben en el plazo de dos años contados desde la fecha que se hicieron exigibles. Así, sólo cabe concluir que bajo cualquier escenario posible, debe rechazarse totalmente la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.



«RIT»

Foja: 1

Agrega que por último, y si bien lo demandado en estos autos es una indemnización por despidos presuntamente injustificados verificados el año 1973, igualmente se hará cargo de la prescripción de la acción, aún si se entendiese que se basa en delitos de lesa humanidad.

Expresa que ningún tratado internacional consagra la imprescriptibilidad de la acción civil o laboral dirigida a obtener la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Señala que ni los tratados vigentes a la época de los hechos, ni aquellos que han entrado en vigencia con posterioridad, han revestido a la acción civil que emana de los daños ocasionados en la comisión de delitos de lesa humanidad de imprescriptibilidad.

Indica que tener presente lo anterior es importante, desde que la prescripción es un principio general del Derecho, tanto interno como Internacional, siendo la imprescriptibilidad una excepción sensibilísima, que por lo mismo debe ser consagrada expresamente e interpretada restrictivamente.

Añade que basta examinar los principales tratados atinentes a la materia para comprobar que no existe norma que consagre una supuesta imprescriptibilidad de la acción civil.

Arguye que es por ello que, quienes sostienen que no cabe aplicar la prescripción de la acción civil emanada de la responsabilidad extracontractual tal como está contemplada en nuestro derecho interno, fallan al indicar la normativa que sí sería aplicable.

Por otro lado, expresa que no constan a su parte a su parte los hechos en que los actores fundan su demanda, por lo que deben tenerse por controvertidos.

Manifiesta que los hechos en que los demandantes fundan su acción de indemnización de perjuicios, desde la existencia de la presunta relación laboral con Endesa, hasta los despidos que habrían tenido lugar durante los últimos meses del año 1973, son aspectos que su parte, aun revisando en sus archivos, no ha podido dar por establecidos ni confirmar su existencia o alcance, y deberán por tanto ser probados por los demandantes.

Indica que a pesar de los esfuerzos realizados con dicho objeto, no se ha podido recabar ninguna información respecto de la existencia o



«RIT»

Foja: 1

inexistencia de la relación laboral, menos de los supuestos contratos que habrían vinculado a las víctimas con la empresa, o sobre la calidad en que éstos habrían sido contratados, sus remuneraciones, el hecho y las circunstancias de los despidos y los términos en que se habría procedido a desvincularlos.

Sostiene que escapa a los mejores intentos que su representada ha emprendido el encontrar los documentos que acreditarían las afirmaciones de los actores. No se contaba, en la época, con sistemas informativos que permitieran respaldar o archivar información; toda la documentación se mantenía en soportes físicos. Pero, se debe tener en cuenta que, incluso contando con estos sistemas, muchas empresas simplemente no mantienen documentos que superen cierta data. Ciertamente no aquellos que den cuenta de contratos terminados hace más de 40 años.

Afirma que es así que se ven obligados a controvertir todos los hechos que sustentan la demanda de autos en relación a Endesa, y en especial, el vínculo laboral que supuestamente vincularía a los señores Manuel Arias Zúñiga, Alamiro Santana Figueroa, Exequiel Verdejo Verdejo, Plutarco Coussy Benavides y José Badillo García con la empresa, las características del contrato si eventualmente existió, el tiempo durante el cual se habría extendido la presunta relación laboral, las eventuales remuneraciones alegadas por los demandantes como representativas de lo que habrían percibido estas personas, el hecho de los despidos y las circunstancias en que se habrían fundado, y cómo se habrían comunicado.

Indica que controvierte también las acusaciones levantadas por los actores en relación a una supuesta “complicidad” o “cooperación” que había adoptado, ya sea por acción u omisión, la compañía en relación a las detenciones de los supuestos trabajadores. Tal como lo reconoce la propia demanda, no hay sentencia alguna que haya determinado la responsabilidad ni de Endesa ni de alguno de sus ex empleados en las detenciones y posteriores desapariciones que se indican en la demanda.

Observa que en este sentido las acusaciones vertidas (i) son absolutamente vagas en cuanto a la forma en que había adoptado esta supuesta “complicidad”, o a las personas que se habrían visto involucradas, (ii) tal como los mismos demandantes reconocen, el proceso penal en donde



«RIT»

Foja: 1

se conoció de estos hechos únicamente determinó la responsabilidad penal de oficiales del Ejército, (iii) contrario a lo que insinúan los actores, no constan en el proceso penal antecedentes que permitan vincular a la compañía con las detenciones (y en ningún caso fue objeto de investigación).

Alega también que la demanda debe rechazarse por la improcedencia y/o inaplicabilidad de las normas en que se funda.

Sostiene que los demandantes indican, como normativa aplicable, básicamente dos grupos de normas. En primer lugar, normativa internacional, toda ella referida a la comisión de delitos de lesa humanidad, como las Convenciones de Ginebra, el Estatuto de la Corte Penal internacional y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Agrega que un segundo grupo de normas sería el conformado por el derecho laboral vigente a la época, el Código del Trabajo y los contratos que habrían regulado la relación entre los trabajadores y Endesa.

Argumenta que la aplicación de las normas de derecho internacional citadas es derechamente improcedente, en tanto falta el supuesto lógico de las mismas, esto es la comisión de delitos de lesa humanidad por Endesa. Es más, la propia demanda en lo que respecta a Endesa no se refiere a actos de lesa humanidad, sino que gira en un supuesto despido injustificado.

Agrega que tampoco en su demanda los actores relatan actos específicos de su representada que pudieran llegar a configurar delitos. A lo más insinúan que Endesa incumplió ciertos deberes como empleador (lo que niegan), situación que no está contemplada en ninguno de los tratados internacionales que invoca. Tampoco se indican las personas determinadas de la Endesa del año 1973 que habrían estado presuntamente involucradas. Así, no cabe extender a Endesa el deber de indemnización que los familiares de las víctimas demandan, fundamentado en obligaciones que emanarían de tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad, pues no participó en los crímenes cuya reparación se exige. Falta entonces la premisa lógica exigida para la aplicación de dicha normativa.

Señala a su turno que los tratados internacionales invocados por los demandantes no estaban vigentes al tiempo de los hechos, esto es, septiembre de 1973.



«RIT»

Foja: 1

Sostiene también que la demanda debe ser en cualquier caso rechazada por ser defectuosa en su planteamiento, carente de fundamentos y completamente inconexa en su exposición y petitorio.

Reitera que ya ha establecido que lo que se quiere es que se indemnicen ciertas sumas en razón de un supuesto despido injustificado. Dado que las circunstancias en que habrían tenido lugar estos despidos no permitieron que los legitimados para deducir la acción pertinente pudieran reclamar la pretendida ilegalidad de los mismos, vienen hoy sus supuestos familiares a pedir “lo que les hubiese correspondido percibir al término de la relación laboral” a los trabajadores como indemnización de perjuicios.

Afirma que si bien la demanda es equívoca en cuanto a la calidad en que accionan los demandantes (otra razón para desecharla), pareciera que la acción que deducen no la ejercen en cuanto herederos. Es decir que los demandante no se presentan como los continuadores legales de estos trabajadores ejerciendo una acción que les correspondía —de hecho manifiestan que la acción laboral respectiva correspondía exclusivamente a los supuestos ex trabajadores— sino que parece que accionan a nombre propio afirmando haber experimentado un daño directo por el no pago de lo que supuestamente les habría correspondido tras haber sido sus familiares desvinculados indebidamente de sus labores.

Añade que para hacer más complejo el escenario jurídico, esta indemnización la piden a título de reparación por la comisión de delitos de lesa humanidad que son responsabilidad de un tercero (o terceros) extraño(s) a Endesa, basándose en normativa internacional no vigente en la época de los hechos que acusan.

Indica que nos encontramos ante un tribunal con competencia en lo civil, conociendo lo que es en realidad una indemnización por un supuesto despido injustificado, en base a normas dirigidas a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuyas sumas se piden que se reajusten de conformidad al Código del Trabajo actualmente vigente.

Arguye que lo anterior no resulta admisible como el estándar mínimo de coherencia que debe tener una demanda, debiendo ser rechazada por cualquiera de las falencias que ha señalado.



«RIT»

Foja: 1

Por último, alega también que no se reúnen los elementos que configuran la responsabilidad extracontractual.

Expresa que todo estatuto de responsabilidad exige que se pueda imputar a una persona una conducta que causa daño. Así, el artículo 2316 del Código Civil indica que “es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos”, en congruencia con lo dispuesto en el artículo 2314 del mismo cuerpo legal: “el que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización”.

Sostiene que en coherencia con lo anterior, para afirmar la responsabilidad se debe imputar a la persona demandada una conducta antijurídica, un hecho suyo reprobado por el ordenamiento jurídico, señalando que a través de la misma se causó, dolosa o culposamente, un daño. Y, en caso de que el daño reclamado no pueda ser atribuido directamente a una conducta del demandado, falta un presupuesto elemental para el éxito de la acción entablada.

Indica que en el caso de autos, los daños sufridos por las familias a consecuencia de los hechos de que fueron víctimas sus familiares, no suponen una situación legitimante para pedir una indemnización de perjuicios respecto de Endesa, ya que esta empresa ninguna participación tuvo en dichos delitos.

Concluye al respecto no cabe afirmar que Endesa sea responsable y por ende esté obligada a indemnizar a las familias de las víctimas por los hechos en que fundan sus pretensiones.

Reitera que los demandantes señalan que comparecen en calidad de partes lesionadas por los delitos de secuestro calificado de sus familiares, y en su mérito deducen la presente acción. Pues bien, desde el minuto que ni Endesa y ni siquiera ex personeros o empleados han sido objeto de condena alguna, es que no puede imputarse a su representada responsabilidad alguna por los daños reclamados.

Expresa que los demandantes indican que el señor Plutarco Coussy Benavides habría sido desvinculado por Endesa el 26 de septiembre de 1973, según constaría en una carta de la misma fecha, la que fundaría el despido en la no concurrencia del trabajador a sus labores. Hacen extensiva esta afirmación respecto de los otros trabajadores: Manuel Jesús Arias



«RIT»

Foja: 1

Zúñiga, Alamiro Santana Figueroa, Exequiel Verdejo Verdejo y José Oscar Badillo García.

Sostiene que sin embargo, ha controvertido tanto la existencia de la relación laboral como todo lo que ello conlleva, por carecer de antecedentes al respecto, cuestiones que deberán ser correspondientemente probadas en su oportunidad.

Añade que sin perjuicio de lo anterior, aún del examen de los hechos relatados por los demandantes, no se observa la antijuridicidad de los supuestos despidos: éstos se habrían realizado en base a la normativa vigente a la época, considerando la información tenida como fidedigna, y en un contexto histórico concreto en el cual, no cabía exigir otra conducta a la compañía debido a la agitación política imperante.

Afirma que aun dando crédito para el presente análisis a lo que se señala en la demanda, los despidos habrían sido originados por hechos ajenos a la empresa que tuvieron como consecuencia la no concurrencia al trabajo y la consecuente comunicación de despido. Cuesta entonces, imaginar cuál es el deber que según los demandantes le cabía a Endesa.

Manifiesta que así, incluso considerando los hechos expuestos por los demandantes, pareciera ser que lo único objetivo a la fecha de los despidos era el hecho de la no concurrencia de los supuestos trabajadores a sus labores. Los hechos que habrían explicado esta no concurrencia no habrían sido ofrecidos como justificación para controvertir los despidos, sino hasta la demanda de autos (largamente prescrita la acción de nulidad del despido, y, como ya fue explicado, mal planteada por los demandantes).

Expresa que dicho lo anterior, resulta útil revisar la legislación de la época para descartar de plano cualquier incumplimiento que pudiera ser imputable a Endesa.

Indica que distintas afirmaciones realizadas por los demandantes permiten inferir que los supuestos trabajadores habrían estado contratados en calidad de obreros, según distinguía el Antiguo Código del Trabajo.

Arguye que esto es relevante, dado que determina la legislación que les sería aplicable. Cabe recordar a este respecto, que los trabajadores de Endesa eran regidos por el Código del Trabajo vigente a la época.



«RIT»

Foja: 1

Expresa que la Ley 16.455 de 1966, que vino a derogar en materia de terminación del contrato de trabajo a las normas contenidas en el antiguo Código del Trabajo, señalaba en su artículo 2° N° 6 que “serán causas justificadas de terminación del contrato de trabajo las siguientes: La no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos (...)”.

Indica que esa era la vía que ofrecía la legislación de la época al empleador que se veía enfrentado a la no concurrencia del trabajador, y la que habría sido adoptada por la Compañía. Colocados en dicha posición, con la información disponible y en el contexto determinado, probablemente habría sido la decisión que habría tomado cualquier empleador de la época.

Reitera que no les constan ni la existencia ni en su caso los términos en que habrían tenido lugar los supuestos despidos, por lo que seguirá tomando sólo como hipótesis lo indicado por los demandantes. Ellos elaboran parte de sus acusaciones apoyándose en la referencia que se habría hecho, en una supuesta carta de despido, al artículo 4 del Decreto Ley N° 32.

Expresa que según los demandantes, no habría forma que la Compañía pudiese haber conocido sobre la existencia y contenido del referido Decreto Ley a la fecha del 26 de septiembre de 1973 (fecha en que supuestamente se habría comunicado el despido), pues éste fue publicado el 04 de octubre de 1973. A partir de lo anterior concluyen que la detención y los despidos habrían estado planeados o coordinados entre la empresa y los agentes del Estado.

Afirma que lo anterior es simplemente absurdo, y sin perjuicio que en cualquier caso ello no daría como resultado el efecto que señalan, basta con señalar que el Decreto Ley en cuestión fue promulgado el 21 de septiembre de 1973, como se reconoce en la misma demanda de autos, es decir antes de la fecha de la referida carta, por lo que todo este argumento queda desvirtuado con sólo revisar las fechas de los actos en cuestión.

En cuanto a los daños, afirma que los demandantes señalan que el despido de sus familiares les habría causado un daño que avalúan según las indemnizaciones a que sus familiares habrían tenido derecho de haber sido correspondientemente desvinculados de sus funciones. Reclaman ese daño



«RIT»

Foja: 1

como daño emergente, esto es, el menoscabo real y efectivo sufrido en sus respectivos patrimonios.

Indica que aquí surge la pregunta ¿cuál es el menoscabo experimentado por el patrimonio de cada uno de los demandantes de asumir, hipotéticamente, que sus familiares fueron indebidamente despedidos?

Manifiesta que sobre las eventuales indemnizaciones que se hubiesen concedido a los trabajadores, sus familiares no tenían derecho alguno. Éstas se habrían incorporado al patrimonio de cada trabajador, y no en el de sus hijos o cónyuges.

Agrega que tampoco podría afirmarse que tenían un derecho a suceder a sus familiares en las indemnizaciones que les habría correspondido, pues antes del deceso del causante, sólo existe una mera expectativa, y sólo nace el derecho tras la apertura de la sucesión, pero no sobre un bien en específico. Podría responderse a esto que, lo que sí se habría incorporado al patrimonio del causante es la acción correspondiente para exigir sus derechos laborales. Pero no es esa acción la que ejercen hoy sus continuadores legales, sino que éstos, a título personal, afirman haber sufrido un daño por no haber accedido a lo que a los respectivos causantes les habría correspondido.

Expresa que toda indemnización por daño se traduce en reparar de forma tal que la víctima del mismo se encuentre en una situación equivalente a la que se encontraría de no haber acontecido el evento dañoso. En este caso, si removemos mentalmente el hecho del despido de los trabajadores ¿cuál habría sido la situación de sus respectivos parientes? Y la respuesta es que en nada se vería mejorada o perjudicada su situación: igualmente, y por hechos ajenos a la voluntad de Endesa, los trabajadores no habrían concurrido a sus labores, y ningún pago les hubiese correspondido a ellos, ni a sus familiares.

Reitera que la demanda está mal planteada porque no se puede pedir como daño directo lo que es indemnización legal a un tercero por despido injustificado. Hay una inconexión entre el daño directo y lo que se pide como reparación.



«RIT»

Foja: 1

Precisa que por las mismas razones no cabe en este caso hablar de lucro cesante, el que además de no explicarse en qué consistiría en la demanda, el patrimonio de los demandantes no dejó de percibir ingresos como consecuencia de los supuestos despidos, por lo que no cabe ninguna posibilidad de lucro cesante en lo que le cabe a Endesa.

Indica que algo similar sucede con el daño moral, no se explica en la demanda por qué de un momento a otro lo pedido como daño emergente y lucro cesante debe ser otorgado en subsidio como daño moral. El daño moral o existe o no existe, no puede ser “subsidiario” a la reparación de un daño emergente o un lucro cesante.

Manifiesta que los demandantes no tienen una idea clara de lo que jurídicamente constituye el daño moral, ya que no puede simplemente transformarse un daño directo o un daño emergente en daño moral por mero capricho, por mucho que sea solicitado subsidiariamente.

Señalan por su parte que la razón invocada como causante de los perjuicios por los demandantes sería el supuesto despido injustificado de supuestos ex trabajadores de Endesa, sin embargo al mismo tiempo señalan que comparecen en calidad de partes lesionadas por los delitos de secuestro calificado de sus familiares.

Advierte que no hay una imputación causal clara en la demanda, pero lo que resulta claro es que en ninguna de ellas existiría responsabilidad de Endesa, puesto que si es que se demostrase la relación laboral y los despidos que señalan los demandantes, habría cumplido con la conducta exigible a un empleador de la época, aplicando la normativa vigente. En lo que respecta los delitos señalados, no se ha establecido responsabilidad alguna ni de Endesa ni de personas que pudieran haber estado vinculadas a ellas de forma de que se genere una responsabilidad legal.

Arguye torcida la relación causal que buscan configurar los demandantes. Si quienes comparecen demandando lo hacen en calidad de partes lesionadas por los delitos de secuestro calificado de sus familiares, entonces a quienes deben demandar es a los responsables de los delitos, y no contra quien habría sido su empleador.

Señala por su parte que el artículo 2329 del Código Civil ordena reparar todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra



«RIT»

Foja: 1

persona. Acorde al artículo 2284 del mismo cuerpo legal, delito es el hecho ilícito cometido con intención de dañar, y cuasidelito el hecho culpable pero cometido sin la intención de dañar.

Observa que difícilmente puede discutirse sobre la intención o no de inferir un daño, entendiendo por tal en este caso, aquél que significó a los familiares directos de los supuestos trabajadores, la supuesta desvinculación de éstos de sus respectivos puestos de trabajo, cuando el despido fue una consecuencia de un hecho ajeno, esto es, la detención por terceros de los supuestos ex trabajadores en un periodo de agitación política. En ese sentido, ni aun comprobándose la existencia de los despidos existiría una culpabilidad de su representada al respecto.

Sostiene a su vez que dado que no pueden ser atribuidos a Endesa los daños que alegan los demandantes, ya que no se debieron al actuar de la misma, sino al actuar de un tercero, no procede pedir a su empresa indemnización por los mismos.

Expresa que ya que los trabajadores habrían sido contratados en calidad de obreros, debe considerarse que respecto de ellos en el antiguo Código del Trabajo nada se decía respecto de la procedencia de indemnización por años de servicio. Tampoco se contemplaban gratificaciones, participaciones, ni pago de feriado proporcional (que se incorporó sólo el año 1978 de forma general).

Manifiesta que los demandantes calculan la indemnización que reclaman conforme a lo que les habría correspondido a los trabajadores desaparecidos percibir al término de la relación.

Indica que en relación a estas peticiones, los Demandantes solicitan que se paguen con los reajustes e intereses que ordenan los artículos 63 y 173 del actual Código del Trabajo, lo cual resulta totalmente improcedente primero por cuanto se trata de normas inaplicables para un Tribunal Civil, y segundo por cuanto se está aplicando reajustabilidad a cantidades ya "actualizadas" o "reajustadas" conforme a la demanda, por lo que se estaría calculando doblemente un factor de reajuste.

Agrega que no existen actualmente en Endesa trabajadores que se desempeñen en labores como las señaladas. Su representada no mantiene contratados maestros mineros o perforistas, dado que no se dedica



Foja: 1

directamente a labores de construcción. Es por lo mismo que la base de cálculo utilizada por los demandantes no puede ser la pretendida, y, por cierto, deberían indicar cuáles serían las fuentes tenidas como “fidedignas” para sostenerla.

Finalmente, afirma que la petición de construir memoriales sería derechamente improcedente. No hay norma alguna que les dé derecho a exigir de esta parte la prestación que demanda, que supone una obligación de hacer. Esta petición no tiene fundamento normativo, y es por lo mismo que no ofrecen los demandantes justificación a su pretensión, lo que es equivalente en definitiva a “pedir porque sí”.

A fojas 367, la parte demandante evacuó el trámite de réplica.

Indica el Consejo de Defensa del Estado contestó la demanda, en términos similares a aquellas causas de derechos humanos de carácter indemnizatorias. Por su parte, Endesa S.A. quizás sea la primera empresa demandada civilmente en una causa cuyo origen radica en delitos de lesa humanidad sufrido por ex trabajadores de ella, algunos dirigentes sindicales.

Observa que las contestaciones de la demanda sin duda son diferentes. El Consejo de Defensa del Estado plantea un marco teórico que expresa la intención de hacer una lectura más general desde donde se inscriben las múltiples acciones judiciales seguidas contra el Fisco de Chile con motivo de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura. Se apoya en el concepto de Justicia Transicional.

Refiere que toda la argumentación desplegada por el Consejo de Defensa del Estado en relación a la denominada “Justicia Transicional” tiene sólo una finalidad: fundamentar la excepción de pago afirmando que la pretensión indemnizatoria inmaterial de los actores es incompatible con los beneficios legales entregados señalando que “permitir a los mismos beneficiarlos iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño”.

Manifiesta que dentro del proceso político de transición hacia la democracia sin duda que está el tema de los derechos humanos. El gobierno democrático del Presidente Patricio Aylwin, primero, el año 1990, y el de don Ricardo Lagos, el año 2004, hicieron su contribución constituyendo las denominadas Comisión Rettig y la Comisión Valech.



«RIT»

Foja: 1

Relata que la Comisión Rettig se abocó exclusivamente al caso de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos y la segunda Comisión a los casos de prisión política y tortura. Ninguna de estas comisiones tuvo el carácter de jurisdiccional, lo que de por sí sería inconstitucional por pertenecerle al Poder Judicial la facultad exclusiva de conocer las causas civiles y penales, de juzgarla y hacer ejecutar lo juzgado. Las leyes que surgieron desde sus Informes en ningún caso fueron sustituyas de la función jurisdiccional, ninguna de ellas establecen la incompatibilidad ni la imputabilidad de las acciones reparativas contenidas en esas leyes con aquellas que por sentencia declaran los tribunales. Sólo los tribunales de la República pueden declarar la existencia de delitos y/o la existencia de un hecho ilícito y dañoso. Ambas Comisiones, Rettig y Valech, denuncian un hecho jurídico, político y moral extremadamente grave: en Chile bajo el régimen dictatorial, de carácter cívico-militar, encabezado por el general Augusto Pinochet, se estableció, especialmente en contra de los opositores pero no únicamente respecto de ellos, sino que masivamente, un régimen de terrorismo de Estado. Esa fue la realidad de Chile bajo la dictadura: se instaló un régimen de terrorista, donde organismos y agentes del Estado -sin duda financiado por el Estado actuaban impunemente en la labor represiva que ejercían bajo el mando político, en manos de los 4 de la junta militar de gobierno.

En cuanto a las excepciones de pago opuesta por el CDE, indica primeramente que son idénticas a ya planteadas por el demandado civil Fisco de Chile, en múltiples causas de derechos humanos, pretendiendo que el Estado de Chile ya ha indemnizado a los actores civiles en conformidad a la Ley N° 19.123, dictada después del Informe de la Comisión Rettig. Señala que no pretende innovar en esta materia así que se remitirá a lo resuelto por los tribunales de Justicia sobre esta materia rechazando la excepción de pago opuesta por el Fisco, estimando que no es posible que el otorgamiento de la asistencia social y legal que requieren las víctimas y los familiares, a que se refiere el artículo 18 de esa misma ley, puedan ser considerado como equivalente al de la indemnización reparativa por concepto del daño moral sufrido por los ofendidos por el delito cometido en contra de la víctima de violaciones a los Derechos Humanos.



En cuanto a la alegación de improcedencia de la indemnización a doña Rosa Inés Santana Figueroa por preterición legal y por haber sido esta actora ya reparada en forma satisfactoria con las reparaciones simbólicas y prestaciones de salud al ser titular por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS), según página 27 de la contestación de la demanda.

Señala que la actora es la única familiar directa de su hermano desaparecido, a quien cuidó desde pequeño dada la pobreza y precariedad de su familia después de la muerte de su padre, cuando ella tenía sólo 5 años de edad. Desde un punto de vista jurídico si siguiéramos las normas de la sucesión intestada ella sería la única heredera de su joven hermano Alamiro, detenido desaparecido a los 22 años de edad al tiempo de ejercerse la presente acción. Su madre murió de cáncer el año 1978. No existe la preterición legal de ella pues nadie le precede con mejor derecho, excluyéndola por prelación. Si el mismo Consejo de defensa del Estado en el párrafo citado le reconoce que por ley es titular del PRAIS la argumentación de la preterición queda desprovista de todo fundamento.

En cuanto a la excepción de prescripción de la acción civil, expresa que sea cual fuese el delito, para pretender el derecho a indemnización por ser víctima de un delito penal es requisito insoslayable demostrar con sentencia judicial en sede penal, de carácter condenatorio, que se haya declarado la existencia del delito y determinado la autoría del mismo. Sin este requisito no procede la acción civil respectiva.

Sostiene que como lo declara la más reciente Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, es completamente improcedente aplicar las normas del Código Civil porque estamos frente a delitos de lesa humanidad regidos por el derecho público internacional y los tratados internacionales de derechos humanos, cuya doctrina puede sintetizarse señalando que en esta clase de delitos, en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental,



«RIT»

Foja: 1

la que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio derecho interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973- 1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario.

En cuanto a la alegación de improcedencia de las indemnizaciones respecto de los actores don Manuel Alejandro Arias Acevedo en representación de su padre fallecido don Manuel Alejandro Arias Vergara; doña maría Inés Contreras Alvear, don Manuel Jesús, doña Yesenia del Pilar y doña Valeria, todos Arias Contreras, en representación de su cónyuge y padre fallecido don Raúl Arias Vergara, ambos fallecidos hijo de la víctima de don Manuel Jesús Arias Zúñiga; doña Guillermina Carmen Mellado Badillo y doña Tais Elena Gallegos Badillo, en representación de su madre doña Marta Jesús Badillo Mellado, fallecida y nietas de la víctima don José Oscar Badillo García, argumenta que es prácticamente idéntica a la que también interpone la otra demandada, Endesa S.A., respecto de estos mismos actores, pero enfoca desde un punto de vista procesal como excepción de falta de legitimación activa. Sin embargo, a diferencia del Fisco de Chile, trata Endesa a las personas mencionadas de “supuestos hijos” o “supuestos sucesores” de hijos de detenidos desaparecidos. Negar lo innegable resulta tortuoso y rebaja el debate jurídico.

Sostiene primer término que, siquiera implícitamente, se reconoce por las demandadas, Fisco de Chile y Endesa S.A., que los hijos y cónyuges vivos de los detenidos desaparecidos que concurren a esta causa como demandante tienen legitimación activa. No la tendrían aquellos hijos de detenidos desaparecidos que fallecieron, esto es, los nietos de detenidos desaparecidos que comparecen a nombre de sus padres y madre fallecidas, “porque solicitar la indemnización de perjuicios por daño moral no es transmisible” (página 14 de la contestación de la demanda de Endesa S.A.).



«RIT»

Foja: 1

Como bien lo señala el Consejo de Defensa se debe incluir a la viuda de don Raúl Arias Vergara.

Señala que los hijos de detenidos desaparecidos vivos tienen derecho. La sucesión de hijos de detenidos desaparecidos fallecidos, no tienen derecho. Así, se pretende establecer una regla discriminatoria entre hijos. Los hijos vivos tienen derecho a indemnización por daño moral y los hijos o la sucesión de los hijos fallecidos, no tendrían derecho aunque actúen por derecho de representación de sus padres. Una discriminación arbitraria.

Sostiene que se opone a esta excepción discriminatoria, fundándolo en una sentencia del Ministro don Jorge Zepeda, en la causa Rol N° 49-2004 (adscrita a la causa Rol 2182-98), que en parte se refiere a esta situación al pretenderse que derechos “personalísimos” no son transmisibles a sus sucesores. Desde luego estamos frente a una sucesión por causa de muerte, que de acuerdo al artículo 588 del Código Civil es uno de los modos de adquirir el dominio. Estamos frente a una sucesión intestada y frente a sucesores a título universal, título que lo es respecto de todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos. De acuerdo al artículo 1097 del Código Civil los herederos a título universal representan a la persona del causante para sucederle en todos sus derechos y obligaciones transmisibles y son los continuadores de la persona del difunto: “el causante vive en sus herederos”.

Arguye que la calificación de derecho “personalísimo” del daño moral sufridos por las víctimas no es sinónimo de intransmisibilidad. El demandado lo reconoce frente a los hijos vivos. La intransmisibilidad de los derechos, como regla de excepción al modo de adquirir y gozar de bienes y derechos por causa de muerte, se opone a la regla general de que todos los derechos son transmisibles. Como toda excepción, debe ser ésta comprendida restrictivamente y significa que, solo puede reconocerse y declararse en sede judicial si expresamente una norma jurídica la admite, y no existe norma alguna en nuestro ordenamiento jurídico que disponga expresamente que el derecho a solicitar los perjuicios provenientes del daño moral causado por el delito, no se transmita desde la víctima fallecida a sus herederos y que se extinga por la muerte del titular. La excepción debe ser expresa, como lo es, a vía de ejemplo, en el derecho a pedir alimentos del



Foja: 1

artículo 334 del Código Civil; en el derecho de usufructo, del inciso segundo, del artículo 773 y en artículo 806 de ese Código; en el derecho de uso y habitación, en el artículo 819 del mismo Código; en las expectativas del fideicomisario, cuando fallece antes de la restitución, del artículo 762 de ese Código; en que tampoco son transmisibles los derechos o expectativas del asignatario condicional, que fallece pendiente la condición suspensiva, en los casos de los artículos 1078 y 1492 del Código mencionado.

Indica que concluye el Ministro don Jorge Zepeda: “En consecuencia, en el reclamo resarcitorio de los actores, acerca de la responsabilidad por el daño moral sufrido por su familiar, como efecto jurídico, en la transmisión de tales derechos, opera el sistema propio de la adquisición de tales derechos por ellos, conforme al modo de adquirir sucesión por causa de muerte.”

“Por este capítulo es necesario expresar que, la denominación de “personalísimo” del derecho se da para reconocer aquél que tiene toda víctima para reclamar el daño moral sufrido por el delito y que el mismo está vinculado a la integridad y dignidad de la persona; y no significa jurídicamente que este vínculo del derecho a la integridad y dignidad de la persona, constituya fundamento jurídico de una supuesta no transmisibilidad de éste, sino que su verdadero significado jurídico es que en la regulación jurídica del derecho, deben además ser considerados preferentemente derechos subjetivos extra patrimoniales oponibles -erga omnes-, es decir, en los que hay sujetos obligados en general, por lo que, en consecuencia, está resguardado el derecho por normas del derecho civil unidas a las de mayor jerarquía jurídica, contenidas en Chile en el capítulo pertinente de la Constitución Política de la República y en los Tratados Internacionales, todo lo cual hace que su alcance y resguardo deba ser determinado conforme a ellas.”

“En suma, actualmente el ordenamiento jurídico ha reivindicado la noción de “derecho personalísimo” como un derecho inalienable del ser humano y no considera en forma alguna que tal denominación implique la intransmisibilidad del derecho por medio del modo de adquirir sucesión por causa de muerte.”



«RIT»

Foja: 1

Reitera que el término “víctima” también comprenderá la familia inmediata. El derecho de representación es una institución del derecho común. Otra cosa sería establecer una discriminación odiosa, sin justificación moral ni jurídica, entre hijos de un mismo tronco, de un mismo causante.

Argumenta que repugna al derecho público, nacional e internacional, la discriminación, toda forma de discriminación, conducta reñida con la dignidad de las personas y del respeto a los derechos humanos.

En cuanto a la excepción de incompetencia absoluta del tribunal opuesta por Endesa S.A., destaca primeramente como hecho esencial que Endesa S.A. no plantea como excepción la falta de legitimación pasiva, lo que implica un reconocimiento expreso que la actual sociedad es la misma y/o continuadora legal de Endesa S.A. existente al año 1973, como empresa autónoma del Estado, dependiente de Corfo. Ha señalado que los hechos ilícitos constitutivos de delitos de lesa humanidad ocurrieron bajo la administración de Endesa como empresa estatal. Estima que Endesa S.A. tenía un estatuto jurídico propio y que por sus actos no podía ni debía responder el Fisco de Chile, por estatal que hubiese sido. En cambio, éste debe responder, y nadie cuestiona aquello, por los actos de los funcionarios públicos como son, entre otros, los funcionarios y agentes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Sostiene que valora que la actual administración privada y trasnacional de Endesa S.A. tácitamente reconozca el vínculo jurídico que la une con aquella que le dio origen como es esa empresa autónoma del Estado, dependiente de Corfo antes de su privatización en los últimos meses de la dictadura cívico-militar.

Expresa que toda la planificación y operación represiva desplegada en la Provincia de Los Ángeles, a cargo de las autoridades militares de esa ciudad, fueron facilitadas al hacer uso de recursos de empresas autónomas del Estado, que fueron orgullo para el país por su calidad técnica y profesional. Como se demuestra en la causa criminal, cuya investigación final la llevó el actual Presidente de la I. Corte de Apelaciones de Santiago,



Foja: 1

Ministro don Jorge Zepeda Arancibia, basada, entre otros, en los testimonios del teniente Walter Klug, la represión brutal y sanguinaria, de la que fueron víctimas dirigentes sociales como estudiantes, campesinos, trabajadores y dirigentes sindicales fueron planificadas por civiles y militares. La caravana de la muerte como se conoce las operaciones de fusilamiento de detenidos, en múltiples ciudades del país, que dirigía el general Sergio Arellano Stark, como delegado personal del Comandante en Jefe del Ejército, Augusto Pinochet, fueron replicadas a niveles locales, en otras caravanas homicidas destinadas a aniquilar o desmembrar a un sector político del país a fin al gobierno constitucional destituido de facto el 11 de septiembre de 1973.

Afirma que erróneamente Endesa S.A. opone la excepción de incompetencia absoluta por estimar que las familias de los trabajadores detenidos desaparecidos estaban ejerciendo las acciones laborales que les habría correspondido a ellos en caso de haber sido despedido injustificadamente.

Sostiene que la demanda es una interpelación a la decencia como virtud moral, definidas en diversos diccionarios “como el valor que hace que una persona sea consciente de la propia dignidad humana”, “manera de obrar justa y honrada”, “dignidad de los actos y en las palabras, conforme al estado o calidad de la persona”.

Explica que Endesa S.A., era la empleadora de los 5 trabajadores desaparecidos, cuyas familias demandan en estos autos. Se interpela, a través de esta acción judicial, al prototipo de un empleador decente, que reconoce la relación laboral, que respeta los derechos de los trabajadores en caso de ser despedido como el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, las indemnizaciones por años de servicios, el pago de las remuneraciones fijas y variables, bonos y asignaciones a que el trabajador tenía derecho.

Señala que Endesa S.A. comunicó el despido de don Plutarco Enrique Coussy el día 26 de septiembre de 1973, cinco días después de su detención-ocurrida el 21 de septiembre- en un bus de Endesa mientras se dirigía a su trabajo, aduciendo la causal de no concurrencia del trabajador a su trabajo durante dos días seguidos (artículo 2o N° 6 de la Ley 16.455),



«RIT»

Foja: 1

pero agregando además las letras a) y d) del artículo 4° del Decreto Ley N° 32, norma que fue publicada el 4 de octubre de 1973, y que estableció que serán causas justificadas de terminación del contrato de trabajo “la comisión de actos ilícitos que hayan impedido o impidan al trabajador concurrir a su trabajo” y “haber dirigido o dirigir la interrupción o paralización ilegales de actividades”. El Jefe de la Central de Antuco a sabiendas o no pudiendo menos que saber es el responsable de la detención de don Plutarco Enrique Coussy, que terminará con su desaparición, delito de lesa humanidad.

Manifiesta que una de las familias demandantes, la familia Arias Zúñiga, conserva un documento firmado por don Jorge Egan Santander por la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa S.A.), posterior a su detención y desaparición.

Hace presente que don Pedro Arias Vergara, hijo de don Manuel Arias Zúñiga, trabajó como topógrafo para Endesa, y da testimonio que a él lo detuvieron el 20 de septiembre de 1973, en un autobús de Endesa “por militares del Regimiento de Los Ángeles, ellos tenían una lista con los nombres de quienes debían detener”, agregando que “con el tiempo me enteré por compañeros de trabajo, quienes eran las personas que habían participado elaborando las listas para detener a todos los que no eran del agrado de la Central”.

Sostiene que el parámetro planteado para determinar el monto de la indemnización por daño moral surge de los escasos antecedentes que las familias han podido conservar respecto de los ex trabajadores de Endesa, hoy detenidos desaparecidos.

Concluye en cuanto a la excepción de incompetencia absoluta del tribunal en razón de la materia, que debe ser rechazada por constituir un absurdo jurídico pues sólo se ha planteado como parámetro para determinar la indemnización reparatoria los conceptos que la integran en caso de despido injustificado y que un empleador respetuoso de la dignidad y derecho de los trabajadores habría pagado al trabajador en la hipótesis más benigna que contempla nuestra legislación laboral como es el despido por necesidad de la empresa.

En cuanto a las defensas del Consejo de Defensa del Estado, afirma primeramente que la apreciación dineraria del daño moral es quizás una de



«RIT»

Foja: 1

las insuficiencias del derecho, pero ello ha sido así planteado desde siglos por la doctrina.

Estima que las peticiones indemnizatorias solicitadas, tanto económicas como de restablecer la verdad y el buen nombre de las víctimas, se encuentran ajustadas al enorme sufrimiento que han experimentado los actores de este juicio y se encuentran además acordes con los montos que en casos similares han sido otorgados por nuestros tribunales.

En cuanto a las defensas de Endesa, reitera que la demanda se dirige contra Endesa S.A. por la responsabilidad que le cabe a ésta, al permitirse que trabajadores que se encontraban prestando servicios en la Central Hidroeléctrica El Toro o la Central Abanico, de su propiedad, fueran detenidos, sea en dependencias de la empresa, sea en buses de la empresa que transportaban a los trabajadores desde los campamentos a la faena, sea en el campamento en que habitaban los trabajadores y sus familias, detención que no habría sido posible sin la connivencia de los ejecutivos y administradores de las faenas respectivas.

Añade que esta es la razón de que la demanda se dirija no solamente en contra del Fisco de Chile, por la responsabilidad que cabe a éste por los actos de sus agentes, que fueron condenados por los delitos de que fueron víctimas los deudos de los actores, sino también contra la empleadora de don Manuel Arias Zúñiga, don Alamiro Santana Figueroa, don Plutarco Coussy Benavides, don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, y de don José Oscar Badilla García, ya que ésta también debe soportar la responsabilidad que le cabe al permitir que sus trabajadores hayan sido detenidos cuando se encontraban en dependencias, transportes o campamentos de la empresa. Es sumamente grave que trabajadores bajo su dependencia y subordinación hayan sido víctima de delitos de lesa humanidad, ello al menos configura la responsabilidad civil a la empleadora, sea por acción o por omisión del deber de protección que la asistía. En la sentencia penal en que se condenó a los agentes del Estado del rango militar, se tiene como hecho acreditado que éstos eran trabajadores de Endesa y que fueron detenidos en lugares o vehículos de propiedad de la empleadora.



«RIT»

Foja: 1

Expresa que este hecho hace evidente la responsabilidad de los ejecutivos de Endesa, y en consecuencia de la empleadora, sea por acción (delación o entrega de trabajadores a organismos represivos) sea por omisión del deber de garantizar la indemnidad de sus trabajadores. Es un hecho notorio la intervención militar de la empresa y de las Centrales Hidroeléctrica El Toro y El Abanico, en que todas las víctimas trabajaban a la fecha en que ocurrieron las detenciones, así como es un hecho acreditado que las víctimas eran dirigentes gremiales y/o sociales, y simpatizantes del gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

Arguye que Endesa S.A. pretende lavarse las manos afirmando que no sabe nada y que no tiene registro alguno.

Señala que su parte tiene conocimiento que Endesa S.A. tiene en su poder toda la información sobre estos trabajadores detenidos desaparecidos.

A fojas 396, el demandado Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado, evacuó el trámite de duplica.

Señala que insiste en la solidez de su posición con las argumentaciones y alegaciones expuestas en la contestación al hacerse cargo de los antecedentes planteados en la demanda, razonamientos que por lo demás han sido recogidos en innumerables fallos de la Excma. Corte Suprema, lo que no ha sido negado.

Afirma que las opiniones que se expresan en la réplica no son uniformes ni definitivas como se expresa, y que además la jurisprudencia sea de absoluto rechazo a las tesis fiscales, pues basta, examinar las diversas sentencias enumeradas en el escrito de contestación a la demanda para desvirtuar tal aseveración, incluso se extractó la única sentencia del Pleno de la Excma. Corte Suprema, de 21 de enero de 2013, que acoge el planteamiento fiscal. Además, no podemos olvidar que la ley siempre debe ser general, y en ese sentido jamás podría particularizar a cada uno de los beneficiarios.

Insiste en que los daños que se pretenden indemnizar por esta vía jurisdiccional son los mismos que fundan los beneficios reparatorios precedentes, pues ellos tienen la finalidad de reparar tanto los daños patrimoniales como morales, lo que significa pretender indebidamente el pago de una doble indemnización.



«RIT»

Foja: 1

En cuanto a la preterición legal de doña Rosa Inés Santana Figueroa, en calidad de hermana de la víctima don Alamiro Santana Figueroa, reitera la improcedencia de su acción indemnizatoria, pues ha sido la ley la que optó por beneficiar al núcleo familiar más cercano, y además por haber sido reparada en forma satisfactiva.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva de las acciones deducidas, refiere que los demandantes estiman que el Fisco, al oponerla, intenta eximirse de responsabilidad al alegar que están prescritas en la especie, a pesar de tratarse de un delito de lesa humanidad. Sostiene que dicha imputación se ve absolutamente desvirtuada con la actitud diligente y oportuna del Estado con la dictación de diferentes textos legales que contemplan la reparación integral de las víctimas y familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, como extensamente fue explicado al contestar la demanda.

Expresa que el Fisco ha sido claro y tajante en sostener en forma invariable que al tratarse de acciones civiles, aunque deriven de delitos o crímenes de lesa humanidad, tienen el carácter de patrimoniales, y, por ende, al no existir ninguna norma expresa en el ordenamiento jurídico interno o del derecho internacional de los derechos humanos que prohíba o impida aplicar la prescripción extintiva, no puede el tribunal prescindir de su aplicación.

Indica que no merece duda que los crímenes o delitos de lesa humanidad son imprescriptibles al estar así expresamente establecido en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, pero con la misma precisión, cabe insistir que no ocurre lo mismo en cuanto a los aspectos civiles derivados de dichos crímenes, al no existir una norma escrita semejante.

En cuanto a la improcedencia de las acciones respecto de los demandantes miembros de las sucesiones de los hijos fallecidos de las víctimas, insiste en sostener que la acción por daño moral es personalísima.

A fojas 400, la demandada Endesa S.A. evacuó el trámite de dúplica.

Señala primeramente que reitera y ratifica todas y cada una de las consideraciones, excepciones y defensas opuestas al contestar la demanda.



«RIT»

Foja: 1

Arguye que la réplica de la demanda nada amplía, adiciona ni complementa a su defensa, sino que se trata de una simple reiteración de lo señalado en la demanda, adoleciendo de los mismos defectos de esta.

Indica que la contraria acusa a su defensa de “rebajar el debate jurídico”, pero en realidad es ella la que no aporta argumentos jurídicos para sustentar su demanda en contra de Endesa.

En cuanto a los perjuicios demandados, manifiesta que los demandantes incurren en una evidente contradicción entre la petición principal de la demanda respecto de Endesa, esto es la indemnización de daños directos emanados del supuesto despido injustificado de los familiares de los demandantes, y la petición subsidiaria de indemnización por daño moral.

Advierte que los demandantes parecen desentenderse de la petición principal de su libelo, esto es, la indemnización de daños directos emanados de pretendidos despidos injustificados de sus familiares, mezclándola o tal vez reemplazándola con su petición subsidiaria de indemnización por daño moral. Pareciera que los demandantes quieren enrocar su petición subsidiaria de daño moral y hacerla ahora su petición principal, lo que han debido hacer por la evidente improcedencia y falta de fundamento de la acción verdaderamente laboral que han deducido.

Observa que los demandantes afirman en primer lugar que esta no es una acción laboral, por lo que señalan que no les sería aplicable esa legislación. Sin embargo, al igual que en su demanda, se contradicen al tratar de exponer los hechos que explicarían la supuesta responsabilidad de Endesa, pues señalan que esta derivaría de la vulneración de derechos laborales de sus familiares por el despido injustificado de estos, de omisiones del deber de empleadora e incluso de actos realizados por dependientes. Tras desechar la aplicación de la normativa laboral, sostienen los demandantes que tampoco serían aplicables las normas de derecho común contenidas en el Código Civil, a pesar de reconocer que la acción contra Endesa es una acción civil.

Añade que ni los tratados internacionales aludidos en la demanda de autos ni la Resolución 60/147 de la Asamblea de Naciones Unidas, referidos exclusivamente a la comisión de delitos de lesa humanidad, sirven



«RIT»

Foja: 1

para fundar una acción de indemnización por los daños supuestamente causados a terceros por el despido de un trabajador.

Concluye al respecto que las alegaciones de los demandantes no menoscaban los argumentos de su parte ya que: (i) este Tribunal es incompetente para conocer la demanda de autos, la cual es de una manifiesta naturaleza laboral; (ii) en subsidio, la demanda de autos está irremediablemente prescrita; y, (iii) aún en el caso hipotético en que se desechen las mencionadas excepciones, no se reúnen los elementos que configurarían una responsabilidad extracontractual.

En cuanto a la excepción de incompetencia absoluta opuesta por su parte, señala que la parte demandante en su réplica no ha sido capaz de argumentar las razones por las cuales el tribunal sería competente para conocer de este asunto a pesar de la evidente naturaleza laboral de la acción interpuesta en contra de Endesa, sino que simplemente ha descartado los argumentos esgrimidos por su parte.

Manifiesta que su parte no puede comprender cómo los demandantes pueden sostener en su réplica que su demanda no es una acción de naturaleza laboral, cuando estos mismos han señalado de manera tajante y clara que las normas del Código del Trabajo de la época serían especialmente aplicables al presente caso, incluso piden que las sumas que otorgue este Tribunal sean reajustadas conforme lo dispone el Código del Trabajo.

Razona que la única explicación que existe para tanta contradicción es que los demandantes simplemente acomodan sus pretensiones y los fundamentos de las mismas de manera antojadiza, invocando la normativa civil o laboral, dependiendo de lo que estiman más conveniente en relación a los argumentos que sostienen en cada caso.

Arguye que los demandantes pretenden sustentar una acción que ellos califican como civil, sobre la base de la relación laboral existente entre sus familiares y Endesa, argumentando que su representada habría infringido sus deberes de empleador tanto respecto a su deber de cuidado como al pago de prestaciones por el término de la relación laboral.

Agrega que una acción que se fundamenta en la existencia de un contrato de trabajo, en virtud de la cual se imputan faltas a los deberes



«RIT»

Foja: 1

derivados de la relación de subordinación y dependencia, y se solicita el pago de indemnizaciones por sustitución de aviso previo, por años de servicio y otras asignaciones -todas ellas reajustadas conforme a lo dispone el Código del Trabajo - no puede sino ser laboral.

Por lo anterior, afirma que no existiría duda alguna de que el tribunal esa todas luces incompetente para conocer de la demanda interpuesta en contra de Endesa, ya que la incompetencia absoluta se produce cuando un asunto se encuentra en la esfera de atribuciones de un tribunal que no es aquel que está conociendo del asunto, precisamente lo que ocurre en estos autos.

Sostiene que los demandantes pretenden salvar en su réplica -sin lograrlo- el evidente error de haber interpuesto su demanda ante un tribunal absolutamente incompetente, mediante la negación y modificación de lo solicitado en su demanda, lo cual es simplemente improcedente. Estos párrafos contendrían la única explicación y sustento que dan los demandantes para intentar imputar alguna responsabilidad a su representada y, como ya vimos, dan cuenta de evidentes contradicciones entre los argumentos esgrimidos en la demanda y en la réplica.

Afirma que en la réplica los demandantes no han sido capaces de explicar de qué modo esta acción, a todas luces laboral por despido injustificado, sería civil en el caso de sus familiares, por lo que simplemente lo niegan e inician una retórica circular que se aleja totalmente de lo demandado originalmente, con el fin único de salvar la evidente incompetencia.

Expresa que tal es la falta de fundamento de las afirmaciones de los demandantes, que en un párrafo sostienen la naturaleza civil, para luego referirse a las prestaciones supuestamente adeudadas por su representada por un inexistente despido injustificado.

En a la excepción de prescripción, indica que los demandantes se remiten a los argumentos que desarrollan respecto de la excepción de prescripción opuesta por el Fisco, obviando absolutamente las razones entregadas en su contestación a la demanda por las que la discusión sobre una supuesta imprescriptibilidad de la acción de reparación emanada de la comisión de delitos de lesa humanidad simplemente no cabe respecto de



«RIT»

Foja: 1

Endesa, quien no ha sido investigada ni mucho menos condenada en relación a dichos delitos.

Arguye que las pretensiones de los demandantes en contra del Fisco se basan en hechos y fundamentos de derecho distintos a los sostenidos respecto de Endesa.

Señala que respecto del Fisco, los demandantes pretenden la reparación del daño moral sufrido como consecuencia de la perpetración de delitos de lesa humanidad sobre sus parientes.

Afirma que respecto de Endesa, los demandantes piden indemnización del daño emergente y lucro cesante que les habrían significado los supuestos despidos de sus parientes, quienes habrían trabajado en la compañía al tiempo de sus desapariciones. Avalúan tales daños acorde a lo que supuestamente les habría correspondido recibir a los trabajadores de haber sido propiamente desvinculados de Endesa.

Observa que pesar de que ambas acciones son abiertamente distintas, los demandantes insisten en tratar de confundirlas. Pero de una rápida revisión de los principales argumentos se puede concluir que éstos no resultan aplicables a la acción deducida en contra de Endesa.

Reitera que ni Endesa ni sus trabajadores o ex trabajadores fue investigada, acusada, o mucho menos condenada por la comisión de tales crímenes en la sentencia penal invocada en este procedimiento.

Agrega que prueba de que correspondería acoger la excepción de prescripción sostenida por Endesa es que los demandantes no hayan controvertido ninguno de los argumentos desarrollados por su parte en relación a la inaplicabilidad de las normas en que funda la supuesta imprescriptibilidad de su acción.

En cuanto a los requisitos que configuran la responsabilidad extracontractual, señala que los demandantes no controvierten el hecho de que no concurren los elementos que configurarían la responsabilidad extracontractual que alegan respecto de Endesa. Ni siquiera consideran este argumento dentro de la enumeración de alegaciones y defensas.

En cuanto a los daños, arguye que siguen sin estar claros. Y, al ser incapaces de explicar cuál habría sido el daño emergente y el lucro cesante que pidieron en lo principal de su demanda, los actores optaron por no



«RIT»

Foja: 1

hacerse cargo de este reparo y referirse exclusivamente en su réplica al daño moral.

Manifiesta que eso no quita el que la indemnización por daño moral hubiese sido solicitada sólo subsidiariamente. Ello resulta francamente curioso, ya que una conducta antijurídica o bien causa daño moral o no lo causa. Y si se causa, forma parte de la reparación íntegra que ordena la ley, y dentro de la misma debe pedirse. Por lo demás, al solicitarlo en subsidio, lo hacen inexplicablemente equivalente a lo pretendido por daño emergente y lucro cesante.

Añade que se debe tener presente que la causa del daño moral relatado por los demandantes sería supuestos despidos que estaban en regla con la legislación y la información disponible en la época, e importaron el ejercicio legítimo de un derecho.

Por último, reitera a su vez que corresponderá a los demandantes acreditar las afirmaciones que sustentan sus pretensiones respecto de Endesa. En especial, si bien no exclusivamente, los vínculos laborales que habrían unido a los trabajadores a la empresa, los términos de los supuestos contratos, el tiempo en que habrían trabajado en esta, las remuneraciones que habrían recibido, el hecho de los supuestos despidos, los términos y circunstancias de los mismos, junto con las cartas en que se habrían comunicado, deberán ser comprobados en la oportunidad procesal pertinente.

A fojas 408, y rectificando a fojas 459, se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

A fojas 1044, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a fojas 1, doña Lilian Marilyn Arias Vergara; doña Angelina del Pilar Arias Vergara; don Pedro Luis Arias Vergara; don Manuel Alejandro Arias Vergara, fallecido, representado por su hijo don Manuel Alejandro Arias Acevedo; don Raúl Arias Vergara, fallecido, representado por su cónyuge sobreviviente doña María Inés Contreras Alvear, y sus hijos don Manuel Jesús Arias Contreras, doña Yesenia del Pilar Arias Contreras y doña Valeria Andrea Arias Contreras; doña Rosa Inés Santana Figueroa; don Roberto Exequiel Verdejo Quichel; doña Edith



«RIT»

Foja: 1

Elizabeth Verdejo Quichel; don Leonel Omar Verdejo Quichel; doña Ariela del Carmen Verdejo Quichel, doña Irene Quichel Carrasco; doña Mireya Adriana Rivera Veliz; don Enrique Antonio Coussy Rivera; doña Carolina Antonieta Coussy Rivera; doña Gisela Angélica Coussy Rivera; don Alexseis Wladimir Coussy Rivera; doña Irma Inés Badillo Mellado; don Raúl Vicente Badillo Mellado; doña Marta Jesús Badillo Mellado, fallecida, representada por doña Guillermina Carmen Mellado Badillo, y doña Tais Elena Gallegos Badillo, representada a su vez por su padre don Edgardo Julio Gallegos Mellado, interponen acción civil de reparación e indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile y en contra de la empresa Endesa S.A., conforme los antecedentes de hecho y de derecho previamente reseñados en la parte expositiva de este fallo.

SEGUNDO: Que, a fojas 253, doña Irma Soto Rodríguez, abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por la parte demandada Fisco de Chile, contesta la demanda solicitando su rechazo, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho reseñados en la parte expositiva de este fallo.

A su turno, a fojas 342, don Raimundo Moreno Cox, en representación de la demandada Empresa Nacional de Electricidad S.A., contesta la demanda solicitando su rechazo, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho reseñados en la parte expositiva de este fallo.

TERCERO: Que la parte demandante, a fin de acreditar los hechos en que funda su acción, acompañó los siguientes documentos al proceso, en forma y sin objeción acogida:

En el expediente:

1.- A fojas 91, copia autorizada de sentencia definitiva de primera instancia de fecha 18 de noviembre de 2010 dictada por el Ministro de Fuero, don Jorge Zepeda Arancibia, en causa Rol N° 2182-98.

2.- A fojas 157, copia autorizada de sentencia definitiva de segunda instancia, de fecha 25 de octubre de 2013, dictada por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago, rol de ingreso corte 105-2011.

3.- A fojas 183, copia autorizada de sentencia de la Corte Suprema, de fecha 23 de octubre de 2014, rol de ingreso corte 17.030-2013.



«RIT»

Foja: 1

4.- A fojas 234, copia de finiquito de fecha 1 de diciembre de 1973, emitido por Empresa Nacional de Electricidad a don Manuel Arias Zúñiga.

5.- A fojas 235, copia de Diario Oficial de 4 de octubre de 1973.

6.- A fojas 237, página 5 del Cuerpo B) de El Mercurio, de 21 de mayo de 2016.

7.- A fojas 319, certificado de defunción de doña Marta Jesús Badillo Mellado.

8.- A fojas 320, certificado de nacimiento de doña Tais Elena Gallegos Badillo.

9.- A fojas 321, certificado de matrimonio de don Raúl Patricio Arias Vergara con doña María Inés Contreras Alvear.

10.- A fojas 322, certificado de defunción de don Raúl Patricio Arias Vergara.

11.- A fojas 323, certificado de nacimiento de don Manuel Jesús Arias Contreras.

12.- A fojas 324, certificado de nacimiento de doña Yesenia del pilar Arias Contreras.

13.- A fojas 325, certificado de nacimiento de doña Valeria Andrea Arias Contreras.

14.- A fojas 468, certificado de matrimonio de don Manuel Jesús Arias Zúñiga con doña Audolia del Carmen Vergara Castro.

15.- A fojas 469, certificado de nacimiento de doña Lilian Marylin Arias Vergara.

16.- A fojas 470, certificado de nacimiento de doña Angelina del Pilar Arias Vergara.

17.- A fojas 471, certificado de nacimiento de don Pedro Luis Arias Vergara.

18.- A fojas 472, certificado de nacimiento de don Manuel Alejandro Arias Vergara.

19.- A fojas 473, certificado de nacimiento de don Raúl Patricio Arias Vergara.

20.- A fojas 474, certificado de defunción de don Manuel Alejandro Arias Vergara.



«RIT»

Foja: 1

21.- A fojas 475, certificado de nacimiento de don Manuel Alejandro Arias Acevedo.

22.- A fojas 476, certificado de defunción de don Raúl Patricio Arias Vergara.

23.- A fojas 477, certificado de matrimonio de don Raúl Patricio Arias Vergara con doña María Inés Contreras Alvear.

24.- A fojas 478, certificado de nacimiento de don Manuel Jesús Arias Contreras.

25.- A fojas 479, certificado de nacimiento de doña Yesenia del Pilar Arias Contreras.

26.- A fojas 480, certificado de nacimiento de doña Valeria Andrea Arias Contreras.

27.- A fojas 481, certificado de nacimiento de don Alamiro Segundo Santana Figueroa.

28.- A fojas 482, certificado de nacimiento de doña Rosa Inés Santana Figueroa.

29.- A fojas 483, certificado de nacimiento de don Roberto Exequiel Verdejo Quichel.

30.- A fojas 484, certificado de nacimiento de doña Edith Elizabeth Verdejo Quichel.

31.- A fojas 485, certificado de nacimiento de don Leonel Omar Verdejo Quichel.

32.- A fojas 486, certificado de nacimiento de doña Ariela del Carmen Verdejo Quichel.

33.- A fojas 487, certificado de matrimonio de don Plutarco Enrique Coussy Benavides con doña Mireya Adriana Rivera Veliz.

34.- A fojas 488, certificado de nacimiento de doña Gisela Angélica Coussy Rivera.

35.- A fojas 489, certificado de nacimiento de don Enrique Antonio Coussy Rivera.

36.- A fojas 490, certificado de nacimiento de don Alexseis Wladimir Coussy Rivera.

37.- A fojas 491, certificado de nacimiento de doña Carolina Antonieta Coussy Rivera.



«RIT»

Foja: 1

38.- A fojas 492, certificado de nacimiento de doña Irma Inés Badillo Mellado.

39.- A fojas 493, certificado de nacimiento de don Raúl Vicente Badillo Mellado.

40.- A fojas 494, certificado de nacimiento de doña Marta Jesús Badillo Mellado.

41.- A fojas 495, certificado de defunción de doña Irma Inés Badillo Mellado.

42.- A fojas 496, certificado de nacimiento de doña Guillermina Carmen Mellado Badillo.

43.- A fojas 497, certificado de nacimiento de doña Tais Elena Gallegos Badillo.

44.- A fojas 498 y 616, copia de comprobante de feriado de Empresa Nacional de Electricidad - Endesa, N° 6608, de fecha 22 de julio de 1968, correspondiente a don José Badilla.

45.- A fojas 499 y 617, copia de comprobante de feriado de Empresa Nacional de Electricidad - Endesa, N° 4626, de fecha 31 de marzo de 1967, correspondiente a don José Badilla.

46.- A fojas 500 y 618, copia de comprobante de feriado de Empresa Nacional de Electricidad - Endesa, N° 6177, de fecha 12 de octubre de 1967, correspondiente a don José Badilla García.

47.- A fojas 501 y 619, copia de comprobante de feriado de Empresa Nacional de Electricidad - Endesa, operario N° 5993, de fecha 2 de mayo de 1973, correspondiente a don Exequiel Verdejo Verdejo.

48.- A fojas 502, copia de certificado, Endesa Chile, de fecha 2 de junio de 2016, en el que se certifica que don Manuel Jesús Arias Zúñiga trabajó para Endesa S.A.

49.- A fojas 503, copia de certificado, Endesa Chile, de fecha 4 de octubre de 1991, en el que se certifica que don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo trabajó en dicha empresa hasta noviembre de 1973.

50.- A fojas 504, carta de despido de fecha 26 de septiembre de 1973, dirigida a Enrique Coussy Benavides.



«RIT»

Foja: 1

51.- A fojas 505, copia de certificado, Endesa Chile, de fecha 4 de octubre de 1991, en el que se certifica que don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo trabajó en dicha empresa hasta noviembre de 1973.

52.-A fojas 506, copia de contrato de trabajo suscrito por don Enrique Coussy Benavides, de fecha 6 de agosto de 1963.

53.- A fojas 507 y 620, copia de contrato de trabajo suscrito por don Enrique Coussy Benavides, de fecha 4 de noviembre de 1965.

54.- A fojas 509, copia de finiquito, de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. Endesa, de fecha 1 de diciembre de 1973, de don Manuel Arias Zúñiga.

55.- A fojas 511, copia de certificado del Ministerio del Interior, de fecha 21 de agosto de 2000, que da cuenta de reconocimiento como víctima de don Plutarco Enrique Coussy Benavides, suscrito por Jorge Burgos Varela, Subsecretario del Interior.

56.- A fojas 512 y siguientes, copia de registros respecto de don Manuel Jesús Arias Zúñiga, don Alamiro Santana Figueroa, don Exequiel Verdejo Verdejo, don Plutarco Enrique Coussy Benavides y don José Oscar Badilla García.

57.- A fojas 517, copia de diario La Tribuna de Los Ángeles, de fecha 6 de octubre de 1973, original guardado en la Biblioteca Nacional.

58.- A fojas 525, copia de informe médico psiquiátrico, de fecha 2 de febrero de 2017, correspondiente a don Pedro Arias Vergara, suscrito por el Dr. Rubén Regardiz Salas, de la Universidad Andrés Bello

59.- A fojas 528, copia de informe psicológico, de fecha 3 de septiembre de 2015, correspondiente a doña Lilian Marylin Arias Vergara, suscrito por don Jorge Andrés Rojas Bravo, Psicólogo, Programa de Reparación y Atención Integral en Salud Prais Maule.

60.- A fojas 531, copia de certificado médico psiquiátrico de fecha 3 de junio de 2015, respecto de a Lilian Marylin Arias Vergara, suscrito por la Dra. Claudia L. Ramírez Trillos, Médico-Psiquiatra, Servicio de Salud del Maule.

61.- A fojas 532, copia de informe médico, de fecha 6 de mayo de 2015, correspondiente a doña Rosa Inés Santana Figueroa, suscrito por la



«RIT»

Foja: 1

Dra. Miriam López Rodríguez, Médico Integral Prais, Servicio de Salud del Maule.

62.- A fojas 533, copia de Informe Psicológico, de fecha 5 de mayo de 2015, correspondiente a doña Rosa Inés Santana Figueroa, suscrito por don Jorge Andrés Rojas Bravo, Psicólogo, Programa de Reparación y Atención Integral en Salud Prais Maule.

63.- A fojas 536, copia de informe médico, de fecha 21 de junio de 2015, correspondiente a los familiares de don Plutarco Enrique Coussy Benavides, firmado por don José Miguel Guzmán Rojas, Director Ejecutivo Centro de Salud Mental y Derechos Humanos Cintras.

64.- A fojas 542, copia de informe psicológico, de fecha 20 de enero de 2017, correspondiente a don Raúl Vicente Badillo Mellado, suscrito por doña Paula Veliz Bernt, Psicóloga Minsal.

65.- A fojas 545, copia de ficha clínica N° 390504, de la Sra. Irene Quichel Carrasco en Hospital de Talca.

66.- A fojas 571, copia de relato suscrito por doña Angelina del Pilar Arias Vergara.

67.- A fojas 573, copia de relato suscrito por doña Valeria Arias Contreras.

68.- A fojas 575, copia de relato suscrito por doña María Contreras Alvear.

69.- A fojas 576, copia de relato suscrito por don Manuel Jesús Arias Contreras.

70.- A fojas 577, copia de relato suscrito por don Manuel Alejandro Arias Acevedo.

71.- A fojas 578, copia de relato de don Pedro Luis Arias Vergara.

72.- A fojas 581, copia de relato suscrito por doña Lilian Marylin Arias Vergara.

73.- A fojas 582, copia de relato suscrito por doña Rosa Inés Santana Figueroa.

74.- A fojas 584, copia de relato de doña Edith Verdejo.

75.- A fojas 586, copia de relato de doña Ariela Verdejo Quichel.

76.- A fojas 592, copia de relato de don Leonel Omar Verdejo Quichel.



«RIT»

Foja: 1

77.- A fojas 593, copia de relato de don Roberto Exequiel Verdejo Quicel.

78.- A fojas 595, copia de relato de doña Mireya Rivera Veliz.

79.- A fojas 598, copia de relato de doña Irma Badillo.

80.- A fojas 643, copia de reglamento interno de orden, higiene y seguridad, de Endesa S.A., de septiembre de 2016.

81.- A fojas 696, copia de relato suscrito por doña Yesenia del Pilar Arias Contreras.

82.- A fojas 696v, certificado de defunción de doña Audolia del Carmen Vergara Castro.

CUARTO: Que, a solicitud de la parte demandante de fojas 600, la demandada Endesa S.A. exhibió en autos los siguientes documentos, en audiencia celebrada con fecha 2 de enero de 2018, cuya acta consta a fojas 873.

1.-A fojas 868, copia de documento denominado “Nóminas. Carpetas de obreros retirados.”

QUINTO: Que, a fojas 611, 965 y 984, la parte demandante también se valió de prueba testimonial, consistente en las declaraciones de los testigos doña Virginia Teresa Vega Alvarado, doña Bernarda de Lourdes Campos Pinto, don Jorge Andrés Rojas Bravo, don Pedro Fernando Muñoz Moya y doña Ana María Riveros Tapia, quienes legalmente examinados y sin tacha expusieron:

La primera testigo, en cuanto al punto número 2 del auto de prueba, señala que los trabajadores de Endesa fueron detenidos en dependencias de su trabajo, es decir en Endesa, con lista en mano. De esto se enteró en la comisión de derechos humanos y posteriormente por la cónyuge del detenido Plutarco Coussy, Sra. Mireya Rivera. Por ella se enteró además, de todo lo que había sufrido junto a sus hijos que eran tres y un hijo póstumo. El lugar dónde estos detenidos desaparecieron estarían hasta el día de hoy no se sabe.

Repreguntada para que diga qué es lo que supo en la comisión de derechos humanos, sobre la desaparición de don Plutarco y de sus compañeros, señala que él habría sido bajado de una micro por un señor militar, que tenía una lista en mano, y así sucesivamente al resto de los



«RIT»

Foja: 1

trabajadores que fueron siete u ocho. La fecha exacta de ocurrido esto no la recuerda.

En cuanto al punto número 4 del auto de prueba, afirma que la familia y los hijos en particular sufrieron daños, ya que los hijos no se pudieron educar adecuadamente, estuvieron con psicólogo y una de sus hijas, Gisela, hasta el día de hoy permanece con tratamiento psiquiátrico.

Precisa que lo anterior lo sabe y le consta porque ha conversado con la Sra. Mireya, unos tres años después de que sucedieron estos hechos. Debe haber sido en los años 1976 o 1977, que fue cuando se encontró con ella.

Repreguntada para que diga si sabe en qué condiciones vivía la familia de don Plutarco Coussy en la época que la conoció, indica que en muy malas condiciones económicas y síquicas, porque hacía solo trabajos esporádicos y tenía cuatro hijos chicos.

Repreguntada para que diga si en esa época seguía buscando a su marido, señala que sí y hasta el día de hoy lo sigue buscando. Esto lo sabe y le consta, porque trabaja con la comisión de derechos humanos de la agrupación de detenidos desaparecidos.

La segunda testigo, en cuanto al punto número 1 del auto de prueba expresa que don Plutarco y otros trabajadores de Endesa iban a su trabajo en un bus de la misma empresa Endesa a su lugar de trabajo y fueron bajados con lista en mano, don Plutarco y los demás de los cuales no recuerda su nombre. Desde ese día comenzó el peregrinar de la Sra. Mireya buscando a su marido junto a sus hijos, todos chicos y con uno en el vientre, hasta el día de hoy, sin encontrarlo. La parte solidaria que tiene con ella, es haberla visto sufriendo por el hecho de no tener a su marido y sus hijos sin su padre, ese sufrimiento no tiene precio.

Agrega que lo anterior lo sabe y le consta porque llegó a vivir a la casa de ellos es decir de Plutarco y Mireya, les arrendó la casa alrededor de un año y medio, en los años 1968 y 1969, hasta que le salió su casa, estaba recién casada y tenía dos niños. Por eso le consta lo sucedido, porque vio el sufrimiento Mireya y de sus hijos, los conoce a todos, incluso a Wladimir, que nació después de la desaparición de su padre.

Repreguntado para que diga si sabe dónde trabajaba don Plutarco en los años en que ella les arrendó la casa, manifiesta que en Endesa. Él



Foja: 1

trabajó diez años en Endesa, hasta el día que desapareció. Y ellos le arrendaron su casa, porque en esos años trabajaba en El Toro, Los Ángeles.

El tercer testigo, en cuanto al punto número 4 de prueba, señala que la usuaria que es la Sra. Lili Arias está ingresada al programa PRAIS donde el testigo trabaja, que es un programa de reparación y que atiende a las víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura militar. De acuerdo a los antecedentes del programa, la Sra. Lili habría ingresado al programa el año 2006 para atención clínica. Los antecedentes que maneja es que ella en distintos períodos desde el 2006 empezó a tener atenciones en la parte física como mental por cuadros asociados a depresiones recurrentes y trastornos ansiosos, dando cuenta además de sintomatología por estrés postraumático. De acuerdo a los antecedentes que constan en la ficha, a la desaparición de su padre ella tenía trece años, lo cual con el tiempo se configura como un episodio traumático y tremendamente doloroso, el cual la lleva a consultar en distintas épocas de su vida incluso en distintos períodos del año. El período más crítico para ella desde el punto de vista sintomático es en los meses de septiembre y octubre. Dentro de los síntomas que ella presenta es tristeza recurrente, desánimo, imposibilidad de generar un relato que integre todo lo que ocurrió en esa época de su vida, le cuesta mucho hablar sin llegar a desbordarse. En ocasiones incluso en sesión quedó en evidencia la imposibilidad de generar un relato sin llegar al llanto y a recordar una figura paterna que no la inundara de una emoción muy dolorosa. Si bien ella lleva mucho tiempo siendo parte y participando activamente de una agrupación que existe en Talca de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, la búsqueda de verdad y justicia ha sido un camino largo, pesado y no con muchas satisfacciones, ya que el dolor de ella como de los otros integrantes se ve tremendamente potenciado por la violencia de cada uno. Su experiencia con familiares de DDDD o ejecutados políticos le dice que estos cuadros con el paso del tiempo se han ido cronificando con difícil resolución desde el punto de vista de la salud mental. Para ellos como programa y para él como psicólogo del programa no es extraño que estos pacientes consulten en reiteradas oportunidades puede ser dentro del mismo año o en distintos períodos de su vida ante eventos que les han gatillado



Foja: 1

recuerdos de lo vivido como traumático. Es tan compleja esta situación que hasta los eventos más inocuos o sencillos en la vida como el nacimiento de un nuevo integrante de la familia, una muerte de un integrante, puede generar profundos estados de depresión o ansiedad producto que evocan aquella situación ocurrida cuando ella era muy pequeña. Esto genera el desafío para el profesional de acoger a un usuario que constantemente va a estar consultando y para el usuario genera el desafío de aprender a consultar antes que la sintomatología se agrave. En particular la Sra. Lili Arias ha sido atendida en el Prais con distintos psicólogos que han trabajado ahí, así como también por médico general y psiquiatra del programa, tanto el médico como el psiquiatra en ocasiones han debido utilizar apoyo farmacológico para poder superar los episodios de crisis. De acuerdo a todo esto, dentro de su opinión profesional es que la Sra. Lily Arias posee un trastorno de estrés postraumático que se expresa por episodios depresivos y ansiosos cada cierto tiempo, lo cual genera malestar psíquico e interrumpe el normal desarrollo de su vida diaria.

Repreguntado para que diga si en su experiencia profesional estos síntomas que ha descrito respecto de Lili Arias son comunes a los familiares de otros DDDD que le ha tocado atender en el Prais de manera que puedan ser considerados una constante en los casos de familiares de DDDD, responde que sí, perfectamente, e incluso son síntomas bastante diversos. Los principales están asociados a síntomas depresivos y ansiosos, entendiendo esto porque el trauma ocurrió hace muchos años. Sin embargo, sintomatología de estrés postraumático como imágenes intrusivas, pesadillas, síntomas un poco más cognitivos como negación de acontecimientos o sensación de irrealidad de que esto no ha ocurrido son comunes en los familiares e incluso le ha tocado observar y atender también casos con sintomatología mucho más compleja con abuso de alcohol y otras drogas. Además de los síntomas ya descritos, es una comorbilidad de ambas patologías. Lo cual también desde el punto de vista clínico muchas veces como terapeutas no necesitan conocer el relato específico del trauma para saber que existe, sino que basta con acceder a lo descrito sintomáticamente y lo observado en distintos episodios de su vida para ir armando el puzle de la historia. Incluso el programa Prais en su normativa técnica propone y



«RIT»

Foja: 1

plantea a los profesionales que ingresan que el devenir del proceso de salud enfermedad de los usuarios va a ser totalmente distinto para alguien que no vivió una situación de vulneración de derechos humanos. Una patología como puede ser el cáncer en una persona que no sufrió vulneración de DDHH, va a ser totalmente distinto en su manifestación clínica de una persona que sí sufrió vulneración de DDHH.

Repreguntado el testigo para que diga si estos fenómenos de sufrimiento y de angustia que ha descrito son experimentados, según su experiencia solamente por el cónyuge y los hijos del desaparecido o se extienden también a otros miembros de la familia, en este sentido si es un síndrome transgeneracional o solamente para aquellos que experimentaron el evento traumático, y concretamente si sabe qué otros miembros de la familia de Lilian Arias sufren las consecuencias del trauma y cómo lo sabe, responde que es transgeneracional. En su experiencia clínica le ha tocado atender a los hijos y nietos con daño y secuelas evidentes de situaciones de vulneraciones de derechos humanos, lamentablemente en estos casos cuando tratan a los nietos o cónyuges incluso, el cuadro clínico puede ser aún más variado dado que el daño fue hecho a la familia. Cuando desaparece alguien del núcleo familiar se genera algo tremendamente disruptivo que rompe toda estructura, entonces, en el caso de Lili Arias le tocó atender como psicólogo al hijo, llegó a consultar por otra cosa, por otra situación, no directamente relacionada con la situación del abuelo, pero uno al mirar la historia completa de la familia, no siendo parte de ella, mirándola desde afuera, uno puede armar el puzle, es decir tenemos un daño en la hija por la desaparición del padre, un quiebre en su relación como hija, lo cual hoy día que es madre, ese quiebre genera cambio en como ella cría a sus propios hijos y eso sí va a ir generando una dinámica distinta. En su experiencia le ha tocado ver lo que se ha denominado el secreto o el silencio, familias que no hablan de esto, lo que hace aún más complejo el tratamiento.

Contrainterrogado el testigo para que aclare a qué hijo de Lilian Arias tuvo oportunidad de atender, afirma que no recuerda el nombre, atiende a mucha gente, fue hace dos años que lo atendió y sabe que sigue en atenciones esporádicas con el médico del programa porque ahora es el



«RIT»

Foja: 1

coordinador y poco ve, pero no recuerda el nombre. Sabe que en ese tiempo él estaba a cargo de una escuela, en el tema informático y computacional, no sabe si los demás hijos se dedicarán a lo mismo.

El cuarto testigo, en cuanto al punto número 1 de prueba, señala que en el caso de Alamiro Santana, lo conocía por “Chundito”, y lo que sabe es que sí trabajaba en Endesa y ahora la causa de terminó laboral fue porque se imagina no pudo volver al trabajo, porque desapareció.

Indica que le consta esto porque utilizaba los buses Endesa y sabe que trabajaba por turnos porque no pudo ir a jugar un par de veces porque le tocaba trabajar,

Repreguntado para que diga en qué ciudad o repartición de Endesa trabajaba el señor Santana, indica que sabe que trabajaba en la central abanico, pero repartición no sabe, y como la gran mayoría era obrero.

Repreguntado para que diga si sabe cuántos años trabajo en Endesa, responde que lo desconoce.

Repreguntado para que diga cuándo y dónde desapareció don Alamiro Santana, sostiene que fue detenido y desaparecido a partir del 17 septiembre del año 1973, cuando fue bajado de un bus por Carabineros de la tenencia Abanico. Un bus detenido frente a la Tenencia y luego de un rato bajaron al Chundo, por lo que logró apreciar a la distancia a tirones y fue llevado a esta Tenencia.

Repreguntado para que diga si presencié esta detención y dónde estaba, señala que sí, a una cierta distancia, que es la prudente en este tipo de situación, a unos 30 o 40 metros, estaba hacia la costa de la Tenencia.

Repreguntado para que diga si se trababa de un bus de recorrido y si detuvieron a más personas o solo a don Alamiro, indica que desconoce si era bus de recorrido, no reparó en eso, vio solamente que bajaron a Alamiro. Con posterioridad supo que habían detenido a más personas, un amigo de él de apellido Coronado.

Repreguntado para que diga si sabe qué edad recuerda o tenía el señor Santana cuando lo detuvieron, responde que exactamente no, pero alrededor de 21 o 22 años, tenía más de 20.



«RIT»

Foja: 1

En cuanto al punto número 4 de prueba, expone que lo que sabe es que están solicitando que se les coloque un monolito de los que desaparecieron allí, los que fueron detenidos.

Afirma que de partida fueron aislados la familia del resto de los vecinos para no comprometerse, eso trae problemas adicionales como daño psicológico, porque vio mucha gente llorar, sobre todo las mujeres que fueron las más valientes, en el sacrificio de trasnochar, amanecerse en busca de alguna noticia de un familiar, y ese tiempo significaba abandono de su trabajo, por lo que también conlleva un gasto económico, y lo que significa viajar porque hicieron viajar a mucha gente a los Ángeles, a Concepción, después que estaban en las islas Quinquinas, y el inminente riesgo que corrieron porque inclusive el obispo Carlos González una vez le dijo a Rosa Santana que no siguiera buscando a su hermano porque podía pasarle algo a sus hijas. También trae problemas familiares, hubo separaciones de matrimonio, como es el caso de Rosa Santana, el acoso laboral, y como trabajaba en la junta de jardines infantiles también era obligada a rendirle homenaje a Pinochet en la plaza en las visitas que él hacía a la zona, lo que obviamente trae un daño psicológico mayúsculo.

Repreguntado para que diga si puede ampliar la respuesta que dio contestando las preguntas de tacha respecto de que conoció a Rosa Santana visitando cárceles buscando a su hermano, indica que a Rosa Santana la conoció en las cárceles buscando a su hermano, había días de visita en la cárcel de Talca, los años 1978 1980, por ahí más menos la fecha porque él también iba a visitar a gente que estaba detenida. Luego de ese tiempo la relación con ella fue verse de lejos en alguna actividad política respecto de derechos humanos hasta marzo de 1989 en que ella en otra de sus visitas a la cárcel se encuentra con el testigo estando él en calidad de preso político, en la cárcel de Talca. Luego ella siguió visitándolos los días domingos hasta que volvió la democracia, él recuperó su libertad después de cuatro años y han mantenido una relación en las agrupaciones de derechos humanos en las que se integró a trabajar y apoyar.

Contrainterrogado para que diga si lo que ha declarado se refiere a la demandante Rosa Santana, afirma que en específico a ella y en lo general a



«RIT»

Foja: 1

muchas personas que como ella hicieron el mismo recorrido en busca de sus familiares.

La quinta testigo, en cuanto al punto número 1 de prueba, declara que ellos trabajaban en las Cuatro Juntas o los machos, también lo llamaban así, los detenidos desaparecidos fueron trabajadores de Endesa. Señala que a don Manuel lo vio por última vez días antes del golpe, en la micro que los trasladaba a las Cuatro Juntas, a su faena, fue a dejarle el diario El Ciclo, era el trabajo que le correspondía por su papá, ahí estuvo conversando un rato, porque él venía viajando de Talca porque su familia estaba en Talca, a los días después fue el golpe y fue terrible lo que pasó, llegaron los militares, los carabineros, andaban con unas listas buscando a los trabajadores en sus casas, en sus faenas, llegaron los militares, los carabineros, después del golpe con unas listas que andaban ellos, deteniendo a la gente. A algunos los soltaban, otros no volvían simplemente. Expresa que lo que más le afectó fue que después del golpe detuvieron a su vecino don Rogelio Muñoz, lo pasearon en una camioneta todo lleno de alambre púa junto a otros vecinos que no recuerda el nombre, porque quedó choqueada y ellos después lo trasladaron a los Ángeles. Unos no llegaron, otros no volvieron y empezó a desaparecer gente, unos aparecían en la cárcel de los Ángeles. A don Manuel lo detuvieron en octubre, con los vecinos tenían contacto, hablaban escondidos, a él lo soltaron estuvo como 10 días , y volvió a trabajar a sus faenas en noviembre y ahí lo sacaron de su trabajo porque trabajó de noche ese día, sacaban turnos completos para hacerlos desaparecer, hay turnos completos que no aparecieron no más, entre los mismos compañeros que daban aviso de familiares y avisándole a la familia y su papá llamó a la señora Audolia, que era la señora de don Manuel, a ver qué pasaba con su marido, con su hija de 7 meses, eran 5 hijos y buscando por todas partes, iba a la oficina de Endesa, fue al regimiento al hospital donde le decían ella iba, se quedó varios días en su casa y entre los mismos compañeros le aportaban para los pasajes, para tener para sus hijos que habían quedado, se hizo todo para ver si aparecían y no hasta fecha.



«RIT»

Foja: 1

Repreguntada para que diga qué edad tenían los hijos de don Manuel cuando ocurrió todo, señala que la menor tenía 7 meses y el mayor unos 20 y algo.

Repreguntada para que diga si sabe cuánto tiempo trabajó don Manuel Arias en Endesa, afirma que no sabría decir, pero sabe que muchos años.

Repreguntada para que diga si conoció a don Enrique Coussy, a don Alamiro Santana, a don Exequiel Verdejo y a don José Badillo, responde que sí, los ubicaba a todos, eran del mismo partido, era como una comunidad, se conocían todos, tenían de todo, colegios, gimnasios, cine.

Repreguntada para que diga si sabe dónde trabajaban estas personas, indica que en distintas faenas, por ejemplo en las minas que estaban en la central hidroeléctrica El Toro, las Cuatro Juntas que estaba en la laguna del Laja, y alrededor porque estaban las bodegas ahí mismo. El empleador era Endesa.

En cuanto al punto número 4, señala que existen daños psicológicos a la familia, daño físico hasta el momento, están los hijos, increíble que uno traspasa a los nietos eso.

Afirma que las familias sufrieron, toda la familia del entorno.

Precisa que habla por la familia Arias, ella salió a buscar su marido, ella dejó todo por buscar a su marido, la mandaban para allá, de un lugar a otro, ella estuvo más en el sur que en Talca, con sus otros hijos, con su pequeña hija, estaba en todos lados, volvió a Talca sin su marido,

Repreguntada para que diga cómo era la situación económica de la familia antes y después que desapareciera don Manuel, señala que buena, porque él trabaja y Endesa pagaba muy bien en esos años, antes del año 1973, antes que desapareciera don Manuel. Ya después dentro de los mismos compañeros del partido que quedaron se iban ayudando para costear los pasajes y la alimentación.

Repreguntada para que diga si sabe si los hijos de don Manuel pudieron estudiar, señala que sí, hasta cuarto medio llegaron, para sobrevivir ella vendía ensaladitas, puso después un negocio y con eso vivía, tenía una guagua chica.



«RIT»

Foja: 1

Repreguntada para que aclare la afirmación, en qué hechos se funda para decir que el sufrimiento se transmite hasta los nietos, responde que por ejemplo después que falleció la señora Audolia, a los años falleció, ellos quedaron solos, la Lilian tuvo su hijo con la que más tenía contacto era con la Lilian, eran vecinos, ella siguió buscando a su padre, con sus hijos, hasta la fecha busca a su padre, ellos participaban iban a Prais, indica que fue presa política también y siempre se encuentra con ella y con sus hijos que van al psicólogo, al psiquiatra.

SEXTO: Que, por su lado, la demandada Endesa S.A. acompañó los siguientes documentos, en forma y sin objeción acogida:

En el expediente:

- 1.- A fojas 699, copia de acta notarial de fecha 25 de abril de 2017.
- 2.- A fojas 701, copia de acta notarial de fecha 25 de abril de 2017.
- 3.- A fojas 703, copia de acta notarial de fecha 25 de abril de 2017.
- 4.- A fojas 706, copia de certificado de Endesa S.A., de fecha 2 de junio de 2016, en el que se indica que don Patricio Alejandro Muñoz Rivas mantenía a la fecha una relación laboral con dicha empresa.
- 5.- A fojas 707, copia de sentencia del Pleno de la Corte Suprema de fecha 21 de enero de 2013 en causa ingreso corte 10665-2011.
- 6.- A fojas 742, copia de reglamento interno de orden, higiene y seguridad, de empresa Enel S.A., de septiembre de 2016.
- 7.- A fojas 795, copia de sentencia dictada por la Corte Suprema, de fecha 27 de junio de 2007, ingreso corte 309-2006.
- 8.- A fojas 800, copia de sentencia dictada por la Corte Suprema, de fecha 27 de noviembre de 2007, ingreso corte 6196-2006.

En custodia número 2595-2017:

- 1.- Acta notarial de fecha 25 de abril de 2017.
- 2.- Acta notarial de fecha 25 de abril de 2017.
- 3.- Acta notarial de fecha 25 de abril de 2017.

SÉPTIMO: Que, finalmente, por solicitud del demandado Fisco de Chile de fojas 253, se recibieron en autos los siguientes oficios:

- 1.- A fojas 945, oficio remitido por el Instituto de Previsión Social, al que se adjunta anexo con detalle de beneficios de reparación de leyes 19.123 y 19.980, recibidos por los familiares de don Manuel Jesús Arias



«RIT»

Foja: 1

Zúñiga, de don José Oscar Badillo García, de don Plutarco Coussy Benavides y de don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo.

OCTAVO: Que, en autos los demandantes demandan indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, fundada en que sus familiares habrían sido víctimas de delitos de lesa humanidad, en específico, delitos de secuestro calificado cometidos por agentes del Estado. Dirigen la demanda en contra del Fisco de Chile, por la responsabilidad que correspondería al Estado en el caso, y también en contra de Endesa S.A., a la fecha de los hechos empresa Corfo, organismo autónomo perteneciente al Estado de Chile, por la participación de sus ejecutivos en la comisión de dichos delitos.

Por su lado, la demandada Endesa S.A. interpone primeramente la excepción de incompetencia absoluta del tribunal; luego alega la falta de legitimación activa de los demandantes; alega también que la acción respecto de Endesa se encuentra prescrita; se defiende indicando que la demanda debe rechazarse por la improcedencia y/o inaplicabilidad de las normas en las que se funda; señala que debe ser rechazada por ser defectuosa en su planteamiento; y, por último, alega que en el caso no se reúnen los presupuestos que configuran la responsabilidad extracontractual respecto de Endesa S.A.

A su turno, el Consejo de Defensa del Estado se defiende interponiendo excepción de reparación integral; alega la improcedencia de la indemnización por preterición legal respecto de la actora doña Rosa Santana Figueroa; interpone la excepción de prescripción extintiva; y alega también la improcedencia de las indemnizaciones respecto de los actores que comparecen en representación de sus familiares fallecidos.

NOVENO: Que, en primer término, corresponde hacerse cargo de la excepción de incompetencia opuesta por la demandada Endesa S.A.

Al efecto, sostiene que los perjuicios alegados en su contra derivarían de la relación laboral entre Endesa y las víctimas, por lo que la presente acción sería en realidad una de despido injustificado, siendo el tribunal competente para conocer de la misma, el Juzgado de Letras del Trabajo correspondiente.

DÉCIMO: Que, cabe señalar que lo que se demanda en autos es una indemnización de perjuicios por la responsabilidad extracontractual que



Foja: 1

emanaría de los delitos de lesa humanidad que habrían sufrido los familiares de los demandantes.

En tal contexto, que para configurar el daño emergente y el lucro cesante se invoquen los conceptos de indemnización sustitutiva por aviso previo, indemnización por años de servicio y feriado proporcional, no la transforma en una demanda por despido injustificado ni abarca otro aspecto de competencia de un Juzgado de Letras del Trabajo, razón por la cual la excepción de incompetencia será desestimada.

DÉCIMO PRIMERO: Que, establecido lo anterior, y a fin de resolver el asunto sometido a conocimiento de esta magistratura, en primer lugar se debe establecer las circunstancias de la desaparición de don Manuel Jesús Arias Zúñiga, de don Alamiro Santana Figueroa, de don José Oscar Badillo García, de don Plutarco Coussy Benavides y de don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, y en particular, si existió participación de agentes del Estado y si se encuentran reconocidos como víctimas de violación a los derechos humanos por algún órgano del Estado o por alguno de los informes de las Comisiones creadas por éste para dicho efecto.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 91, 157 y 183, respectivamente, consta la sentencia de primera instancia dictada por don Jorge Zepeda Arancibia, Ministro de Fuero, en la causa rol 2.182-1998 (episodio Endesa), conjuntamente con la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que se pronuncia respecto de las apelaciones a dicha sentencia y la subsiguiente sentencia de la Corte Suprema, en las que reconoce que los familiares de los demandantes fueron víctima de delitos de lesa humanidad perpetrados por agentes del Estado, condenándose a don Ismael Humberto Espinosa Silva como autor del delito de secuestro calificado de don Manuel Arias Zúñiga, y a don Patricio Gustavo Martínez Moena y a don Walter Klug Rivera, como cómplice de los delitos de secuestro calificado de don Alamiro Santana Figueroa, de don José Oscar Badillo García, de don Plutarco Coussy Benavides y de don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo.

Adicionalmente, es un hecho público que el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), reconoció la condición de detenido desaparecido de don Manuel Jesús Arias Zúñiga (página 31, volumen II, tomo 3; desaparecido en noviembre de 1973), de



«RIT»

Foja: 1

don José Oscar Badillo García (página 39, volumen II, tomo 3; desaparecido en noviembre de 1973), de don Plutarco Enrique Coussy Benavides (página 104, volumen II, tomo 3; desaparecido en septiembre de 1973), de don Alamiro Segundo Santana Figueroa (página 351, volumen II, tomo 3; desaparecido en septiembre de 1973) y de don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo (página 401, volumen II, tomo 3; desaparecido en noviembre de 1973).

DÉCIMO TERCERO: Que, de acuerdo a lo señalado precedentemente, se tiene por acreditado que don Manuel Jesús Arias Zúñiga, don Alamiro Santana Figueroa, don José Oscar Badillo García, don Plutarco Coussy Benavides y don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo fueron víctimas del delito de secuestro calificado por parte de agentes del Estado de Chile, siendo todos, en consecuencia, víctimas de delitos de lesa humanidad.

DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto a la participación de Endesa en la desaparición de las víctimas previamente referidas, los demandantes sostienen que los agentes de Endesa jugaron un rol fundamental en la persecución de sus trabajadores, actuando en colaboración con los agentes represivos en la zona (página 66 de la demanda, tercer párrafo). Señalan a su vez que al ser las víctimas trabajadores de Endesa, sus relaciones estaban directamente reguladas por un contrato laboral y por el Código del Trabajo vigente a la época, todos los cuales les fueron conculcados con graves perjuicios a sus familias (página 78, último párrafo). Por su parte, en el escrito de réplica agrega que la “detención no habría sido posible sin la connivencia de los ejecutivos y administradores de las respectivas”; “debe soportar la responsabilidad que le cabe al permitir que sus trabajadores hayan sido detenidos cuando se encontraban en dependencias, transportes o campamentos de la empresa”, lo que “hace evidente la responsabilidad de los ejecutivos de Endesa, sea por acción (delación o entrega de trabajadores a organismos represivos) sea por omisión del deber de garantizar la indemnidad de sus trabajadores”(página 390).

DÉCIMO QUINTO: Que, al efecto, resulta necesario señalar que en la demanda no se indican los nombres de los ejecutivos de Endesa que



Foja: 1

habrían participado en los hechos de que se trata, ni la forma concreta en que la participación de tales agentes se habría llevado a cabo.

Por otra parte, no se ha rendido ninguna prueba en orden a acreditar lo señalado, no bastando el sólo hecho de haber sido las víctimas trabajadores de la demandada o haber sido detenidas en sus dependencias.

Por consiguiente, no siendo posible determinar los hechos de los que emanaría la culpa atribuida a Endesa S.A., ni haberse rendida prueba al efecto, la demanda en su contra será desestimada.

DÉCIMO SEXTO: Que, estando acreditadas las circunstancias señaladas en el motivo décimo tercero, y habiéndose rechazado la demanda respecto de Endesa S.A., corresponde dilucidar y resolver las alegaciones sostenidas por el Consejo de Defensa del Estado en su contestación.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el Consejo de Defensa del Estado opuso en primer término las alegaciones de improcedencia de la indemnización dineraria por haber sido ya indemnizados los demandantes, respecto de los demandantes doña Lilian Marilyn Arias Vergara, doña Angelina del Pilar Arias Vergara, don Pedro Luis Arias Vergara, doña Irene Quichel Carrasco, don Roberto Exequiel Verdejo Quichel, doña Edith Elizabeth Verdejo Quichel, don Leonel Omar Verdejo Quichel, doña Ariela del Carmen Verdejo Quichel, doña Mireya Adriana Rivera Veliz, don Enrique Antonio Coussy Rivera, doña Carolina Antonieta Coussy Rivera, doña Gisela Angélica Coussy Rivera, don Alexseis Wladimir Coussy, doña Irma Inés Badillo Mellado y don Raúl Vicente Badillo Mellado, así como la de improcedencia por preterición legal del demandante y por haber sido ya reparada mediante un conjunto de reparaciones de diverso orden, respecto de la demandante doña Rosa Inés Santana Figueroa.

DÉCIMO OCTAVO: Que el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos durante el régimen militar, a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Que, al respecto, la ley 19.123 y sus modificaciones, y las reparaciones simbólicas a que alude el demandado constituyen más bien un beneficio de carácter social tendiente a cumplir, además, con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, más no una indemnización de daño



«RIT»

Foja: 1

material y/o moral sufridos por los familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos, pues no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar el sufrimiento por la pérdida de un familiar.

Por su parte, cabe agregar que la acción indemnizatoria de estos autos está reducida al daño moral del actor, el cual no sólo lo sufren los padres e hijos de las víctimas, sino que también el entorno familiar más amplio que ha padecido por su pérdida, todo lo cual lleva a desestimar las alegaciones deducida por la parte demandada.

DÉCIMO NOVENO: Que, el Consejo de Defensa del Estado alega también la improcedencia de las indemnizaciones por daño moral respecto de los demandantes don Manuel Alejandro Arias Acevedo, quien demanda en representación de su padre fallecido, don Manuel Alejandro Arias Vergara; de los demandantes doña María Inés Contreras Alvear, don Manuel Jesús Arias Contreras, doña Yesenia del Pilar Arias Contreras y doña Valeria Andrea Arias Contreras, quienes demandan en representación de su cónyuge y padre fallecido, don Raúl Arias Vergara; y de las demandantes doña Guillermina Carmen Mellado Badillo y doña Tais Elena Gallegos Badillo, quienes demandan en representación de su madre fallecida, doña Marta Jesús Badillo Mellado. Indica que se reclamaría una indemnización para la sucesión de quienes sufrieron directamente el daño moral, lo que sería improcedente según la ley.

VIGÉSIMO: Que, es necesario indicar que la acción para solicitar la indemnización del daño moral tiene un carácter personalísimo, lo anterior por cuanto a través de ella se busca resarcir el sufrimiento, dolor soportado por la propia víctima en su esfera personal, en sus sentimientos o afectos. Tal origen, del cual no es posible abstraerse, otorga una característica especial al mecanismo legal dispuesto para exigir la reparación, cuestión a la que no obsta el hecho de que la indemnización en sí presente un carácter netamente pecuniario.

De esta manera, atendido dicho carácter personalísimo, la acción para solicitar la indemnización del daño moral es intransmisible, por lo que no cabe estimar que ingrese en el patrimonio de los demandantes herederos, conforme lo dispuesto en los artículos 951 y 1097 de nuestro Código Civil.



«RIT»

Foja: 1

Conforme con lo anterior, la demanda deberá ser desestimada respecto de los demandantes don Manuel Alejandro Arias Acevedo, quien demanda en representación de su padre fallecido, don Manuel Alejandro Arias Vergara; respecto de los demandantes doña María Inés Contreras Alvear, don Manuel Jesús Arias Contreras, doña Yesenia del Pilar Arias Contreras y doña Valeria Andrea Arias Contreras, quienes demandan en representación de su cónyuge y padre fallecido, don Raúl Arias Vergara; y respecto de las demandantes doña Guillermina Carmen Mellado Badillo y doña Tais Elena Gallegos Badillo, quienes demandan en representación de su madre fallecida, doña Marta Jesús Badillo Mellado.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, seguidamente cabe hacerse cargo de la excepción de prescripción extintiva civil opuesta por el Fisco de Chile.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas, por Resolución N° 2.391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, en vigor desde el año 1970, aprobó la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad”, la que dispuso:

“Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuren entre los delitos de derecho internacional más grave.

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacionales

Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes,

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal,

Convienen en lo siguiente:



Artículo 1º: Son imprescriptibles:

a) Los crímenes de guerra, según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de derecho internacional de Núremberg confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra de 1949.

b) Los crímenes de lesa humanidad. Cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de Derecho Internacional de Núremberg y confirmadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el apartheid y el genocidio.”

A continuación, el artículo 2º de este instrumento declara que la Convención se aplica, sin distinción, a las autoridades del estado y a particulares, ya sea que hayan participado como autores, cómplices o hayan incitado directamente a la perpetración de esos crímenes y cualquiera sea el grado de desarrollo.

VIGÉSIMO TERCERO Que con posterioridad, en el año 1973, la misma Asamblea General aprobó la Resolución N° 3.074 (XXVIII), de fecha 3 de diciembre de 1973, “Principios de cooperación internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, en la que señala lo siguiente:

“Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas.”

VIGÉSIMO CUARTO Que, en este sentido, se debe tener presente que si bien la citada Convención no ha sido ratificada por el Estado de Chile, surge en la actualidad con categoría de norma de *ius cogens*, o principios generales del derecho penal internacional, cuya obligatoriedad en derecho interno se encuentra prescrita por la Constitución Política de la República (artículo 5, inciso segundo), de modo tal que el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de



«RIT»

Foja: 1

guerra, así como el aseguramiento objetivo y expreso de los derechos humanos, resulta indiscutible e imperativo para los tribunales nacionales.

A mayor abundamiento, siendo nuestro país un Estado Parte de la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra obligado a cumplir de buena fe las resoluciones de la Asamblea General.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, además, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos –artículos 4 y 5– como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas –artículos 7 al 10–, ratificados por Chile e incorporados a su derecho interno, prohíben en la práctica los crímenes contra la humanidad.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, en relación con la supremacía de los tratados internacionales sobre el derecho interno, es preciso hacer constar que la modificación al antes citado artículo 5° de la Constitución Política de la República tuvo por objeto precisamente reforzar la protección de los derechos humanos, al disponer como deber de los órganos del Estado, respetar y promover tales derechos.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que, como se señaló en considerandos anteriores, la presente acción es de carácter reparatoria por derivar de la violación a los derechos humanos en crímenes de lesa humanidad, la que se rige por preceptos del derecho internacional que consagran la imprescriptibilidad, la que debe regir tanto en el ámbito penal como en el civil.

De seguir la tesis del demandado, esto es, aplicar a este caso la prescripción del derecho privado, implicaría permitir que el Estado evitara cumplir su deber y se negaran derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, por quien, como se señaló precedentemente, es el constitucionalmente obligado a resguardarlos, lo que lleva a rechazar la excepción de prescripción.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que, por último, en relación al daño moral objeto de esta acción, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular, debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, y por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.



«RIT»

Foja: 1

Así, la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Por otra parte, el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, como algunos autores lo sostienen, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

VIGÉSIMO NOVENO: Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral, los demandantes se valieron, primeramente, de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción.

Así, se acompañó certificado de nacimiento de la demandante doña **Lilian Arias Vergara**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hija respecto de la víctima don **Manuel Jesús Arias Zúñiga**.

Se acompañó también certificado de nacimiento de la demandante doña **Angelina del Pilar Arias Vergara**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hija respecto de la víctima don **Manuel Jesús Arias Zúñiga**.

Se acompañó también certificado de nacimiento del demandante don **Pedro Luis Arias Vergara**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hijo respecto de la víctima don **Manuel Jesús Arias Zúñiga**.

Se acompañó también certificado de nacimiento de la demandante doña **Rosa Inés Santana Figueroa**, así como de certificado de nacimiento de la víctima don **Alamiro Santana Figueroa**, a partir del cual se acredita que la demandante en cuestión era hermana de la víctima referida.

Se acompañó a su vez certificado de nacimiento de don **Roberto Exequiel Verdejo Quichel**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hijo respecto de la víctima don **Exequiel del Carmen Verdejo**.



«RIT»

Foja: 1

Se acompañó a su vez certificado de nacimiento de doña **Edith Elizabeth Verdejo Quichel**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hija respecto de la víctima don **Exequiel del Carmen Verdejo**.

Se acompañó a su vez certificado de nacimiento de don **Leonel Omar Verdejo Quichel**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hijo respecto de la víctima don **Exequiel del Carmen Verdejo**.

Se acompañó a su vez certificado de nacimiento de doña **Ariela del Carmen Verdejo Quichel**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hija respecto de la víctima don **Exequiel del Carmen Verdejo**.

A su vez, de los cuatro certificados previamente anotados, es posible concluir que la demandante doña **Irene Quichel Carrasco**, tuvo cuatro hijos con la víctima don **Exequiel del Carmen Verdejo** (nacidos en los años 1960, 1961, 1963 y 1965). Por su lado, en el oficio remitido por el Instituto de Previsional Social, rolante a fojas 945, consta que doña Irene Quichel Carrasco fue beneficiaria por concepto de Ley 19.123 del causante don Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, como madre de cuatro hijos de la víctima. Finalmente, la demandante indica en su relato que conoció a don Exequiel Verdejo en el año 1958 y convivió con él hasta que fue detenido en la casa común, cuestión que es la misma que se recoge en el portal Memoria Viva, en el que se precisa que se informa a la conviviente que sólo se lo llevaron para que la víctima prestara una declaración.

A partir de lo anterior, se puede acreditar la calidad de conviviente de la demandante doña **Irene Quichel Carrasco** respecto de la víctima don **Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo**, al momento de su desaparición.

Se acompañó también certificado de matrimonio de la demandante doña **Mireya Adriana Rivera Veliz**, a partir del cual se acredita que estuvo casada con la víctima don **Plutarco Enrique Coussy Benavides**.

Se acompañó también certificado de nacimiento de la demandante doña **Gisela Angélica Coussy Rivera**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hija respecto de la víctima don **Plutarco Enrique Coussy Benavides**.

Se acompañó también certificado de nacimiento del demandante don **Enrique Antonio Coussy Rivera**, instrumento con el que se puede



«RIT»

Foja: 1

acreditar su calidad de hijo respecto de la víctima don **Plutarco Enrique Coussy Benavides**.

Se acompañó también certificado de nacimiento del demandante don **Alexseis Wladimir Coussy Rivera**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hijo respecto de la víctima don **Plutarco Enrique Coussy Benavides**.

Se acompañó también certificado de nacimiento de la demandante doña **Carolina Antonieta Coussy Rivera**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hija respecto de la víctima don **Plutarco Enrique Coussy Benavides**.

Se acompañó a su vez certificado de nacimiento de la demandante doña **Irma Inés Badillo Mellado**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hija respecto de la víctima don **José Oscar Badilla García**.

Se acompañó a su vez certificado de nacimiento del demandante don **Raúl Vicente Badillo Mellado**, instrumento con el que se puede acreditar su calidad de hijo respecto de la víctima don **José Oscar Badilla García**.

TRIGÉSIMO: Que, en el mismo orden de ideas, a fin de acreditar el daño moral alegado, los demandantes se valieron de la siguiente prueba documental y testimonial:

En cuanto a los demandantes familiares de la víctima don Manuel Arias Zúñiga, se acompañó copia de informe psicológico de la demandante doña Lilian Arias Vergara, de fecha 3 de septiembre de 2015, elaborado por don Jorge Andrés Rojas Bravo, psicólogo, en el que se resume que “La Sra. Lilian Arias desde su ingreso al Prais se ha mantenido en controles frecuentes con profesionales de salud mental, realizándose en distintas etapas del ciclo vital y de acuerdo a sus necesidades de salud, manifestando sistematología ansioso-depresiva, asociada a situación represiva”. También se acompañó certificado médico psiquiátrico de fecha 3 de junio de 2015 de la misma demandante, en el que se señala que la paciente ingresó al programa Prais el 2006, y que tiene actualmente diagnóstico de trastorno distímico en tratamiento con psicofármacos y psicoterapia.



Foja: 1

Se acompañó a du vez informe médico psiquiátrico, de fecha 2 de febrero de 2017, correspondiente a don Pedro Arias Vergara, en el que se indica que se indica que padece de trastorno de estrés post traumático.

También rindieron prueba testimonial, consistente en la declaración de los testigos don Jorge Andrés Rojas Bravo, psicólogo del programa Prais, y doña Ana María Riveros Tapia.

Don Jorge Andrés Rojas Bravo señaló que la demandante doña Lilian Arias Vergara “posee un trastorno de estrés postraumático que se expresa por episodios depresivos y ansiosos cada cierto tiempo, lo cual genera malestar psíquico e interrumpe el normal desarrollo de su vida diaria”, precisando que tales síntomas son comunes a los familiares de otros detenidos desaparecidos.

El mismo testigo se refiere de modo general a las secuelas psicológicas presentes en los pacientes familiares de detenidos desaparecidos, indicando que “no es extraño que estos pacientes consulten en reiteradas oportunidades, puede ser dentro del mismo año o en distintos períodos de su vida ante eventos que les han gatillado recuerdos de lo vivido como traumático”. Añade luego sobre los síntomas presentes en estos tipos de pacientes que “los principales están asociados a síntomas depresivos y ansiosos, entendiendo esto porque el trauma ocurrió hace muchos años. Sin embargo, sintomatología de estrés postraumático como imágenes intrusivas, pesadillas, síntomas un poco más cognitivos como negación de acontecimientos o sensación de irrealdad de que esto no ha ocurrido son comunes en los familiares e incluso le ha tocado observar y atender también casos con sintomatología mucho más compleja con abuso de alcohol y otras drogas”

Por su lado, doña Ana María Riveros Tapia señala que “existen daños psicológicos a la familia, daño físico hasta el momento, están los hijos, increíble que uno traspasa a los nietos eso”. Agrega sobre dicha familia que “ella salió a buscar su marido, ella dejó todo por buscar a su marido, la mandaban para allá, de un lugar a otro, ella estuvo más en el sur que en Talca, con sus otros hijos, con su pequeña hija, estaba en todos lados, volvió a Talca sin su marido”.



En cuanto a la demandante doña Rosa Santana Figueroa, familiar de la víctima don Alamiro Santana Figueroa, se acompañó informe médico de fecha 6 de mayo de 2015, emitido por médico del programa Prais, en el que se indica que ha recibido un tratamiento multidisciplinario con médico general, psicólogo y psiquiatra, presentando una historia con distintos diagnósticos, entre los cuales se encuentra depresión severa, recurrente y prolongada.

También se acompaña informe psicológico de la misma demandante, en el que se indica que “en cuanto a los recuerdos asociados a la figura de su hermano que se encuentra en calidad de desaparecido, mantiene una inquietud constante, situando este evento como un elemento desestructurante dentro de su núcleo familiar y personal, generando diferentes consecuencias y costos emocionales, para ella”.

Rindieron también prueba testimonial a su respecto, consistente en la declaración del testigo don Pedro Fernando Muñoz Moya, quien indicó que “fueron aislados la familia del resto de los vecinos para no comprometerse, eso trae problemas adicionales como daño psicológico, porque vio mucha gente llorar, sobre todo las mujeres que fueron las más valientes, en el sacrificio de trasnochar, amanecerse en busca de alguna noticia de un familiar”. Afirma respecto de la doña Rosa Santana Figueroa, que “inclusive el obispo Carlos González una vez le dijo a Rosa Santana que no siguiera buscando a su hermano porque podía pasarle algo a sus hijas”, y que “hubo separaciones de matrimonio, como es el caso de Rosa Santana”.

En cuanto a la familia de la víctima don Plutarco Coussy Benavides, acompañaron certificado suscrito por el Director Ejecutivo del Centro de Investigación en Salud Mental y Derechos Humanos, de fecha 21 de junio de 2016, en el que se informan antecedentes respecto del daño moral, social y las secuelas médico psicológicas sufridas por los familiares de la víctima referida. Se indica que los hijos de la víctima, doña Gisela y don Alexseis, y su cónyuge, doña Mireya, recibieron durante varios años tratamiento psicológico en su programa. Se señala que durante todos los años que la familia se dedicó a la búsqueda por justicia y verdad, ésta fue víctima de acoso, seguimiento, amedrentamiento y tortura de tipo psicológica



«RIT»

Foja: 1

También contaron con prueba testimonial sobre el daño moral sufrido por dicha familia, consistente en la declaración de doña Virginia Teresa Vega, quien indicó que “la familia y los hijos en particular sufrieron daños, ya que los hijos no se pudieron educar adecuadamente, estuvieron con psicólogo y una de sus hijas, Gisela, hasta el día de hoy permanece con tratamiento psiquiátrico”.

En cuanto a la familia de la víctima don Exequiel Verdejo Verdejo, se acompaña ficha clínica del Hospital de Talca de la demandante doña Irene Quichel Carrasco, en la que puede observarse el diagnóstico clínico de depresión.

Por último, en cuanto a los familiares de la víctima don José Badillo García, se presentó informe psicológico, de fecha 20 de enero de 2017, correspondiente a don Raúl Vicente Badillo Mellado, suscrito por doña Paula Veliz Bernt, psicóloga Minsal.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que, sin perjuicio de la prueba rendida respecto a la existencia del daño moral en el caso de marras, la cual se pondera y valora conforme lo dispuesto en los artículos 342, 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil, se debe tener presente la gravedad del hecho ilícito, sus consecuencias y las circunstancias en que los hechos acontecieron.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que de acuerdo a lo razonado precedentemente, esta Juez regula la indemnización por concepto de daño moral prudencialmente en la suma de \$45.000.000 para doña Lilian Arias Vergara, hija de la víctima don Manuel Jesús Arias Zúñiga; \$45.000.000 para doña Angelina del Pilar Arias Vergara, hija de la víctima don Manuel Jesús Arias Zúñiga; \$45.000.000 para don Pedro Luis Arias Vergara, hijo de la víctima don Manuel Jesús Arias Zúñiga; \$15.000.000 para doña Rosa Inés Santana Figueroa, hermana de la víctima don Alamiro Santana Figueroa; \$60.000.000 para doña Irene Quichel Carrasco, conviviente y madre de cuatro hijos de la víctima don Exequiel Verdejo Verdejo; \$45.000.000 para don Roberto Exequiel Verdejo Quichel, hijo de la víctima don Exequiel Verdejo Verdejo; \$45.000.000 para doña Edith Elizabeth Verdejo Quichel, hija de la víctima don Exequiel Verdejo Verdejo; \$45.000.000 para don Leonel Omar Verdejo Quichel, hijo de la víctima



«RIT»

Foja: 1

don Exequiel Verdejo Verdejo; \$45.000.000 para doña Ariela del Carmen Verdejo Quichel, hija de la víctima don Exequiel Verdejo Verdejo; \$60.000.000 para doña Mireya Adriana Rivera Veliz, esposa de la víctima don Plutarco Coussy Benavides; \$45.000.000 para doña Gisela Angélica Coussy Rivera, hija de la víctima don Plutarco Coussy Benavides; \$45.000.000 para don Enrique Antonio Coussy Rivera, hijo de la víctima don Plutarco Coussy Benavides; \$45.000.000 para don Alexseis Wladimir Coussy Rivera, hijo de la víctima don Plutarco Coussy Benavides; \$45.000.000- para doña Carolina Antonieta Coussy Rivera, hija de la víctima don Plutarco Coussy Benavides; \$45.000.000- para doña Irma Inés Badillo Mellado, hija de la víctima don José Oscar Badillo García; y \$45.000.000.- para don Raúl Vicente Badillo Mellado, hijo de la víctima don José Oscar Badillo García.

TRIGÉSIMO TERCERO: Que, en lo referente a la reajustabilidad de la indemnización por daño moral, ésta se reajustará de conformidad a la variación que experimente el I.P.C desde el día en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta el momento del pago efectivo, por cuanto el daño moral es evaluado por el juez en la sentencia, de ahí que las perniciosas consecuencias de la desvalorización monetarias sólo pueden empezar a producirse desde la fecha de la sentencia que regula el daño en comento.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que, respecto de los intereses, las sumas contempladas en lo resolutivo del fallo devengarán el interés corriente desde la fecha en que la sentencia quede firme o ejecutoriada y hasta la época de su pago efectivo.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que, finalmente, en relación a la solicitud de que se condene al Fisco de Chile a publicar en un diario de circulación nacional lo “sustancial de lo fallado en los autos criminales” relacionados, con expresa mención de que las víctimas eran trabajadores de Endesa, cabe indicar que tal petición excede el marco reparatorio que incumbe a la indemnización de perjuicios, conforme el sistema consagrado en nuestro ordenamiento civil, razón por la cual dicha petición deberá ser desestimada.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes, 222, 224, 236, 951, 1097, 1437, 1698, 1700 y 1706 del Código



«RIT»

Foja: 1

Civil, artículos 144, 160, 170, 341, 342, 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil, Constitución Política de la República, Convención Americana de Derecho Humanos y Convenio de Ginebra de 1949, **se declara:**

I.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda deducida en contra de Empresa Nacional de Electricidad S.A (Endesa).

II.- Que se rechaza la demanda deducida por el demandante don Manuel Alejandro Arias Acevedo, en representación de don Manuel Alejandro Arias Vergara; por los demandantes doña María Inés Contreras Alvear, don Manuel Jesús Arias Contreras, doña Yesenia del Pilar Arias Contreras y doña Valeria Andrea Arias Contreras, todos en representación de don Raúl Arias Vergara; y por los demandantes doña Guillermina Carmen Mellado Badillo y doña Tais Elena Gallegos Badillo, en representación de doña Marta Jesús Badillo Mellado.

III.- Que, se rechaza la solicitud de condenar al Fisco de Chile a publicar un inserto en un diario de circulación nacional.

IV.- Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta en lo principal de fojas 1, sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar, a título de daño moral, la suma de \$45.000.000 para doña Lilian Arias Vergara, hija de la víctima don Manuel Jesús Arias Zúñiga; \$45.000.000 para doña Angelina del Pilar Arias Vergara, hija de la víctima don Manuel Jesús Arias Zúñiga; \$45.000.000 para don Pedro Luis Arias Vergara, hijo de la víctima don Manuel Jesús Arias Zúñiga; \$15.000.000 para doña Rosa Inés Santana Figueroa, hermana de la víctima don Alamiro Santana Figueroa; \$60.000.000 para doña Irene Quichel Carrasco, conviviente y madre de cuatro hijos de la víctima don Exequiel Verdejo Verdejo; \$45.000.000 para don Roberto Exequiel Verdejo Quichel, hijo de la víctima don Exequiel Verdejo Verdejo; \$45.000.000 para doña Edith Elizabeth Verdejo Quichel, hija de la víctima don Exequiel Verdejo Verdejo; \$45.000.000 para don Leonel Omar Verdejo Quichel, hijo de la víctima don Exequiel Verdejo Verdejo; \$45.000.000 para doña Ariela del Carmen Verdejo Quichel, hija de la víctima don Exequiel Verdejo Verdejo; \$60.000.000 para doña Mireya Adriana Rivera Veliz, esposa de la víctima don Plutarco Coussy Benavides; \$45.000.000 para doña Gisela Angélica



«RIT»

Foja: 1

Coussy Rivera, hija de la víctima don Plutarco Coussy Benavides; \$45.000.000 para don Enrique Antonio Coussy Rivera, hijo de la víctima don Plutarco Coussy Benavides; \$45.000.000 para don Alexseis Wladimir Coussy Rivera, hijo de la víctima don Plutarco Coussy Benavides; \$45.000.000- para doña Carolina Antonieta Coussy Rivera, hija de la víctima don Plutarco Coussy Benavides; \$45.000.000- para doña Irma Inés Badillo Mellado, hija de la víctima don José Oscar Badillo García; y \$45.000.000.- para don Raúl Vicente Badillo Mellado, hijo de la víctima don José Oscar Badillo García, todo lo anterior más los reajustes e intereses reseñados en los motivos 33° y 34° del presente fallo.

V.- Que cada parte soportará sus costas.

Regístrese y notifíquese.-

Pronunciada por María Soledad Jorquera Binner, Juez Titular.-

Autoriza doña María Cristina Ramos Jara, Secretaria Subrogante.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veinticuatro de Diciembre de dos mil diecinueve**

